Causa Rol N° 18.782

**Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio
Mesa Latorre.**

Temuco, veintiocho de julio de dos mil veintidós. -

VISTOS:

ÍNDICE

I.	Relación de la Sentencia	2-5
II.	Resumen ejecutivo	5-6
III.	Actuarios de tramitación y dato técnico	6
IV.	Ubicación de Doctrina	6
V.	Ubicación de Jurisprudencia	7
VI.	Reflexiones de lesa humanidad	7
VII.	En cuanto a la Acción Penal:	
	A. Declaraciones (49)	7-68
	B. Documentos (30)	69-77
	Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	77-80
	Calificación jurídica de los hechos.....	80-83
	Concepto de Lesa Humanidad.....	83-86
	C. Declaraciones indagatorias:	
	Declaración indagatoria de José Tomás Torres Osses	86-88
	Análisis de la declaraciones de José Tomás Torres Osses	88-125
	D. En Cuanto a las Defensas:	
	Defensa del abogado Alexander Schneider Oyanedel , en representación de José Tomas Torres Osses	125-131
	E. Consideraciones previas al análisis de la defensa:	
	A. Obligación de Investigar	131-147
	B. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán	147-157
	C. Estado de Derecho	157-162

F. Análisis de la defensa específica:	
Análisis de la defensa específica de José Tomás Torres Osses	162-166
G. Agregación de certificado de defunción de José Tomas Torres Osses	167
VIII. En cuanto a la Acción Civil:	
Demanda civil interpuesta por el abogado Héctor Méndez Molina , en representación de María Glady San Martín-.....	168-171
Contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer , en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	171-178
Análisis de la contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	178-188
Acreditación probatoria del daño moral.....	188-190
Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....	191
IX. Aspectos Resolutivos	191-192

Para los efectos de esta sentencia la Comisión Nacional de reparación y reconciliación se abreviará con las siglas **CNRR** y la Policía de Investigaciones como **PDI**.

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 18.782** del ingreso del Juzgado de Letras de Curacautín, para investigar los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. JOSÉ TOMÁS TORRES OSSES, R.U.N. 4.833.943-3, chileno, natural de Curacautín, casado, 78 años de edad, Sargento Segundo (r) Carabineros de Chile, domiciliado Parcela Santo Tomás s/n, sector Alto Manchurria, comuna de Curacautín, nunca antes condenado (extracto filiación y antecedentes de fs. 1.092 y de fs. 1.247 a 1.248 Tomo IV).

Se inició la causa por querrela criminal presentada por Carlos Marcelo Oliva Troncoso, presidente de la Organización comunitaria funcional denominada “Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía” en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de

cómplices, encubridores por el delito de secuestro calificado consumado cometido en la persona de Julio San Martín San Martín, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas a fin de que se investigaran los hechos en los que habrían participados agentes del Estado a **fs. 1 a fs. 6 (Tomo I)**.

A fs. 220 a fs. 231 vuelta (Tomo I), con fecha 07 de enero de 2014, interpuso **querrela criminal** Rodrigo Ubilla Mackenney, subsecretario del interior, en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea en calidad autores, cómplices y encubridores de del delito de secuestro calificado consumado, cometido en la persona de Julios San Martín San Martín, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 1.094 a fs. 1.101 (Tomo IV), con fecha 06 de mayo de 2019, se **sometió a proceso** a **LUIS SEGUNDO ORTIZ NOVOA**, como autor de los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado en la persona de Julios San Martín San Martín, perpetrados en la comuna de Curacautín en el mes de septiembre de 1973. Otorgándole la medida cautelar personal de arresto domiciliario total. De igual forma se sometió a **proceso y prisión preventiva** a **JOSÉ TOMÁS TORRES OSSES** como autor de los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado en la persona de Julios San Martín San Martín, perpetrados en la comuna de Curacautín en el mes de septiembre de 1973. Se decretó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.

A fojas 1.132 (Tomo IV), con fecha 28 de mayo de 2019, la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco confirma el auto de procesamiento y sus respectivas medidas cautelares.

A fojas 1.253 a 1.271 (Tomo IV), el abogado Alexander Schneider en representación de José Tomas Torres Osses, solicita libertad provisional con caución o sustitución por otra cautelar. A Fs. 1.272 (Tomo IV) el tribunal no hace lugar a la petición, por lo cual a fojas. 1.278 el procesado apela. A fojas 1.283 a 1.283 vta (Tomo IV) la Ilma Corte de Apelaciones **revoca** la resolución de 03 de octubre de 2019 que rola a fs. 1.272 y **decreta la mediad cautelar de arresto domiciliario total**, con fecha 07 de octubre de 2019.

A fs. 1.390 (Tomo IV), con fecha 15 de abril de 2020 se declaró el **sobreseimiento parcial y definitivo** en esta causa respecto del procesado Luis Segundo Ortiz Novoa por constar en el proceso que presenta un deterioro grave de funciones corticales superiores como memoria, atención y enjuiciamiento crítico, de acuerdo a lo señalado en informe pericial psiquiátrico remitido por el Servicio Médico Legal de Temuco, que consta a fs. 1.376 (Tomo IV).

A fs. 1.396 (Tomo IV), con fecha 04 de mayo de 2020, **se declaró cerrado el sumario.**

A **fs. 1.408 a fs. 1.414 (Tomo IV)**, con fecha 10 de junio de 2020, se dictó **auto acusatorio en** contra de **JOSÉ TOMÁS TORRES OSSES**, como autor de los delitos de Secuestro simple, Apremios ilegítimos y Homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Julio San Martín San Martín, perpetrados en la comuna de Curacautín, en el mes de septiembre de 1973.

A **fs. 1.455 a fs. 1.469 (Tomo IV)**, el abogado Héctor Méndez Molina, en representación de doña María Gladys San Martín, presenta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Álvaro Sáez Willer, abogado procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma de \$250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos) o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes de acuerdo al IPC desde la fecha de notificación de ésta demanda, más interés legales y las costas del juicio.

A fs. 1.474 a 1.480 (Tomo IV) la abogada Carolina Contreras Rivera, abogada en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formula acusación particular en contra de José José Tomás Torres Osses como autor de los delitos de secuestro simple, aplicación de tormentos y homicidio calificado en contra de Julio San Martín San Martín, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 141 inciso primero, 150 N° 1 y 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal de la época, condenándolo en definitiva e imponiendo las penas de **5 años de presidio menos en su grado máximo** por el delito de secuestro simple, **5 años de presidio menor en su grado máximo** por el delito de aplicación de tormentos y **20 años de presidio mayor en su grado máximo** por el delito de homicidio calificado, más las sanciones accesorias legales, con costas.

A fs. 1.716 (Tomo V), con fecha 1 de marzo de 2021, se tiene por **abandonada** la acción por parte del querellante "Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos", representada por el abogado Sebastián Saavedra Cea, para todos los efectos Legales. Se confiere **traslado** al Abogado Alexander Schnedier **Oyanedel** en representación del acusado José Tomás Torres Osses, de la acusación fiscal rolante de fs. 1.408 a 1.414 y de la acusación particular deducida por la abogada Carolina Contreras Rivera rolante de fs. 1.474 a 1.480. Asimismo se confiere **traslado**, al Consejo de Defensa del Estado, representado por Álvaro

Sáez Willer, abogado Procurador Fiscal de Temuco, respecto de la demanda civil interpuesta por el abogado Héctor Méndez Malina rolante a fs. 1.455 a 1.469.

A **fs. 1.809 a (Tomo V)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Saez Willer, en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil** deducida por el abogado Héctor Méndez Molina (en representación de María Glady San Martín), solicitando tener por contestada la demanda y, en definitiva, acoger las excepciones o defensas opuestas (Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de la actora y por haber sido ya reparada; Excepción de Prescripción Extintiva); negando lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable de que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización, de perjuicios, además de acoger la excepción que mira los reajustes e intereses y su cómputo, e improcedencia de condena en costas.

A **fs. 1.891 a 1.907 (Tomo VI)**, con fecha 22 de noviembre de 2021, el abogado Alexander Schneider Oyanedel, en representación de Jose Tomas Torres Osses en lo principal de su escrito contesta la acusación fiscal y acusación particular y plantea excepciones de fondo, solicitando la absolución de su defendido por no tener participación ni responsabilidad en los hechos.

A **fs. 1.934 (Tomo VI)**, con fecha 30 de noviembre de 2021, se recibió la causa a prueba.

A **fs. 1.993 (Tomo VI)**, con fecha 02 de marzo de 2022, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A **fs. 1.994 (Tomo VI)**, con fecha 02 de marzo de 2022, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A **fs. 2.109 (Tomo VI)**, se trajeron los autos para fallo

II. RESUMEN EJECUTIVO:

- **ACCIÓN PENAL 1° al 17°:**

1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones (49) y Documentos (30); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y 7°) Concepto de Lesa Humanidad; 8°) Declaración Indagatoria de José Tomás Torres Osses; 9°) y 10°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 11°) Defensa del Abogado Alexander Shcneider Oyanedel en representación de José Tomás Torres Osses; 12°) Consideraciones Previas al Análisis de la

Defensa: **A.** *Obligación de investigar.* **B.** *Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.* **C.** *Estado de Derecho; 13°) al 16°) Análisis de Defensa Específica del Acusado José Tomás Torres Osses; 17°) Agregación certificado de defunción de José Tomás Torres Osses.*

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 18° al 24°:

18°) *Responsabilidad civil en relación al artículo 179 del Código de Procedimiento Civil; 19°) Demanda Civil interpuestas por el abogado Héctor Méndez Molina en representación de María Glady Muñoz; 20°) Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado; 21°) Análisis de la contestación de la demanda civil efectuada por el Fisco de Chile; 22°) Acreditación probatoria del daño moral; 23°) Montos; 24°) reajustes e intereses de las sumas demandadas.*

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- a. Fecha de inicio de la causa: 06 de junio de 2013.
- b. Actuario de Tramitación Sumario: Tamara Chihuailaf Fuentealba
- c. Actuario de Tramitación Plenario: Leslie Villalobos Retamal y Cecilia Cruces Valdebenito
- d. Tomos 6:
 - Tomo I de fs.1 a fs. 351
 - Tomo II de fs. 352 a 700;
 - Tomo III de fs. 701 a 1.050;
 - Tomo IV de fs. 1.051 a 1.481;
 - Tomo V de fs. 1.482 a 1.833;
 - Tomo VI de fs.1.834 en adelante.
- e. Fojas: 193
- f. Considerandos: 24

IV. UBICACIÓN DE DOCTRINA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 6°), 7°), 12°) (autores citados en esta sentencia por orden alfabético: Díaz Labrano,

Roberto Ruiz; García Pino, Gonzalo; Guzmán Brito, Alejandro; Haro Reyes, Dante Jaime; López Goldaracena, Óscar; Lorenzetti, Ricardo; Marshall Barberán, Pablo; Nash Rojas, Claudio; Nogueira, Humberto; Rawls, John; Taruffo, Michel; Vergara Blanco, Alejandro; Villar Borda, Luis; Vilhena Vieira, Oscar; Zaffaroni, Eugenio Raúl).

V. UBICACIÓN DE JURISPRUDENCIA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 5°), 12°).

VI. REFLEXIONES DE LESA HUMANIDAD:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 6°), 7°) y 12°).

CONSIDERANDO:

VII. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1°) Que a **fs. 1.408 a fs. 1.414 (Tomo IV)**, con fecha 10 de junio de 2020, se dictó auto acusatorio en contra de **José Tomás Torres Osses**, como autor de los delitos de Secuestro simple, Apremios ilegítimos y Homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Julio San Martín San Martín, perpetrados en la comuna de Curacautín, en el mes de septiembre de 1973.

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia de los señalados ilícitos penales, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 1.408 a 1.414 (que corren de fs. 1 a 1.396), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES (49):

1) Inés Aedo Lara	25) Edmundo del Carmen Salas Bascur
2) Domingo Jaime Huillical Ortíz	26) Eduardo Eugenio Sepulveda Perloz
3) Juan de Dios Marileo Grandón	27) René Enrique Soto Reyes
4) Miguel Luis del Valle Zúñiga	28) Bartolomé Gutierrez Gutierrez
5) Galvarino Molina Gatica	29) Gustavo Antonio Weise Abarzúa
6) Graciela Jofré Castro	30) María Glady San Martín San Martín

7) Hernán Alejandro Sías cares	31) Domingo Pirce Escobar
8) Berta del Carmen Contreras	32) Luis Enrique Fernández Ibáñez
9) Miguel Parra Rivas	33) Luis San Martín San Martín
10) Arnulfo Rivas Mena	34) Ramón Renato Verdugo
11) Roberto Antonio Leal Orellana	35) Juana Aedo Lara
12) Sergio Sebastián Méndez Quilodrán	36) Elena Escalona Jara
13) Antonio Inostroza Segura	37) Orlando Salazar Astudillo
14) María Sylvia Aedo Lara	38) Enrique Alfonso Yañez Illanes
15) Gladys de Las Mercedes Escalona
Leiva	39) Pedro Juan Muñoz Yañez
16) Armando Hernán Etter González	40) Gerardo Toloza Ulloa
17) Pedro Antonio Romero Urrutia	41) Gustavo Fernando Zúñiga Duarte
18) Benedicto Abel Narvaez Valenzuela	42) Santiago Guillermo Medina Lobos
19) Marcelino Fernández Cabezas	43) Ramón Hugo Olivos Bascur
20) Pedro Pablo Torres Matamala	44) Nelson Miguel Aedo Lara
21) Héctor Gerardo Mardones Cárcamo	45) Lucy Elena Aedo Lara.
22) Mercenorio Raimundo Torres
Troncoso	46) Sandra Isabel Aedo Lara
23) Fernando Herrera Castillo	47) Eduardo Estefano Verdugo San
Martín
24) Miguel Segundo Merino Gajardo	48) Luis Segundo Ortiz Novoa
	49) Luis Alberto Coloma Fernández

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1. INÉS AEDO LARA, Declara a fs. 157 a fs. 159, de fs. 160, de fs. 161 a fs. 162, de fs. 170, de fs. 171 a fs. 172, de fs. 173 a fs. 176 (tomo I), de fs. 795 a fs. 797, de fs. 817 a fs. 823 (tomo III)

Declaración extrajudicial de fecha 2 de agosto de 1978, a fs. 157 a fs. 159 (Tomo I) Expone ser la cónyuge de Julio San Martín, quien era militante del partido comunista. El 14 de septiembre de 1973, una patrulla se presentó en su casa en Capitán Pastene, siendo detenido y llevado a Traiguén. Finalmente fue liberado. Con el transcurso de los días se entera que su madre se encuentra enferma, por lo que solicita un salvoconducto para viajar a Curacautín a visitarla, lo que fue concedido. Finalmente se encontró con su madre y se disponía a regresar a Temuco en un bus Igi-Illaima el 29 de septiembre de 1973, en medio del trayecto fue detenido por carabineros de Curacautín, entre los cuales se

encontraba el **cabo Pirce, los carabineros Ortiz y Torres**. La deponente se entera de la detención de San Martín a través de Gladys San Martín, hermana de Julio. El 30 de septiembre por vecinos de la ciudad, se entera que se había divisado el cadáver de Julio San Martín. La deponente, junto a Gladys San Martín, se avocaron en averiguar la verdad, por lo que efectuaron diversas consultas en Curacautín y Lautaro. En una de esas indagaciones la atiende el mayor Zúñiga, quien le expresa que San Martín estuvo detenido, pero que ya había sido liberado. En otra consulta efectuada, ese mayor la amenaza de que algo les podía pasar si continuaban con sus indagaciones.

Declaración extrajudicial de fecha 20 de septiembre de 1978, a fs. 160 (Tomo I). Señala que el día 22 de agosto de 1978 se presentó en su domicilio un funcionario de Investigaciones que no se identificó y procedió a interrogarla acerca de sus actividades para dar con el paradero de su cónyuge que se encontraba detenido y desaparecido desde el año 1973. Le preguntó acerca de dónde había sido detenido Julio San Martín y si ella había realizado algunas gestiones en Santiago para dar con su paradero, como asimismo le preguntó si su marido había sido político y el cargo que ocupaba en el Partido Comunista de Curacautín. También fue interrogada acerca de por qué no había hecho alguna diligencia antes, ya que había pasado tanto tiempo, a lo que respondió señalando que antes no había a quien recurrir, y que como había dicho el ministro del Interior que cualquier denuncia sería se debía recurrir al obispado de Temuco.

Declaración extrajudicial, de fecha 29 de agosto de 1990, a fs. 161 a fs. 162 (Tomo I) Señala que José San Martín el día mencionado viajaba en un bus hacia Lautaro, cuando fue interceptado por carabineros de Curacautín, entre los funcionarios que estaban eran **Pirce, Torres y Ortiz**. Con anterioridad también había sido detenido por Carabineros en Capitán Pastene, llevado a la cárcel de Traiguén y dejado libre sin cargos. El motivo de su viaje a Curacautín era visitar a su madre, quien supuestamente se encontraba enferma. De lo anterior se enteró por un telegrama aparentemente falso. Testigos de estos hechos que menciona son José Escalona (difunto) quien le contó a los comparecientes de la detención ya que iba también en ese bus, así como también su hija Gladys Escalona. Un Señor Carrillo le contó que vio a San Martín entrar a la Comisaría y el Señor Parada le contó que lo vio dentro pues estuvo detenido con él. Por último, el mayor Zúñiga les dijo que San Martín estuvo detenido, pero ya había sido liberado, y las amenazó con represalias si seguían efectuando averiguaciones. Añade que hay gente que vio su cadáver botado en el asentamiento Santa Julio en el camino entre Curacautín y Lautaro y que el mismo bus de la detención pasó

frente al cadáver unos cinco días después de la y por lo tanto el chofer, el auxiliar de apellido Cía y los pasajeros debieron verlo. Además la señora Escalona viajaba en el bus y dijo haber visto el cadáver.

Declaración extrajudicial de fecha 4 de mayo de 1996, a fs. 170 (Tomo I): Indica que Julio San Martín estuvo detenido en Traiguén, siendo liberado a los días después, sin cargos ni maltratos de ningún tipo. Dice que ella lo visitaba y le llevaba comida. La deponente ratifica que su cónyuge viajó en un bus desde Curacautín hacia Temuco, y en el medio del trayecto, fue bajado y detenido por carabineros de Curacautín al llegar a Lautaro. De eso se enteró a través de un partiente y amigo además del auxiliar del bus de apellido Sías. Anexa que como fue llevado al retén de Curacautín, fue a preguntar por San Martín, junto con una hermana de este, donde le señalaron “ese comunista” había estado allí pero que lo habían liberado y que si seguían preguntando las iban a detener a ellas, razón por la cual dejaron de hacerlo , pero siguieron indagando entre testigos y amigos. Adosa que un trabajador de apellido Parada (fallecido) le contó que estuvo detenido con él en el retén de Curacautín y que sentía como lo golpeaban y torturaban en las noches durante varios días. Después liberaron a Parada pero no a su esposo. Expone que el Sr. Sías, en secreto le contó que vio el cadáver de San Martín frente al asentamiento Santa Julia, lo cual también fue visto un por tío de la deponente. Afirma que piensa que le aplicaron la ley de fuga. Por último, señala que buscó por todas partes y no pudo obtener certezas acerca del lugar de inhumación, sin embargo no tiene dudas que a su esposo lo mataron.

Declaración judicial, de fecha 4 de junio de 1979, a fs. 795 a 797 (Tomo III): Ratifica su denuncia por presunta desgracia, haciendo la salvedad que respecto al jeep que habría interceptado el bus donde viajaba Julio San Martín, no puede asegurar ni siquiera de oídas que haya sido efectuado por los funcionarios Ortiz, Pirce y Torres, porque en realidad a ellos los vio en la comisaría cuando fue a investigar sobre el paradero de su cónyuge. Por otra parte, hace presente que al ir a la Comisaría, carabineros cuyos nombres no recuerda, le contestaron con evasivas sobre el paradero de su marido, por lo cual solicitó hablar con el mayor de Carabineros de esa época, quien según averiguaciones que realizó en esa época era Gustavo Zúñiga Duarte, sin embargo ella a este no lo conocía, de tal manera que no puede asegurar que haya sido él con quien tuvo la audiencia, pero al solicitarle permiso para ir al lugar donde había sido visto el cadáver de su marido, le respondió que no debía hacer esas averiguaciones y que él se iba a encargar. En cuanto a lo que se le interroga, puede decir que en el año 1973 junto a su esposo se fueron a vivir a Capitán Pastene, lugar en que con fecha 14 de

septiembre su hogar fue allanado por militares y al día siguiente su marido fue detenido, también por militares, por ser subdelegado de gobierno. En esa fecha fue llevado a la cárcel de Traiguén, dejándolo en libertad el día 24 de septiembre de ese año. Añade que, por razones de enfermedad de la madre de su marido, este viajó hasta Curacautín con fecha 28 de septiembre de 1973, previa autorización de Carabineros a través de salvoconducto. La deponente indica que su marido debía regresar a Temuco el día 29 de septiembre, para juntarse con ella, pero no llegó. Posteriormente, en los primeros días de octubre de 1973, encontrándose ella en la casa de sus padres en Temuco, llegó su cuñada Gladys San Martín, quien le contó que gente, entre los cuales recordaba un joven de apellido Sía, le había dicho que a su marido lo habían visto muerto en el camino a Lautaro, poco antes de llegar al asentamiento Santa Julia, por lo cual se fue a Curacautín con su cuñada, yendo a Carabineros, como ya lo ha expresado anteriormente. Apunta que José Escalona, quien actualmente está fallecido, le hizo saber que en la fecha que su marido iba de regreso a Temuco en un bus Igi Llaima, también lo hacía él, viendo que en la entrada del Puente Cautín, en Lautaro, la micro había sido interceptada por un jeep, no precisando si se trataba de carabineros o militares, quienes habían bajado a San Martín, pero debido a que la micro iba muy llena, no vio para dónde lo llevaron, todo lo cual ocurrió como a las 9 de la mañana. Adosa que con posterioridad, al ir a la comisaría, se encontró casualmente con una persona de apellido Carrillo, quien le dijo que su marido había llegado detenido a la Comisaría como a las 14 horas. También agrega que el funcionario que la atendió en la Comisaría y que se le ocurre era el Mayor Zúñiga, le dijo que su marido había sido detenido y puesto en libertad ese mismo día. Expresa que todos los hechos que ha narrado respecto de cuando su marido viajaba a Temuco, solamente los sabe de oídas y nada le consta personalmente, ni mucho menos lo vio muerto. Cree que su marido pudo haber tenido muchos enemigos ya que pertenecía al partido comunista, pero no puede señalar a nadie en especial como para pensar que lo hubiesen matado, porque hasta la fecha no hay ninguna seguridad que esto sea así. Hace presente que en el tribunal de Traiguén se lleva otra causa por presunta desgracia de su esposo, lo que le consta solo por haber comparecido a prestar declaración ante ese tribunal. Añade que durante el tiempo que su marido estuvo detenido en la cárcel de Traiguén ella lo fue a ver dándose cuenta que estaba bien, como asimismo él le expuso que no había recibido ningún mal trato y al salir en libertad no tuvo ningún problema hasta que fue a Curacautín, sin que hasta la fecha haya regresado a su hogar, ignorando su actual paradero. Finalmente ratifica su declaración prestada

ante la Policía de Investigaciones de Victoria, debiendo aclarar que la fecha de detención de su marido en Capitán Pastene, fue el 25 de septiembre de 1973 y dado en libertad sin ningún problema con fecha 24 del mismo mes y año.

Declaración judicial de fecha 28 de marzo de 1991, a fs. 817 (Tomo III). Ratifica íntegramente su declaración prestada ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y que es todo lo que puede decir al respecto, pues que no le consta personalmente acerca de la forma y el lugar, ni las circunstancias en que fue detenido su cónyuge, tampoco los funcionarios responsables de su detención, si eran carabineros o militares. Solo sabe que el hecho es que su marido fue detenido en septiembre de 1973 y nunca más supo de él, desapareció del todo, piensa que debe estar muerto y lo único que pide es que aparezca su cadáver para darle sepultura, no tiene resentimientos ni guarda represalias para quienes lo mataron. Asimismo ratifica todo lo declarado y obrado por ella en causa rol N° 11.558 del año 1979, en la cual se reabrió sumario según lo que se le hace saber. Finalmente, en cuanto a los nombres de los testigos y carabineros cuyos apellidos se dan a conocer, los desconoce, al igual que su paradero actual. Lo que puede decir es que el Señor Carrillo al parecer está fallecido.

Declaración extrajudicial de fecha 9 de marzo de 1991, a fs. 823 (Tomo III). Indica que su cónyuge fue militante del partido comunista, y que producido el golpe militar, fue detenido por primera vez en Capitán Pastene y trasladado a Traiguén, donde fue liberado días después. Unos cuatro días después recibió un telegrama donde se indicaba que su madre estaba gravemente enferma, por lo que solicitó un salvoconducto a Carabineros para viajar a Curacautín a visitarla. El 28 de septiembre de 1973 viaja a esta ciudad, donde constata que lo de la enfermedad de su madre no era efectivo, no obstante pernoctó en casa de ella y al día siguiente, es decir el 29 de septiembre, tomó un bus Igi Llaima a las 8 horas, con destino a Temuco, ya que la iba a pasar a buscar a casa de sus padres. Dicha micro tenía su recorrido por el camino de tierra que llega a la ciudad de Lautaro y justamente antes de pasar por el Puente Cautín a la llegada de esas ciudad, Carabineros de uniforme pararon la micro y su cónyuge fue bajado y detenido, lo subieron a un jeep y regresaron a la Comisaría de Curacautín, según antecedentes que en esa época le entregó don José Escalona Jara, quien viajaba en el mismo bus. Estos hechos fueron coincidentes con lo que le contó don Alejandro Sías, auxiliar del bus, a su cuñada Gladys San Martín. Esta misma cuñada Gladys fue a buscarla a Temuco y viajaron primero a Lautaro, en donde realizaron diversas consultas sin obtener resultados, por lo cual siguieron a Curacautín donde se entrevistaron con el mayor Zúñiga Duarte, quien les dijo que

San Martín estuvo detenido, pero había sido liberado ese mismo día por andar con salvoconducto, sin embargo su cuñada le dijo que ella sabía que Julio había sido muerto a un costado del camino que une Curacautín con Lautaro, frente al fundo Santa Julia, a unos diez kilómetros de Curacautín.

A.2 DOMINGO JAIME HULLICAL ORTÍZ (22 años de edad a la época de los hechos) Declara a fs. 104 a fs. 105 (tomo I)

En declaración judicial de 8 de noviembre de 2013 de fojas 104 a fs. 105 (Tomo I) informa que ingresó a Carabineros en noviembre de 1970. Para septiembre de 1973 se desempeñaba en el retén Manzanar, dependiente de la 5° Comisaría de Curacautín, con el grado de Carabinero. Tras el 11 de septiembre de 1973, fueron recogidos los retenes a la unidad base, es decir, Manzanar se recogió a la 5° Comisaría de Curacautín, sin recordar si fueron uno o más meses en situación de acuartelamiento. Dentro de sus funciones entre otras, estaba la de ser cuartelero, encargándose del aseo del recinto, custodia de los detenidos y apoyar a la guardia. Luego señala no recordar a las personas que integraban la 5° Comisaría de Curacautín. Continúa su relato diciendo que después del 11 de septiembre había dos vehículos institucionales, un furgón y un jeep tipo land rover, ambos de color blanco y negro. No recuerda si hubo incautación de vehículos a las instituciones públicas para realizar labores de patrullaje, así como tampoco recuerda a quienes se desempeñaban como conductores en esa Comisaría. Agrega que nunca le correspondió efectuar labores de patrullaje en la población a bordo de vehículos institucionales ni de otro tipo. Ante la pregunta del tribunal, responde que no puede afirmar que en Curacautín se hayan mantenido detenidos por motivos políticos, tampoco recuerda que después del 11 de septiembre de 1973 se haya aumentado el número de detenidos al interior de la Comisaría. Dice no haberse enterado de ningún suceso irregular con los detenidos que haya ocurrido en la Comisaría de Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. Consultado acerca del caso de Julio San Martín San Martín, él declara desconocer el hecho y a la persona consultada en cuestión. Pero añade haber escuchado comentarios en la unidad que en un sector rural de Curacautín se habría encontrado un cadáver, ignorando si se efectuó un procedimiento para levantar dicho cadáver o esclarecer dicho rumor, sin precisar una fecha específica después del 11 de septiembre de 1973 en la que escuchó esos comentarios. Finaliza su declaración señalando que solo tenía el grado de Carabinero y solo se limitaba a obedecer las órdenes de sus superiores.

A.3 JUAN DE DIOS MARILEO GRANDÓN (24 años a la época de los hechos) Declara de fs. 106 a fs. 108, de fs. 125 a fs. 126 (tomo I)

En declaración judicial de 8 de noviembre de 2013, fs. 106 a fs. 108 (Tomo I) el deponente señala que para el 11 de septiembre de 1973, ostentaba el grado de Carabinero en la 5° Comisaría de Curacautín, en donde cumplía funciones de patrullaje en la población, vigilante exterior, cuartelero, entre otras. Cuenta que después del 11 de septiembre de 1973 se acuartelaron en grado 1, debiendo pernoctar en el cuartel y sólo salir para hacer patrullajes. Ante la pregunta del tribunal, contesta que a pesar de estar en grado 1 no se recogieron las unidades que dependían de la Comisaría. Además indica que no vio en ningún momento que personal del Ejército haya llegado a la unidad o hayan tomado el control de la ciudad. Apunta que en todo el período, Carabineros fue el encargado del orden y la seguridad de Curacautín. Recuerda como parte de la dotación al suboficial Gutiérrez, Pillancari, Mardones, Lagos y el comisario de apellido Zúñiga. Después del 11 de septiembre de 1973 había dos jeeps que eran institucionales, además de los vehículos del SAG e INDAP que fueron incautados y utilizados por la Comisaría. A lo que se le pregunta, dice recordar que un funcionario de apellido Peñailillo era el conductor de la Comisaría y además, los funcionarios que tuviera licencia de conducir al día, fueron autorizados por el comisario para conducir los vehículos, entre ellos estaba Etter y Romero y le parece que también Del Valle y Herrera lo podían hacer, pero no está completamente seguro de ello. Asevera que efectivamente hubo detenidos por motivos políticos en la Comisaría de Curacautín. Estos eran mantenidos en el patio del cuartel. Tiene entendido que estaban ahí porque lo ordenaban los tribunales militares. Los detenidos eran mantenidos hasta por lo menos una semana, luego de lo cual eran trasladados al regimiento de Angol. Dice que los carabineros de la Comisaría eran los encargados del traslado a la unidad militar. Luego agrega que no le correspondió trasladar a detenidos por motivos políticos hasta el regimiento de Angol y que las detenciones por motivos políticos eran efectuadas por el personal de carabineros de Curacautín no correspondiéndole en ningún caso componer patrullas que realizaran esa labor. Alega no haberse enterado de ningún suceso irregular con los detenidos que haya ocurrido en la Comisaría de Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. Atestigua que el Oficial de apellido Sanhueza era el encargado de los detenidos por motivos políticos. Él tenía que coordinar todo lo referente a ellos y destinar a parte del personal para el traslado a Angol. Respecto al caso de Julio San Martín San Martín, manifiesta que desconoce el hecho y que es segunda vez que escucha ese nombre, ya que fue interrogado por la Brigada investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, ante quienes

declaró sobre el mismo hecho. Sin embargo, recuerda que en una fecha que no puede precisar del año 1973, hubo un homicidio en la comuna de Curacautín, en un camino rural ubicado a la salida hacia la frontera. Tiene entendido que se dio cuenta al Juzgado de Letras y hubo una investigación criminal respecto a ese caso.

A.4 MIGUEL LUIS DEL VALLE ZÚÑIGA (28 años a la época de los hechos) Declara de fs. 109 a fs. 111, de fs. 123 a fs. 124 (tomo I), de fs. 638 a fs. 639 (tomo II), de fs. 839 a fs. 840, de fs. 846 a fs. 848, de fs. 849 a fs. 850, a fs. 851 (tomo III)

En declaración judicial de 8 de noviembre de 2013 a fs. 109 a fs. 111 (Tomo I) Explaya que ingresó a Carabineros en el año 1969 y para septiembre de 1973 se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín con el grado de Carabinero. Sus funciones eran la efectuar patrullajes en la población, vigilante exterior, cuartelero entre otros. Especifica que la labor de cuartelero consiste en vigilar los calabozos en donde están los detenidos y en apoyar las labores al suboficial de guardia. Después del 11 de septiembre de 1973, la unidad se acuarteló en grado 1, debiendo pernoctar y almorzar en la unidad, no pudiendo hacer vida familiar. Debían estar alertas por cualquier eventualidad que surgiera, solo podían salir a efectuar patrullajes en la población. Recalca que a pesar de estar en grado 1, no se recogieron las unidades que dependían de la Comisaría. En esa misma fecha, llegó el personal del Ejército a tomar el control de la comuna, prolongándose esta situación por alrededor de un mes. Recuerda como parte de la dotación al suboficial mayor Pillancali, Mardones, suboficial Pirce, y al parecer también habían unos funcionarios de apellido Torres. Dice que después del 11 de septiembre en la unidad había dos vehículos, un jeep y un furgón que tenían los colores blanco y negro y que eran los institucionales, sumado a otros 3 o 4, los que habían sido incautados a instituciones públicas. Los vehículos los conducía ocasionalmente el Carabinero de apellido Romero junto uno o dos más en la unidad. Prosigue su relato declarando que efectivamente habían detenidos por motivos políticos en la Comisaría de Curacautín, los cuales eran mantenidos en los calabozos de la unidad, no existiendo dependencia especial para este tipo de detenidos y no se mantenían privados de libertad por más de un día. Anexa que las detenciones por motivos políticos eran efectuadas por el personal de ejército y también por carabineros. Él nunca participó en detenciones por motivos políticos. Las detenciones de este tipo eran realizadas por los funcionarios de mayor rango de la unidad. A lo que se le pregunta, contesta no recordar que se hayan compuesto patrullas mixtas entre Carabineros y Ejército después del 11 de

septiembre de 1973. Las patrullas eran por institución, no se mezclaban con los militares para patrullar. También indica que no se enteró de ningún suceso irregular con los detenidos que haya ocurrido en la Comisaría de Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. A su pregunta, los interrogatorios de los detenidos políticos eran. Consultado acerca de los interrogatorios a los detenidos políticos, señala que eso se efectuaba por personal del ejército y por el oficial Sanhueza de Carabineros. Consultado acerca del caso de Julio San Martín San Martín, el deponente manifiesta desconocer el hecho y a la persona en sí, pero trae a colación un hecho ocurrido después del 11 de septiembre de 1973, que se comentó en la unidad acerca de la aparición de un cadáver en un camino del sector rural de Curacautín, desconociendo si se efectuó un procedimiento para levantar dicho cadáver o si los superiores ordenaron verificar dicho rumor. Finaliza aseverando que en ese tiempo solo tenía el grado de Carabinero, por lo que solo se limitaba a hacer lo que le mandaban sin cuestionar las ordenes de sus superiores.

En declaración policial de 18 de octubre de 2013 a fs. 123 a fs. 124 (Tomo I) Aduce que ingresó a Carabineros en 1969, siendo su primera destinación a la 5° Comisaría de Curacautín. Para el 11 de septiembre de 1973, el deponente ostentaba el grado de Carabinero y se encontraba prestando servicios en la 5° Comisaría de Curacautín, la cual estaba a cargo del mayor Zúñiga y secundado por un Teniente del cual no recuerda nombre, además de aproximadamente unos 100 funcionarios entre los cuales nombra a Pirce, Sanhueza, Higinio Pillancari, Miguel Bascur y Toribio Salazar. Una vez transcurrido el 11 de septiembre de 1973, debió realizar labores de patrullaje en conjunto y guardia de exterior de cuartel, sin realizar detenciones de personas por motivos políticos, pero aclara que la unidad se encontraba llena de detenidos. Consultado el deponente acerca del caso de Julio San Martín San Martín, él declara no conocerlo e ignora cualquier antecedente acerca de su detención y posterior desaparición, pero agrega haber escuchado en una oportunidad que una persona de sexo masculino había sido encontrado tirado en el borde de un camino, desconociendo mayores antecedentes acerca de ese hecho. Finaliza su declaración señalando a la fecha de acaecido los hechos, no había un grupo especializado en las detenciones por temas políticos, como tampoco tener conocimiento acerca que en la unidad hubiera un lugar específico para realizar interrogatorios.

En declaración policial de 22 de febrero de 2017 rolante a fojas 638 a 639 (Tomo II) difunde que para el año 1973 se encontraba trabajando en la 5 Comisaría de Curacautín, la cual estaba a cargo del Mayor Duarte. En esa época

el deponente ostentaba el grado de Carabinero y desempeñaba labores internas, como vigilante de aseo y ayudante de los suboficiales de guardia. En esta unidad estuvo por tan solo 1 año. Agrega que no realizó labores operativas, sólo de manera ocasional, patrullajes, tanto de día como de noche. En estos patrullajes no detuvo a nadie, ya que como había toque de queda, no había nadie desplazándose en la vía pública. Los patrullajes que realizó sólo los hizo a pie, ya que la ciudad era pequeña. Comenta que estos patrullajes siempre estaban a cargo de suboficiales más antiguos y siempre se salía con funcionarios distintos. Recuerda además que luego de realizado el golpe militar, durante los primeros días, hubo gran cantidad de detenidos al interior del cuartel. Estos eran ingresados tanto por Carabineros como por militares. Afirma que los calabozos no dieron abasto, por lo cual se mantenían en el patio. Esto fue por alrededor de 2 o 3 días e indica que el control de esta unidad policial lo tomaron los militares. Ellos llegaban y veían los antecedentes de los detenidos, los dejaban en libertad o los derivaban para otro lugar. De los militares que iban al cuartel policial no mantiene antecedentes, sólo, puede agregar que andaban con tenida de combate. Posteriormente anexa que en esa época la unidad policial sólo tenía un jeep blanco del cual no recuerda la marca y un furgón. Principalmente este jeep era de uso exclusivo de los oficiales que se encontraban en la unidad. Respecto a los funcionarios cuyos, apellidos eran Pirce, Torres y Ortiz, dice no recordarlos. Difunde que a fines del año 1973, fue trasladado a Victoria a la Tenencia de Carreteras y en año 1991 se acogió a retiro con el grado de Sargento 1°. En relación a Julio San Martín San Martín, expresa que no tiene antecedentes que aportar.

En declaración judicial de 2 de diciembre de 1991 a fs. 839 a fs. 840 (Tomo III). Afirma que trabajó en la comisaría de Curacautín durante el año 1973, siendo un carabinero recién ingresado al servicio policial. Cuando él trabajaba en esa comisaría el subcomisario era el teniente Adrián Sanhueza. Afirma que en esa época se detuvo a muchas personas, en número que le sería imposible indicar ya que fue mucha la gente que se detuvo, siendo él participe de varias, cuando debía acompañar a algún superior, pero aclara que en cuanto al caso preciso de Julio San Martín San Martín, no lo conoció, ni oyó mencionar su nombre, dado a que él estaba recién llegado a la ciudad y conocía a muy pocas personas. Respecto a una declaración que dio otro testigo respecto que se habría obligado a una persona a saltar al río o lanzado al mismo, él aclara que eso no es efectivo, que mientras él estuvo en Curacautín nunca se cometió un hecho similar con algún detenido. Asevera que él era un Carabinero más, sin grado ni antigüedad y se

limitaba a recibir órdenes de sus superiores, pero en un caso así él se habría negado a cometerlo, por lo que afirma que solo es una invención. Finaliza su declaración enfatizando en si tuviera algún antecedente acerca de la muerte de San Martín, no tendría ningún problema proporcionar dichos antecedentes, pero como señaló anteriormente, nunca lo conoció y él estuvo poco tiempo en Curacautín y a principios de 1974 fue trasladado a Victoria.

En declaración judicial de 16 de mayo de 2018 a fs. 846 a fs. 848 (Tomo III) Ratifica las declaraciones que rolan a fs. 109 y siguientes y de fs. 839 y siguientes, así como también la de fs. 123 y siguientes y de fs. 638 y siguientes prestadas ante la Policía de Investigaciones de Chile. Atestigua que después del 11 de septiembre de 1973, es probable haya participado en detenciones de personas junto a sus superiores, los cuales eran detenidos en la vía pública, nunca en sus domicilios y los motivos de su detención era por infringir el toque de queda. Recuerda haber detenido personas en el día, ya que el toque de queda empezaba a las 8:00 de la mañana y le parece que los primeros días había toque de queda todo el Respecto a los dichos de Gerardo Toloza rolante a fs. 835 y sig., manifiesta que jamás salió con el teniente Sanhueza, siempre andaba a cargo de un cabo o sargento en un procedimiento en la calle. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 492 y sig., a lo cual el deponente indica que jamás vio detenido a Julio San Martín San Martín y desconoce los hechos que da a conocer Armando Etter en su declaración. De igual forma ignora el procedimiento de ingreso y egreso de los detenidos. Dice que en su labor de cuartelero le correspondía la mantención, el aseo del cuartel y apoyar al suboficial de guardia. El cuartelero también es quien acompaña a los detenidos a los calabozos cuando son ingresados en la unidad y es probable que después del 11 de septiembre de 1973 haya ingresado a los calabozos a detenidos. No recuerda los nombres de los detenidos que hayan estado en la unidad después de esa fecha. También indica que el cuartelero de la unidad era el encargado de llevar los detenidos al baño, pero eso no se hacía, los detenidos debían hacer sus necesidades en el mismo calabozo. Esto por medidas de seguridad y además, habían disposiciones de los superiores. Continúa contando que en esa época se comentaba que los oficiales eran los encargados de los interrogatorios a los detenidos y se rumoreaba que los llevaban a otra dependencia de la unidad para ser interrogados. Ante lo que se le pregunta, contesta que en la unidad había caballares y caballerizas, en estas últimas había fardos. No recuerda que en la unidad se haya mantenidos detenidos en las caballerizas, pero cuando los calabozos no daban abasto, los detenidos eran mantenidos en el patio de la

unidad, los tenían sentados allí, lo cual no duraba más del día, porque luego los dejaban en libertad. Añade no haber visto mujeres detenidas en la comisaría de Curacautín luego del 11 de septiembre de 1973. Consultado sobre Toribio Salazar, responde que él se desempeñaba en Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. Sobre Luis Ortiz, describe que él era que manejaba uno de los furgones policiales y a veces el jeep, él iba a buscar y dejar al Teniente o al Comisario a su casa. Indica que a pesar de que Romero era el conductor titular, Ortiz también conducía en algunas ocasiones el jeep o el furgón y aunque tenía el grado de carabinero, Luis Ortiz era una persona de confianza de la superioridad. Según su recuerdo, Luis Ortiz siempre trabajó en la comisaría y siempre vestido de uniforme. No recuerda haberlo visto desempeñarse en la comisaría vestido de civil y después del 11 de septiembre de 1973 lo hacía permanentemente en la unidad, no recordando que haya sido desvinculado de carabineros o algo similar.

En diligencia de careo entre Armando Hernán Etter González y Miguel del Valle Zúñiga, con fecha 16 de mayo de 2018 a fs. 849 a 850 (Tomo III). Etter reconoce a Del Valle, trabajó con él en el año 1973 en la Comisaría de Curacautín. Ratifica sus dichos de fs. 492 y siguientes en lo pertinente, también en aquella parte donde señala que Julio San Martín estuvo detenido. En cuanto a las personas que se dedicaban a las detenciones, no está seguro si participaron todos los que mencionó, puede que haya más. El deponente afirma que se imagina que las personas mencionadas sabían perfectamente lo que pasaba, pues era una unidad chica y se comentaba todo lo que pasaba. Por su parte Del Valle no reconoce a la persona con quien se le carea. El tribunal le informa de quien se trata. Ratifica en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 846 y sig. No obstante, desconoce la situación vivida por San Martín y general lo que relata Etter. Consultado Etter, señala que en esa época no había más detenidos junto a San Martín, él se encontraba detenido en el calabozo. El careo concluyó con ambos manteniéndose en sus dichos, incluso habiendo sido amonestados por el Tribunal para que concuerden con ante sus contradicciones.

En diligencia de careo entre Luis Segundo Ortiz Novoa y Miguel del Valle Zúñiga, de fecha 16 de mayo de 2018, a fs. 851 (Tomo III). Ortiz no reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le informa que se trata de del Valle Zúñiga. Ratifica en lo pertinente, la declaración de fs. 846 y siguientes. Por su parte, del Valle reconoce a quien se le carea, agrega que el señor Ortiz era Carabinero en la Comisaría de Curacautín para el año 1973, donde el deponente cumplía funciones. Agrega que El señor Ortiz siempre se desempeñó en la unidad de Curacautín y vestido con el uniforme institucional y que dada las circunstancias

de la época todos andaban uniformados, no recordando qué carabinero se vistiera de civil en esa época. Consultado Ortiz, señala que no sabía manejar en ese tiempo, nunca condujo un vehículo en Curacautín. El tribunal le informa que no aparece su desvinculación de Carabineros, a lo que contesta que Zúñiga se lo comunicó de manera verbal, que probablemente nunca llegó a oídos de los superiores. Del Valle indica que no podía estar tan equivocado, que Romero era el conductor oficial, y que Ortiz manejaba de manera esporádica, anexando que Ortiz fue el único con su apellido con quien se desempeñó en el año 1973. Finaliza el careo con ambos manteniéndose en sus dichos, incluso habiendo sido amonestados por el Tribunal para que concuerden ante sus contradicciones.

A.5 GALVARINO MOLINA GATICA (35 años a la época de los hechos). Declara de fs. 163 a fs. 164, de fs. 274 a fs. 275, de fs. 294 a fs. 295 (tomo I), de fs. 815 a fs. 816 (tomo III)

En declaración ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 30 de agosto de 1990 rolante a fojas 163 a 164 (Tomo I) Asevera que los hechos que relata los conoció a través de los dichos de un carabinero que se desempeñaba en el Retén de Curacautín, de apellido Méndez. Los hechos los relató el año 1974, fecha en que se desempeñaba en ese retén y habrían sucedido en el año 1973. Julio San Martín era militante del partido comunista y se desempeñaba como subdelegado en la comuna de Lumaco en la fecha del pronunciamiento. Fue detenido en ese lugar y enviado a la cárcel de Traiguén, donde estuvo hasta el mes de octubre. Regresó a su ciudad, Curacautín, donde había sido secretario comunal del Partido Comunista, todo esto antes de ser nombrado subdelegado. Cuando volvió a Curacautín llegaron Carabineros a buscarlo a su domicilio y lo llevaron a un puente que sale hacia la comuna de Lautaro y allí lo obligaron a que se tirara bajo el puente. Pese a las súplicas de él, fue obligado y definitivamente lanzado. Una vez en el agua lo balearon. Los Carabineros que participaron eran un grupo de ocho, entre los cuales estaba el Teniente Adrián Sanhueza; un carabinero Ortiz; Del Valle; quienes servían en el retén de Curacautín. Al día siguiente apareció el cadáver en el camino por lo que se presumió que no murió, sino que se arrastró hasta el camino y habría muerto. Pasó la micro Curacautín- Lautaro y mucha gente pudo ver el cadáver y un carabinero que iba en el bus dijo que el cuerpo pertenecía a las Fuerzas Armadas. Lo fueron a buscar y lo echaron en una parte profunda del río, lo habrían amarrado y puesto peso para que se hundiera. Añade que este relato lo volvió a repetir el Carabinero, que él conocía a la víctima y el carabinero lo sabía. Dice que fue gobernador en Curacautín, que la primera vez que hizo el

relato estaba fuera de servicio y que él no participó en hecho, sus compañeros le habrían contado y pudo notar que la segunda vez no se contradijo en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 21 de marzo de 2014, a fs. 274 a fs. 275 (Tomo I) Comunica que para el año 1973 se desempeñaba como gobernador del departamento de Curacautín y militaba en el Partido Socialista. En cuanto a Julio San Martín, lo conoció ya que él militó en el Partido Comunista y tenía el cargo de secretario del Partido de Curacautín. Cuenta que una vez ocurrido el golpe de estado, patrullas de militares llegaron a la comuna y fue notificado por un oficial que debía cumplir arresto domiciliario, dejando de ocupar el cargo de gobernador. No obstante, días posteriores pudo viajar a la ciudad de Angol, ya que tenía residencia en dicho lugar. Expresa que en octubre de 1973, fue citado al Juzgado de Letras de Curacautín, ya que había entregado una vivienda abandonada a una familia, por lo que viajó desde Angol hasta Curacautín, sin recordar fecha exacta, en un bus interurbano. Al regresar el mismo día a Angol, ya en el bus, se le acerca un Carabinero de Curacautín de apellido Méndez, oriundo de Cañete, quien luego de una conversación, le confiesa que San Martín había sido asesinado por Carabineros. Luego, este mismo carabinero le señala que un grupo de alrededor de 8 funcionarios, entre ellos Pirce, Bascur, Sanhueza, Del Valle, Ortiz y Salazar lo habían tomado detenido y llevado hasta un puente ubicado a la salida de Curacautín, que San Martín suplicaba que no lo lanzaran ya que tenía hijos y no quería morir, siendo lanzado en ese instante y al caer a las aguas, los Carabineros comenzaron a dispararle, para luego en ese mismo lugar comenzar a ingerir alcohol con la finalidad de olvidar el momento antes descrito. También le relató que al día siguiente el cadáver de San Martín fue encontrado a las orillas del camino que une a Lautaro con Curacautín, por un bus el cual se detuvo y los pasajeros que venían en su interior, descendieron y se percataron que se trataba de San Martín, encontrándose entre ellos un Carabinero quien manifestó que se trataba de un muerto de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, Carabineros llegó al lugar y procedieron amarrar las extremidades del cuerpo y a colocarle peso con piedras, para luego ser lanzado al río y así se fuera a aguas profundas. El deponente indica que el Carabinero Méndez, le volvió a reiterar esta versión en una 2° oportunidad que se lo encontró en la ciudad de Curacautín en el año 1990, donde nuevamente tuvo que declarar en el Tribuna pero como testigo sobre lo ocurrido con Julio San Martín, haciendo presente que Méndez supo todo esto por intermedio de un Carabinero que participó en el hecho y que no recuerda en ese momento el nombre. Finalmente agrega que nunca más se volvió a encontrar con el Carabinero Méndez y que ignora qué pasó con la investigación

que llevaba el tribunal de Curacautín con respecto a lo sucedido con Julio San Martín, enterándose por comentarios que los familiares de la víctima no habrían querido continuar con el proceso.

En declaración judicial de fs. 294 a fs. 295 (Tomo I), de fecha 13 de junio de 2014, ratifica sus declaraciones de fs. 274 a fs. 275 y fs. 63 a fs. 63 vuelta, de la causa rol 11.558 de Juzgado del crimen de Curacautín. Respecto al Carabinero que le informó lo sucedido con San Martín, dice que se trata de Hugo Méndez y que al parecer su señora es enfermera, desconociendo otros antecedentes de él. Aclara que era este carabinero quien inducía la conversación sobre San Martín ya que él nunca preguntó nada. Continúa su declaración relatando las detenciones vividas por él.

A.6 GRACIELA JOFRÉ CASTRO. Declara a fs. 165 (tomo I)

En declaración ante la CNRR de fecha 2 de mayo de 1996 a fs. 165 (Tomo I) en torno al caso SAN MARTÍN, señala que es sabido que lo bajaron de un bus IGI Llaima que viajaba en dirección a Lautaro y que hubo testigos directos del hecho. Da los antecedentes para llegar a uno de ellos, pero pide mantener el nombre en reserva, salvo que la persona esté dispuesta a darlo. Asegura que luego de ser bajado, fue visto muerto por las mismas personas y se comenta que fue enterrado en los alrededores. Luego de este testimonio se visitó al testigo. Luego se le pregunta por María Arriagada Jerez y Jorge Aillon Lara.

A.7 HERNÁN ALEJANDRO CÍAS CARES. (25 años de edad a la época de los hechos) Declara a fs. 166, de fs. 341 a fs. 342, de fs. 348 bis a fs. 349 (tomo I), de fs. 785 a fs. 786, fs. 787 (tomo II)

En Declaración ante la CNRR de fecha 2 de mayo de 1996 a fs. 166 (Tomo I) Expresa que conocía muy bien a don Julio San Martín, conocido zapatero del lugar. El día de los hechos viajaba el Sr. San Martín, en bus de recorrido desde Curacautín y en dirección a Lautaro. Carabineros conocidos de Curacautín, que viajaban en un jeep institucional, adelantaron el bus y lo interceptaron en la población Guacolda, a la entrada de Lautaro. Sólo preguntaron por el Sr. San Martín, lo bajaron y luego de subirlo al jeep, se devolvieron en dirección a Curacautín. El bus siguió en dirección a Temuco, sin que nadie se atreviese a comentar nada, por lo complejo de esa época. Unos días después, cuando iban en dirección a Temuco, encontraron el cadáver en Santa Julia, a orilla de camino seco, botado en el mismo camino. Lo reconocieron porque pararon a verlo. El deponente en su calidad de auxiliar y **el Sr. Escalona**, pasajero del bus que hoy está fallecido, dieron cuenta de ese suceso a Carabineros de Lautaro, pero según comentan, cuando llegaron el cadáver ya no estaba. Santa Julia es un

asentamiento, no muy lejos de Curacautín y se dice que lo sepultaron en ese lugar, por razones humanitarias, lo que no le consta al deponente. Expresa que él le dijo esto a la viuda para que no lo buscara más y le pidió que no diera su nombre pues tenía miedo y ahora tampoco desea verse involucrado.

En declaración policial, a fs. 341 a fs. 342 (Tomo I), de fecha 19 de octubre de 2014 El testigo indica que efectivamente conoció a Julio San Martín, ya que eran vecinos y en su casa reparaba calzados, además pertenecía al Partido Socialista, siendo una persona conocida y tranquila de Curacautín, pero para el 11 de septiembre de 1973, su vecino mantenía una detención en su ciudad la cual lo obligaba a no salir del pueblo. Recuerda que a fines de septiembre de ese año, viajaba en bus como auxiliar de la empresa Igi-Llaima desde Curacautín, con paso por Lautaro con destino a Temuco, a ese bus se sube San Martín y se sienta en el asiento N° 8. Al llegar a Lautaro el bus es interceptado por un jeep de Carabineros de Curacautín, al cual se suben dos funcionarios quienes recorren la máquina y solicitan a San Martín bajar del bus y lo suben al jeep con dirección a Curacautín, continuando el bus hacia su destino. Al día siguiente, realizando el mismo trayecto, se percatan que frente al asentamiento Santa Julia, al costado derecho en una cuneta, había un cuerpo tirado y al bajar comprobaron que se trataba de Julio San Martín, el cual se encontraba boca abajo, su rostro estaba azul, en su trasero se encontraba cortado su pantalón y su piel estaba marcada por heridas de cigarrillos apagados. En el lugar también bajó don José Escalona con su hija, a quien recuerda como familia de la víctima. De la misma forma, el cuerpo fue observado por el conductor de la máquina, Luis Fernández (fallecido) y otras personas que no recuerda. Luego de haber observado lo sucedido, el bus continuó hasta Temuco para luego regresar a Curacautín, donde decide contarle a la cónyuge de la víctima lo sucedido, por lo cual se dirige a su casa, donde encuentra al suegro y le entrega la información. Ante lo que se le pregunta, responde que no recuerda haber visto algún funcionario que fuera en el bus, pero sí recuerda que siempre subía para dirigirse a Lautaro, un Carabinero de apellido Salazar. Hace presente que no recuerda los nombres de los aprehensores pero sí sabe que eran de Curacautín. Finalmente indica que si le exhiben las fotografías de los Carabineros podría reconocerlos y agrega que escuchó en una oportunidad que el cuerpo de Julio fue enterrado al costado de donde se encontraba, lo cual no le consta porque no lo vio.

En declaración judicial de fecha 16 de diciembre de 2014, a fs. 348 bis a fs. 349 (Tomo I) ratifica su declaración que rola fs., 56 y la prestada ante la PDI, que rola fs. 341 y siguientes. Rectifica su declaración en aquella parte donde

menciona al funcionario de Carabineros de apellido Salazar, quien viajaba regularmente a Lautaro. Dice recordarlo muy bien, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín y tenía su familia en Lautaro. Recuerda perfectamente que este carabinero iba en el bus el día que encontraron el cadáver de Julio San Martín, sin embargo este no se bajó a mirar lo acontecido. Añade el deponente que este Carabinero tenía como característica física el ser medianamente calvo, por lo que lo apodaban "cabeza de rodilla". En cuanto a la detención de San Martín, dice que eso fue aprehendido por 4 funcionarios, a quienes los ubicaba bien ya que vivía en esa época en la ciudad y además se movilizaban en la única empresa que en ese tiempo hacía el recorrido hacia Lautaro. Ese día, dos de los funcionarios se subieron al bus e indicaron que sólo San Martín, quien iba en el asiento N° 8, debía bajarse, quien sin mediar resistencia alguna bajó y se fue con ellos. Al otro día pudieron ver el cadáver a orillas del camino, como ya lo relató anteriormente. Consultado acerca de las características físicas de los Carabineros que practicaron la detención, el deponente señala que eran macizos y más altos que él, todos vestidos con el uniforme institucional. Asevera que no podría dar apellidos o apodos de los funcionarios aprehensores ya que no los recuerda, pero sí puede asegurar que eran de Curacautín, porque los ubicaba de esa comuna. Continúa su declaración indicando que el jeep que utilizaban era institucional, de color verde y que cuando se bajaron a mirar el cuerpo de San Martín, pudo ver su trasero estaba con quemaduras, como de cigarros. Además no tenía uñas y su cara estaba muy azul, media morada. No vi que tuviera impactos de bala en su cuerpo. El Tribunal le consulta si recuerda a otros pasajeros que se hayan bajado a ver el cadáver de San Martín, ante lo cual el deponente responde que sólo recuerda al chofer, don Luis Fernández, a José Escalona y su hija.

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, a fs. 785 a fs. 786 (Tomo III) expone que en el año 1973, después del pronunciamiento militar, en circunstancias que en el deponente era ayudante de la micro que viajaba desde Curacautín a Temuco, se subió como pasajero Julio San Martín, quien se sentó al parecer en el asiento N° 4. Este bus salió a las 8 de la mañana y al llegar al puente ubicado entre Lautaro y llamado Cautín, frente al Regimiento Lautaro, fue parado por uniformados, desconociendo si eran Carabineros o militares, y si eran de Lautaro o Curacautín, pues andaba más o menos al medio del bs y este estaba lleno, por lo que solo pudo darse cuenta que bajaron a San Martín y se lo llevaron sin saber los motivos ni qué dirección tomaron. Acota que este hecho no le llamó la atención ya que en esa época era habitual el que se registrara identificación y que algunas veces se llevaran detenidas a algunas personas. Ese mismo día, ya

de regreso desde Temuco a Curacautín, se dirigió a la casa de Luis San Martín para comentarle que Julio San Martín había sido detenido, sin haberle manifestado haber visto a Julio San Martín muerto, ya que una vez que fue detenido, no lo volvió a ver más.

En diligencia de careo entre Luis San Martín y Hernán Alejandro Cía Cares, de fecha 5 de abril de 1979 a fs. 787 (Tomo III), Cía ratifica su declaración prestada ante el tribunal, señalando que efectivamente visitó a Luis San Martín para informar acerca de la detención de su hermano Julio, el mismo día en que se produjo la detención, sin expresar haber visto muerto a Julio en ninguna parte.

A.8 BERTA DEL CARMEN CONTRERAS. Declara a fojas 168 (Tomo I) y fojas 657 (Tomo II).

Presta declaración ante la CNRR con fecha 2 de mayo de 1996, rolante a Fojas 168 (Tomo I), respecto de su hijo Gumercindo Gutiérrez Contreras. En su calidad de persona de Curacautín, relata que a Julio San Martín lo califica como una persona tranquila, amable y con conciencia social. Era conocida su militancia en el Partido Comunista pero no era ni activista ni desordenado. Era zapatero y fue subdelegado durante la UP. Agrega que todo Curacautín supo que lo mataron los Carabineros frente al asentamiento Santa Julia ya firma que hay personas que lo vieron muerto a la orilla del camino, pero que no quisieron testimoniar por miedo. No sabe si lo enterraron o lo lanzaron al río.

A.9 MIGUEL PARRA RIVAS. Declara a fs. 169 (tomo I) Presta declaración ante la CNRR, con fecha 2 de mayo de 1996, a fojas 169 (Tomo I), en razón de que el cementerio municipal de Curacautín, de la cual era administrador, no respondió al oficio enviado por la C.N.R.R. Se revisaron con detalle los 2 libros de ingreso entre el periodo 1974 a 1990, sin encontrarse los nombres de las víctimas, de igual forma se revisó los pases de sepultación del año 1973, sin resultados positivos. Concluyéndose que las víctimas no se encuentran en ese cementerio y tampoco hay otro cementerio en Curacautín.

A.10 ARNULFO RIVAS MENA. (35 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 247 a fs. 248, de fs. 296 a fs. 297 (tomo I), de fs. 509 a fs. 510, fs. 518 (tomo II)

En declaración policial de fecha 21 de enero de 2014, a fs. 247 a 248 (Tomo I) el deponente decanta que ostentaba el grado de Carabinero en la 5° Comisaría de Curacautín en el año 1973, recordando que al mando de la unidad se encontraba el mayor Gustavo Zúñiga Duarte y la conformaban alrededor de 50 funcionarios. Respecto al caso de Julio San Martín, señala que él lo conoció, ya que era zapatero en Curacautín. En cuanto a su detención y desaparición, el

deponente se enteró de ese hecho a finales de septiembre de 1973, por medio de familiares de San Martín, quienes conversaron con él para pedirle información de su paradero, pero él respondió que ignoraba cualquier antecedente ya que nunca lo vio en la comisaría ni supo que personal de la unidad lo haya tomado detenido. Finalmente agrega que a la fecha de la declaración, nunca tomó conocimiento ni se enteró por comentarios acerca de lo sucedido con San Martín.

En declaración policial de fecha 16 de junio de 2014, a fs. 296 a 297 (Tomo I), ratifica la declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 247 a 248 y acota que efectivamente conoció a Julio San Martín, ya que él tenía un lugar donde arreglaba zapatos, cerca de la Comisaría. Jamás lo vio como activista, ni en manifestaciones. Dice que en la plana mayor, el comisario era Gustavo Zúñiga Duarte y también había un oficial de apellido Sanhueza. En cuanto a las detenciones de personas por carácter político, desconoce la existencia de un grupo de carabineros que se dedicara a ello, que eso lo efectuaban los militares, los cuales los detenían, los llevaban a la Comisaría y los interrogaban ahí, sin ver torturas de ningún tipo. Dice que la costumbre era detener a la gente, soltarlos y volverlos a detener y que siempre lo hacían los militares. Estos llegaban en cualquier momento en sus vehículos. Consultado acerca de los funcionarios que operaban en la Comisaría, recuerda a Méndez, Del Valle y Ortiz, que cumplían las mismas funciones que los demás, es decir, servicios de población. Dice recordar a un solo funcionario de apellido Méndez, que le decían “chico Méndez” y que era de Cañete.

En declaración policial de fecha 30 de junio de 2016, a fs. 509 a fs. 510 (Tomo II) expone que respecto a la víctima, lo conoció ya que era zapatero, teniendo un taller a una cuadra de la Comisaría de Curacautín. Recuerda que San Martín no tenía antecedentes delictuales y no lo vinculaban como simpatizante de partidos políticos de izquierda. En cuanto a su detención, recalca no tener antecedentes de ello, que las detenciones de carácter político las efectuaban el teniente Sanhueza, el sargento 2° Pirce y el Carabinero Padilla. Prosigue su relato señalando que familiares de San Martín se habrían acercado a él con el objeto de obtener información sobre su detención, agregando que solo conversó con el padre de San Martín, sin poder dar antecedentes ya que desconocía su situación. Consultado acerca de la conducción de los vehículos policiales, niega haber efectuado esa labor, sin embargo recuerda en esa función al carabinero de apellido Romero, quien incluso era conductor del Mayor de la Comisaría. Por último, en cuanto al hallazgo de un cadáver a la altura del puente ubicado en la salida de Curacautín, aclara no saber nada acerca de eso.

En declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 2016, a fs. 518 (Tomo II), ratifica su declaración prestada ante la PDI, rolante a fs. 509 a fs. 510.

A.11. ROBERTO ANTONIO LEAL ORELLANA. (23 años de edad a la época de los hechos). Declara a fs. 249 a fs. 250, de fs. 326 a fs. 327 (tomo I), de fs. 509 a fs. 510, a fs. 517 (tomo II)

En declaración policial a fs. 249 a fs. 250 (Tomo I), de fecha 22 de enero de 2014, expone que para el año 1973, se encontraba cumpliendo labores en la 5° Comisaría de Curacautín con el grado de Carabinero, unidad en la cual estaba al mando el mayor Gustavo Zúñiga Duarte y la conformaban alrededor de 30 funcionarios. En cuanto a los hechos que se investigan, señala que nunca conoció a Julio San Martín y es la primera vez que escucha su nombre, no teniendo ningún antecedente acerca de su detención y posterior desaparición. Finaliza su declaración señalando que para la fecha de ocurrido los hechos, él llevaba poco tiempo, abocándose a su función de vigilante exterior del cuartel.

En declaración judicial a fs. 326 a fs. 327 (Tomo I), de fecha 9 de octubre de 2014. Ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 249 a fs. 250. Señala que los detenidos eran mantenidos en los calabozos de la unidad, nunca se enteró acerca de detenidos políticos dentro de la unidad. En los 4 años que estuvo ahí, pocas veces le tocó efectuar la labor de cuartelero. Recuerda que para época había dos funcionarios de apellido Torres, el cual fue dado de baja, se le mencionan dos nombres de ex funcionarios de apellido Torres, el cual ninguno corresponde al que recuerda el deponente. Consultado acerca de la conducción de los vehículos policiales, responde que estaban a cargo de Etter y Romero. Pirce se encargaba de las órdenes judiciales. En cuanto a Luis Ortiz, él estaba hace mucho más tiempo en la unidad y tenía más confianza entre los superiores y un mayor contacto con el comisario. Finaliza su declaración concluyendo que nunca se enteró de hechos irregulares en la unidad y menos sobre la detención y desaparición de Julio San Martín.

En declaración extrajudicial de fecha 30 de junio de 2016, a fs. 509 a fs. 510 (Tomo II) Ratifica expone respecto a Julio San Martín, jamás haberlo conocido e ignora todo antecedente relacionado con ello. Relacionado con lo anterior, señala que no recuerda que en la unidad existiera un grupo de funcionarios encargado de la detención de personas por motivos políticos liderado por el teniente Sanhueza. Solo recuerda que llegó a la unidad un grupo de militares liderado por el capitán Del Río, quienes provenían de Lautaro, recibiendo la colaboración de Sanhueza, Pirce y Torres entre otros en la búsqueda de opositores al régimen militar. Agrega que jamás participó en allanamientos ni en

salidas en patrullas con militares. Concluye su exposición señalando nunca haber tomado conocimiento acerca del hallazgo de un cadáver en el río a la altura del puente ubicado a la salida de Curacautín.

En declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 2016 a fojas 517 (Tomo II), ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 509 a fs. 510, con excepción de aquella parte donde se señala que Torres, Pirce y Sanhueza colaboraron con el capitán Del Río, debido a eso jamás fue dicho por el deponente y no le consta. Se excusa señalando que a la fecha de aquella declaración, no llevaba sus lentes para leer, y que dicha declaración le fue leída por un detective.

A.12 SERGIO SEBASTIÁN MÉNDEZ QUILODRÁN. (33 años de edad a la época de los hechos). Declara a fs. 253 a fs. 254, a fs. 300 (Tomo I).

En declaración policial de fecha 23 de enero de 2014, a fs. 253 a fs. 254 (Tomo I) expone haber ingresado a Carabineros en septiembre de 1964, siendo destinado a la 5° Comisaría de Curacautín, inmediatamente fue destinado al retén Licura, dependiente de esa Comisaría por 8 años, después siendo trasladado a Conchalí. Respecto a los hechos investigados, señala que conoció a Julio San Martín, ya que jugaba fútbol en un equipo de Curacautín, pero en cuanto a su detención y desaparición, argumenta no tener idea alguna acerca de ese suceso, que solo se enteró por la prensa escrita de la época, también por ese medio, se enteró de la noticia del hallazgo de su cadáver. Finaliza su declaración haciendo hincapié en que a la fecha de los hechos él se encontraba cumpliendo sus funciones en el retén Liucura, unidad distante a 120 Km de Curacautín.

En declaración judicial, de fecha 16 de junio de 2014, a fs. 300 (Tomo I), ratifica su declaración que rola a fs. 253 a fs. 254.

A.13 ANTONIO INOSTROZA SEGURA. (32 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 270 a fs. 271, de fs. 290 a fs. 293 (tomo I)

En declaración policial, a fs. 270 a fs. 271 (Tomo I), de 20 de marzo de 2014. Expone que es profesor normalista, siendo su primera destinación la comuna de Curacautín, donde conoció a Julio San Martín, quien era artesano zapatero y además era miembro del partido comunista, del cual el deponente también era militante, por lo cual entablaron una amistad, ya que San Martín era un hombre muy responsable e inteligente, llamando la atención que se había educado en materias como música, literatura y otras que contrastaban con su oficio, además de ser muy dedicado en su labor de bombero. Cuenta que era casado con Inés Aedo, con quien no tuvo hijos. Continúa su declaración relatando que en el gobierno del presidente Allende, le fue otorgado el puesto de Presidente

Provincial de la unidad popular de Malleco, por lo cual propuso a Julio San Martín como subdelegado de Gobierno en la comuna de Lumaco y Capitán Pastene, cargo que realizó hasta el golpe de estado. Luego relata Para septiembre de 1973 fue detenido y juzgado por un consejo de guerra, siendo condenado a 10 años de cárcel, que tras una apelación se rebajó a 3 años. Luego fue acogido por la Cruz Roja y fue enviado a Alemania y otros países antes de regresar a Chile en 1989. Ya en Chile, se le encargó por su partido la función de ser secretario general del PC en la provincia de Malleco, por lo cual tuvo la oportunidad de conocer la información que circulaba acerca de algunos detenidos desaparecidos entre los que se encontraba Julio San Martín. Se enteró que San Martín fue detenido en septiembre de 1973 por Carabineros de Curacautín, cuando viajaba en un bus Igi-Llaima, siendo trasladado a la Comisaría, y que su cadáver fue visto tirado y sangrante en el camino frente al asentamiento Santa Julia, desapareciendo sin ser ubicado hasta la fecha. Concluye señalando que solo esos antecedentes maneja.

En declaración judicial de fecha 13 de junio de 2014, a fs. 290 a fs. 293 (Tomo I), ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 270 a fs. 271. Todo lo que vivió en sus detenciones.

A.14 MARÍA SYLVIA AEDO LARA. (27 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 272 a fs. 273, a fs. 305 (tomo I), de fs. 952 a fs. 953 (tomo III)

En declaración policial de fecha 20 de marzo de 2014, a fs. 272 a fs. 273 (Tomo I) Manifiesta que era cuñada de Julio San Martín, ya que se encontraba casado con su hermana Inés Aedo Lara, actualmente fallecida, con quien no tuvieron hijos y que vivían en Purén para el año 1973. Hace presente que Julio San Martín era militante del partido comunista y subdelegado en Purén. Cuenta que ocurrido el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, al día siguiente llega su hermana Inés, quien le comunica que Julio Había sido detenido en su casa por carabineros de Purén y llevado a la cárcel de Traiguén. Recuerda que su hermana lo comenzó a visitar en la cárcel, enterándose que saldría en libertad a fines de septiembre, lo cual finalmente ocurrió el día 27 de ese mes. Al día siguiente concurrieron Carabineros de Purén al domicilio de Julio, para informarle que por intermedio de carabineros de Curacautín, tenían la información de que su madre se encontraba enferma, por lo que decidió viajar a Temuco para luego trasladarse a Curacautín, donde residía su madre. El día 29 de septiembre Julio regresaba de Curacautín a Temuco en un bus interurbano Igi-Llaima, y recuerda que la hermana de Julio de nombre Gladys, le señala que él había sido detenido por carabineros de Curacautín, siendo bajado del bus en presencia de

testigos, entre ellos **José Escalona Jara** y su **hija Gladys Escalona Leiva**, siendo esa la última vez que se le vio con vida. Su hermana Inés junto a Gladys San Martín, consultaron a carabineros de Lautaro y Curacautín sobre la detención de Julio, donde negaron ese hecho y fueron amenazadas con ser detenidas si seguían haciendo indagatorias al respecto. Al día siguiente ellas consultaron en la comisaría de Curacautín sobre el paradero de Julio, donde se les reconoció que efectivamente Julio había estado detenido ahí, pero que ya había quedado en libertad. Por último, recuerda haber escuchado comentarios acerca de que el cadáver de Julio fue visto en el fundo Santa Ana, pero como hubo amenazas de carabineros de seguir indagando, no se corroboró dicha situación.

En declaración judicial de fecha 30 de junio de 2014, a fs. 305 (tomo I) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 272 a fs. 273.

En declaración judicial de fecha 5 de octubre de 2018, a fs. 952 a fs. 953 (Tomo III), ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 272 a fs. 273. Expone que no puede aportar más antecedentes de los ya señalados en su declaración anterior, que quien puede aportar más antecedentes es Gladys San Martín. Agrega que siempre se supo que carabineros de Curacautín fueron los responsables en la detención y posterior desaparición de Julio San Martín. Consultada acerca de su hermana Inés, señala que ella tenía dos hijas, pero que no vivían con ella ni con Julio. Por último, aclara que ella no acompañó a Inés a Curacautín. Concluye su declaración señalando que Antonio Inostroza puede aportar mayores antecedentes, debido a que él era muy amigo de Julio, y compartían más amistades en Curacautín.

A.15 GLADYS DE LAS MERCEDES ESCALONA LEIVA. (24 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 338 (Tomo I), fs. 358 (tomo II), a fs. 793, de fs. 799 a fs. 800, de fs. 813 a fs. 814 (tomo III).

En declaración policial de fecha 16 de octubre de 2014, a fs. 338 (Tomo I) expone que para el 11 de septiembre de 1973, tenía 24 años y vivía en Curacautín con su Padre José Escalona Jara y su madre Cleminda Leiva Barra y era estudiante de Pedagogía en inglés en la universidad de Chile. Consultada acerca de los hechos investigados, señala que conoció a Julio San Martín ya que era su vecino, sin saber mucho más acerca de él. Hace presente que su padre José Escalona les comentó a la familia que a Julio San Martín lo bajaron del bus carabineros por un control rutinario. Posteriormente a esto señaló que algunas personas le comentaron que Julio se encontraba muerto en el puente Cautín con un letrero que decía “quien recoja este cuerpo será de inmediato fusilado”.

En declaración judicial, de fecha 17 de marzo de 2015, a fs. 358 (Tomo II), ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 338. Sin embargo, rectifica en aquella parte de su declaración en la que menciona que su padre les comentó que carabineros hizo descender del bus a San Martín. Su padre solo mencionó que a San Martín lo bajaron del bus, pero no señaló a los responsables. Ella no iba en compañía de su padre cuando eso ocurrió, sino que iba su hermana, actualmente fallecida. Desconoce si su padre comentó algo de lo sucedido a otras personas.

En declaración policial de fecha 9 de abril de 1979, fs. 793 (Tomo III), señala que a fines de septiembre de 1973, ella viajaba como pasajera en un bus de recorrido de Curacautín-Lautaro-Temuco y que al llegar a Lautaro, subió una patrulla uniformada, sin especificar si eran carabineros o militares, quienes detuvieron a San Martín, el que también iba a bordo del bus. Ignora mayores antecedentes.

En declaración judicial de fecha 14 de junio de 1979, a fs. 799 a 800 (Tomo III) Ratifica su declaración policial precedente y expone que efectivamente viajaba en un bus Igi-Llaima a las 8 de la mañana, desde Curacautín hacia Temuco. Dice que en esa época la policía controlaba los carnet y, no recuerda si carabineros o militares, pararon la micro. En uno de los asientos delanteros estaba San Martín, a quienes estos funcionarios le pidieron su documentación, y lo hicieron bajar, pero no se percató a donde lo llevaron. Después de eso el bus siguió con su recorrido y nunca más supo de San Martín. Finaliza su declaración añadiendo que no le consta que San Martín haya muerto, pero que oyó decir a su padre José Escalona que a San Martín lo habrían visto muerto en el camino hacia Lautaro, pero que eso no le consta.

En declaración judicial de 11 de marzo de 1991, a fs. 813 a fs. 814 (Tomo III), Ratifica su declaración prestada con fecha 14 de junio de 1979. Relata que no recuerda con exactitud los pormenores de los hechos, pero sí recuerda el 29 de septiembre de 1973, ya que era el día posterior a su cumpleaños. Dicho día ella viajaba a Temuco por razones de estudio y que al llegar a Lautaro, efectivos de las fuerzas armadas, sin saber si eran carabineros o militares, revisaron las documentaciones de los pasajeros del bus, solo haciendo bajar a San Martín, a quien se lo llevaron detenido, a nadie más. Tampoco supo a donde se lo llevaron y no le llamó la atención el hecho pues en esa época era normal que se detuvieran personas. Es todo lo que le consta. Sin embargo, señala que su padre José Escalona, le comentó que en viaje posterior que él hizo, escuchó comentarios en el bus respecto que se habría encontrado el cadáver de San Martín a orillas del

camino. Estos comentarios los habrían realizado los mismos pasajeros de ese viaje, pero no le dijo haber visto a San Martín. Su padre viajaba con su tía Elena Escalona.

A.16 ARMANDO HERNÁN ETTER GONZALEZ. (31 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 484 a fs. 485, de fs. 492 a fs. 493, de fs. 550 a fs. 551 (tomo II), de fs. 849 a fs. 850.

En declaración policial de fecha 9 de abril de 2016, a fs. 484 a fs. 485 (Tomo II) Precisa que para el año 1973, se encontraba destinado en la 5° comisaría de Curacautín, como guarda almacén y encargado de la sala de armas. Unidad que se encontraba a cargo del capitán Gustavo Zúñiga, siendo secundado por el Teniente Sanhueza, contando esta unidad con aproximadamente treinta funcionarios, entre los que menciona Ortiz, Salgado, Del Valle, Padilla, Riquelme y Mardones. En cuanto al caso de Julio San Martín, recuerda que llegó detenido una persona con su nombre. Nunca lo observó personalmente, solo sabía que era comunista, quien permaneció varios días detenido en el calabozo. También observó que a San Martín lo quemaban con cigarrillos por carabineros, entre los cuales recuerda al cabo Tolosa, Riquelme, el carabinero Ortiz y al teniente Sanhueza. Mientras San Martín estuvo detenido, los comentarios en la unidad eran de que como se podía dañar tanto a una persona, no lo alimentaban y en los registros señalaban que lo dejaban en libertad y a la noche lo volvían a detener, de lo cual debió haber tenido conocimiento el personal de guardia. Posteriormente se comentó que a San Martín lo encontraron muerto en el campo, específicamente en un asentamiento del cual no recuerda nombre. Concluye su declaración señalando que los funcionarios comentaban que a San Martín lo habían matado pero se desconocía quiénes, solo se podía pensar que había sido el grupo encargado de las detenciones políticas, en los cuales participaban los anteriormente señalados.

En declaración judicial de fecha 5 de mayo de 2016, a fs. 492 a fs. 493 (Tomo II) Ratifica su declaración prestada ante la PDI, de fecha 9 de abril de 2016. Anexa que en esa época se dedicaba a labores como encargado de armamento y guarda almacén de vestuario, en una oficina que estaba ubicada al costado de la entrada de la comisaría y al lado de la central de compras. Relata que un día, cuando se disponía a salir por la cocina, que tenía vidrios hacia la sala de armas, vio por la ventana que había unos 6 o 7 carabineros entre los que se encontraba el teniente Sanhueza, quienes rodeaban a un detenido que imagina que era Julio San Martín, observó que el teniente Sanhueza le colocaba un cigarrillo encendido en el cuello, por lo que no salió al patio. Fue la única vez que

vio a San Martín y por comentarios se enteró que se trataba de él. Esto ocurrió en el patio de la unidad, en una pérgola que había en ese lugar. No recuerda quiénes eran los otros funcionarios que estaban con el teniente Sanhueza, pero presume que eran los que siempre participaban con este en detenciones por motivos políticos. Ante la pregunta del tribunal, contesta que los que siempre estaban en la comisaría eran el marenga, el practicante, el peluquero, el escribiente, radio operador, central de compras, quien declara, entre otros. Sus labores se debían realizar en el recinto de comisaría, por ese motivo siempre estaban ahí. Asevera que casi todos en la unidad sabían que San Martín estaba detenido siendo torturado, que lo quemaban con cigarrillos, lo ingresaban en los libros de libertad por la mañana y en la noche lo ingresaban como detenido nuevamente. Se imagina que la mayoría de los funcionarios oriundos de Curacautín conocían a San Martín. Recuerda que en alguna oportunidad, mientras estaba en su oficina algunos funcionarios iban y le decían "oye chico, fijate que están haciendo esto (con el detenido) y le llevé comida". No recuerda quiénes eran quiénes se lo comentaron, pero así fue. Era tema lo que pasaba con Julio San Martín. Continúa su declaración afirmando que en la comisaria había un grupo que se dedicaba a practicar detenciones de índole político, la que estaba a cargo del teniente Sanhueza, integrado por funcionarios de confianza, entre ellos Gerardo Toloza, del Valle, Padilla, Salgado, Ortiz y tal vez Roberto Leal, pero no está seguro. Ante la pregunta del tribunal, dice que Domingo Pirce era del almacén de vestuario y estaba encargado de las órdenes judiciales, haciendo también servicios en la población. En cuanto a los funcionarios de apellido Torres, recuerda a Torres Osses, quien era ayudante de él en el almacén, pero él también hacía servicios en la población. Suma que Juan Marileo trabajaba en la oficina de partes, por lo que debería saber que Julio San Martín estuvo detenido y que Pedro Romero era el conductor oficial de la comisaría, por lo que en el evento que el Teniente Sanhueza hubiera salido a hacer alguna detención, debería haber ido con el chofer. El Tribunal le lee la declaración que rola de fojas 345 a fs. 347. El deponente señala: "No me acuerdo que lo haya ido a buscar a su casa el 11 de septiembre. Tal vez sucedió así, porque supe que tuvo un problema antes de esa fecha, pero no recuerdo lo que relata" Luego añade que es efectivo lo que relata Luis Ortiz en el sentido de que junto a Peñailillo y Romero eran los funcionarios autorizados para conducir vehículos. El deponente afirma no haber sido parte del grupo de Sanhueza ni haber participado en detenciones por motivos políticos. No recuerda lo que relata Ortiz, en relación a que le habría comentado fuera de la comisaría que Julio San Martín estaba detenido dentro de la unidad, expresa que

a lo mejor se lo dijo y le conversó, porque era tema de todos los funcionarios de la unidad. Dice recordar a Torres Matamala quien era del Retén Troyo, pero no recuerda que este haya cumplido labores esporádicas en la Comisaría de Curacautín. El encartado realiza un croquis a mano alzada de la Comisaría de Carabineros de Curacautín del año 1973. El Tribunal ordena agregarlo al proceso.

En diligencia de careo entre Armando Hernán Etter González y Luis Segundo Ortiz Novoa, de fecha 14 de diciembre de 2016, a fs. 550 a fs. 551 (Tomo II) Ortiz señala no reconocer a la persona con quien se le carea, el tribunal le señala que se trata de Armando Etter. Ratifica su declaración que rola a fs. 301 y siguientes. Etter por su parte reconoce a Ortiz, señala que trabajaron juntos en la 5° comisaria de Curacautín. Ratifica sus dichos que rolan a fs. 492 y sig., pero rectifica su declaración en la parte donde afirma quienes eran las personas que estaban con el teniente Sanhueza las que quemaban con cigarrillos a San Martín, no asegura que se tratara de ellos. Dice que cree que todos los funcionarios deben saber lo que pasó con Julio San Martín. Que él llevaba 7 meses en la unidad y sabía lo que pasaba, porque siempre se saben este tipo de cosas, en especial en unidades chicas. Ortiz replica asegurando que se sabía que a los campos iban a buscar armamentos y él supo que San Martín estaba detenido, porque se comentaba en la unidad. Etter por su lado, recuerda que debió acompañar a un oficial de apellido del Ríos del Regimiento La Concepción de Lautaro, hasta el asentamiento Huapi, con el objetivo buscar armamento. Dice no recordar con quién andaba este Capitán Del Río ni quiénes eran los funcionarios de Carabineros que lo acompañaron. Tampoco recuerda que en las caballerizas de la unidad hayan mantenido a detenidos políticos o que los militares los hayan apremiado físicamente. También deja en claro que él era guarda almacén y encargado de armamento y que no participó en todas las detenciones. En lo demás, tanto Etter como Ortiz se mantienen en sus dichos, incluso siendo amonestados por el Tribunal para que concuerden en sus dichos.

Diligencia de careo entre Armando Hernán Etter González y Miguel del Valle Zúñiga, a fecha 16 de mayo de 2018 a fs. 849 a 850 (Tomo III). Etter reconoce a Del Valle, trabajó con él en el año 1973 en la Comisaría de Curacautín. Ratifica sus dichos de fs. 492 y sig., en lo pertinente, también en aquella parte donde señala que Julio San Martín estuvo detenido. En cuanto a las personas que se dedicaban a las detenciones, no está seguro si participaron todos los que mencionó, puede que haya más. El deponente dice que se imagina que las personas mencionadas sabían lo que pasaba, pues era en la unidad chica y se comentaba lo que pasaba. Por su parte. Del Valle no reconoce a la persona con

quien se le carea. El tribunal le informa de quien se trata. Ratifica en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 846 y sig. No obstante, desconoce la situación vivida por San Martín y en general lo que relata Etter. Consultado Etter, señala que en esa época no había más detenidos junto a San Martín, él se encontraba detenido en el calabozo. El careo concluyó con ambos manteniéndose en sus dichos, incluso habiendo sido amonestados por el Tribunal para que concuerden con ante sus contradicciones.

A.17 PEDRO ANTONIO ROMERO URRUTIA. (28 años de edad a la época de los hechos) Declara a fs. 513 a fs. 514 a fs. 519 (tomo II).

En declaración policial de fecha 1 de julio de 2016, a fs. 513 a fs. 514 (Tomo II) Explaya que llegó a cumplir funciones a la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín en febrero o marzo de 1973, ostentando el grado de carabiniere. Sus funciones eran la de conducir vehículos fiscales, siendo el único autorizado para ello, aunque después del 11 de septiembre de 1973 fueron confiscados vehículos de otras instituciones públicas de la ciudad. De los vehículos policiales de la unidad, solo recuerda que había uno y correspondía a un jeep marca Campagnola color blanco, el cual al poco tiempo fue reemplazado por un la Renault, de color reglamentario blanco y negro. Hace presente que había otros funcionarios que conducían, pero que conducían los vehículos confiscados recordando a los Carabineros ORTIZ, PADILLA junto con el Mayor ZUÑIGA y el Teniente SANHUEZA. Respecto a las detenciones de personas de índole político, señala que eso era función de un grupo a cargo del teniente Sanhueza, los carabineros Padilla y Bascur, junto con otros carabineros de Lonquimay que viajaban solo a cumplir esa función. Consultado acerca de la víctima, Julio San Martín, declara no conocerlo, solo recuerda a una persona con ese apellido, quien vendía el diario y que habría desaparecido tras fugarse de la comisaría, haciendo presente que en esa ocasión declaró ante el tribunal. Se le exhibe la fotografía de la víctima y dice no reconocerla como detenido en la unidad. También declara que nunca acompañó al teniente Sanhueza en la búsqueda de personas opositoras al régimen militar, pues sus funciones se remitían a la conducción de vehículos fiscales, no debiendo efectuar ningún otro servicio ni en la calle ni al interior de la comisaría, incluso no trabajaba de noche. Tampoco tuvo conocimiento de la permanencia al interior de la unidad policial de algún detenido que hubiese estado días en esa situación y que haya sido interrogado y torturado por el teniente Sanhueza y su grupo. Solo recuerda el detenido de apellido San Martín, quien habría desaparecido después de fugarse, no teniendo conocimiento si este fue torturado. Por último, señala que nunca tomó conocimiento respecto al hallazgo de

un cadáver en el río a la altura del puente ubicado a la salida sur de Curacautín que da a la comuna de Lautaro.

En declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 2016, a fs. 519 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 513 a fs. 514. Respecto de los hechos que se investigan, señala que no tuvo conocimiento de la muerte de Julio San Martín y en las circunstancias en que ocurrió. Solo asocia el apellido con una persona que vendía el diario, pero no puede asegurar que se trate de él. Respecto al capitán del Río, solo lo vio dos o tres veces en la comisaría, y siempre se entrevistaba con el mayor Zúñiga o con el teniente Sanhueza. Por último, añade que había un grupo de carabineros encabezado por el teniente Sanhueza que colaboró con del Río en los patrullajes y allanamientos respectivos. Solo recuerda el nombre del Vice Primero Héctor Mardones.

A.18 BENEDICTO ABEL NARVAEZ VALENZUELA. (31 años de edad a la época de los hechos) Declara a fs. 571 a fs. 572, de fs. 582 a fs. 584 (tomo II)

En declaración extrajudicial de fecha 1 de diciembre de 2016, a fs. 571 a fs. 572 (Tomo II). Decanta que para el año 1973 desempeñaba sus funciones en la 5° Comisaría de Curacautín con el grado de Carabinero, unidad que estaba a cargo del Mayor Gustavo ZUÑIGA DUARTE, Subcomisario Teniente Adrián SANHUEZA y otros funcionarios que no recuerda, pero eran aproximadamente 40 funcionarios policiales. Sus labores consistieron en realizar patrullajes, servicios a la población, control de alcoholes. Asevera que durante su carrera funcionaria, jamás formó parte de comisiones extra institucionales en organismos de inteligencia, tales como D.I.N.A. o C.N.I. o realizar algún tipo de curso en esa área. Señala también que efectivamente había un grupo de carabineros dedicado a las detenciones de personas por motivos políticos, entre los que recuerda al suboficial Mardones, sargento segundo Pirce y el carabinero Pedro Torres Matamala, los cuales detenían a personas y las llevaban al quincho al lado de las caballerizas. En relación a posibles interrogatorios o torturas realizadas en la unidad, afirma no haber sido testigo ni tampoco fue informado por otro funcionario, sólo recuerda que de las personas que estaban detenidas se encontraban algunos profesores de su escuela industrial y de la escuela Consolidada, entre ellos don Luis Olivares, Antonio Sanhueza, Durán, Hernán Soto y otros que no recuerda. Consultado acerca de la víctima Julio San Martín, responde que lo conoció ya que era vendedor del diario "El Siglo", y que estaba casado con una mujer de apellido Aedo. Respecto a su muerte, solo con el curso

de los años se enteró de ese suceso, ya que nunca lo vio detenido en la comisaría.

En declaración judicial de fecha 14 de marzo de 2017, a fs. 582 a fs. 584 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 571 a fs. 572. Pero rectifica en la parte donde señala que Pedro Torres Matamala formaba parte del grupo que detenía personas por motivos políticos, ya que a quien hacía referencia era a Mercenario Torres. Señala que conoció a Julio San Martín, que estaba casado con una vecina de su infancia, además compartía con sus cuñados cuando eran niños, pues jugaban a la pelota, como en los años 60. Cuenta que a partir del 11 de septiembre de 1973, llegaron a la comisaría detenidos profesores que ubicaba, como Olivares, Sanhueza, Durán y Soto. Esos detenidos no eran registrados en los libros de guardia. El deponente presumía que estaban detenidos por ser partidarios del gobierno derrocado y cuenta que no tenía contacto con ellos, porque les prohibían ir al lugar donde estaban. El tribunal le pregunta cómo supo que estos detenidos estaban ahí, si no tenían acceso a ellos, a lo que el declarante contesta que ellos tenían su ropa en una pieza cuya ventana daba al exterior, ahí se podía ver una pérgola, en la cual mantenían a los detenidos que mencionó. Consultado acerca del carabinero Ortiz, señala que él siempre estuvo activo en la institución, no recuerda que antes del 11 de septiembre de 1973 fuera dado de baja, esta persona era de confianza del teniente Sanhueza y del capitán Zúñiga. El Tribunal le lee la declaración rolante a fs. 492 y siguientes, a lo que indica que nunca vio detenido a San Martín y desconoce los hechos que relata Etter en su declaración, haciendo presente que Etter siempre estaba en la unidad, a diferencia de él que salía a hacer patrullajes. Luego comenta sobre la situación de acuartelamiento que vivieron después del 11 de septiembre y añade que los únicos detenidos que vio en la unidad son los profesores que mencionó anteriormente. En cuanto a San Martín, dice que cuando prestó su declaración, él se enteró que éste estaba desaparecido. Concluye que a pesar de tener contacto con los cuñados de San Martín, nunca tuvo conocimiento de detención y desaparición, y menos de los hechos que relata Etter.

A.19 MARCELINO FERNANDEZ CABEZAS. (35 años de edad a la época de los hechos). Declara a fs. 575 a fs. 576, de fs. 589 a fs. 591 (tomo II)

En declaración extrajudicial de fecha 2 de diciembre de 2016, a fs. 575 a fs. 576 (Tomo II) Narra que ingresó a Carabineros en 1958. En 1968 fue destinado a la 5° Comisaría de Curacautín como practicante en primeros auxilios hasta 1997. Esa unidad estaba a cargo del mayor Gustavo Zúñiga Duarte. Recuerda que había funcionarios del SICAR, de los que recuerda al cabo Celis,

suboficial Urrutia entre otros, ignorando sus labores. En la unidad jamás tuvo conocimiento de que hubiera interrogatorios y torturas. Solo recuerda que había detenidos políticos entre los que estaban Hernán Soto, Aldo Osorio, Héctor Montes entre otros. Consultado acerca de la víctima Julio San Martín, señala que lo conoció ya que él era zapatero, pero desconoce antecedentes acerca de su detención y posterior desaparición. Solo se enteró por comentarios de que lo habían encontrado muerto camino a Lautaro.

Declaración judicial de fecha 15 de marzo de 2017, a fs. 589 a fs. 591 (Tomo II) ratifica su declaración que rola a fs. 575 a fs. 576. Expone que su función tenía que ver con la situación de salud de los funcionarios y sus familiares, y por ende, no efectuó patrullajes. En cuanto a las personas que vio detenidas, e incluso saludó, eran Hernán Soto Quezada y Benito Vidal Torres, quienes eran sus profesores. Después del 11 de septiembre de 1973, se formó un grupo dedicado a investigar a funcionarios y civiles. Este grupo se imagina que investigaba las actividades de índole político. Consultado por el carabinero Luis Ortiz Novoa, señala que algo pasó antes del 11 de septiembre de 1973, que él pidió su baja de la institución, pero siguió cumpliendo sus labores habituales en la unidad. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola a fs. 492 y sig., a lo que el deponente indica que nunca vio detenido a Julio San Martín, y desconoce los hechos que relata Armando Etter. Por último, agrega que después de 11 de septiembre de 1973, llegó a la comisaría una patrulla militar, con aproximadamente 8 personas, los cuales alojaban en la unidad, y salían a efectuar patrullajes, sin recordar si los militares llegaron con detenidos a la unidad.

A.20 PEDRO PABLO TORRES MATAMALA. (32 años de edad a la fecha de los hechos) Declara a fs. 577 a fs. 578, fs. 585 (tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 3 de diciembre de 2016, a fs. 577 a fs. 578 (Tomo II) Dice que ingresó a carabineros en agosto de 1962, siendo destinado a la 5° comisaría de Curacautín, hasta marzo de 1975, donde fue dado de baja por tener familiares pertenecientes a partidos de izquierda. Para el 11 de septiembre de 1973, comenzaron los patrullajes en el toque de queda. Respecto a las detenciones de índole político, señala que el personal del regimiento la Concepción de Lautaro llegaba con detenidos a la unidad, debiendo ellos ingresarla a los libros de detenidos para que pernoctaran en la unidad. El oficial del grupo era el capitán del Río. También el personal de ese regimiento tenía en su poder un listado de personas opositoras al régimen de la época. Consultado sobre el caso de Julio San Martín, en la cual su detención habría estado efectuada por el cabo Pirce, el carabinero Ortiz y el deponente, señala no tener recuerdos de

ello, aunque tampoco descarta su participación. En cuanto al hallazgo de un cadáver en las inmediaciones de Curacautín, señala que recuerda haber escuchado comentarios sobre ello. Por último, agrega no saber la causa de la muerte de esa persona, ya que el lugar donde fue encontrado estaba fuera de su jurisdicción.

En declaración judicial de 14 de marzo de 2017, a fs. 585 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 577 a fs. 578. Expone que al 11 de septiembre de 1973, hubo un acuartelamiento en grado 1, debiendo dormir en la unidad, lo que se mantuvo por tres meses. Continúa su relato señalando que nunca participó en detenciones, ni recuerda haber participado en la detención de Julio San Martín. Respecto a la muerte de una persona en el fundo Cantarrana, aclara que se enteró por la radio. Eso se comentó en la comisaría, pero no concurren a ese lugar ya que no era parte de su jurisdicción. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 492 a fs. 493, a lo cual el deponente señala que nunca supo de lo que señala Etter en su declaración respecto a Julio San Martín. También desconoce qué persona de apellido Torres pudiera haber participado en la detención de San Martín.

A.21 HECTOR GERARDO MARDONES CARCAMO. (45 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 633 a fs. 635 (tomo II), de fs. 1318 a fs. 1319 (tomo IV)

En declaración policial de fecha 28 de febrero de 2017, a fs. 633 a fs. 635 (Tomo II) Comunica haber ingresado a carabineros en 1949. En 1952 fue destinado a la 5° comisaría de Curacautín hasta su retiro en 1974. Para el año 1973, se encontraba prestando servicios en Curacautín, cuando en octubre se le encomendó la reapertura del retén Rari ruca. A partir del 12 o 13 de septiembre de 1973, a través de mandos militares, se les ordenó la detención de activistas políticos, en la cual recuerda los nombres de Jorge Montes y su hijo Héctor, como los profesores Rubén Delgado y Alicia Luna. Consultado acerca del caso de Julio San Martín, recuerda que reparaba calzado y era militante del partido comunista, y que había sido designado por presidente Allende como subdelegado de gobierno. Después desconoce cualquier antecedente acerca de su detención y posterior desaparición. Finaliza su declaración haciendo presente que nunca escuchó comentarios de su detención, solo después se enteró con el tiempo San Martín fue denominado detenido desaparecido.

En declaración judicial de fecha 12 de febrero de 2020, a fs. 1318 a fs. 1319 (Tomo IV) ratifica su declaración que rola a fs. 633 y sig. Expresa que entre septiembre y octubre de 1973 no puede precisar la fecha exacta en que se le

encomendó la reapertura del retén Rari Ruca, ni los nombres de los funcionarios que lo acompañaron. Señala que detuvo a Jorge y Héctor Montes, Rubén Delgado y Alicia Luna. Sus detenciones eran de índole político. Cuando le dieron la orden de detener a estas personas, consultó al teniente que debía hacer si se escondían, a lo que este teniente muy enojado le responde que debe dar cumplimiento a las órdenes que le coronel Bacigalupo de Traiguén había dispuesto, incluso fue acusado ante el comisario. Las personas detenidas debían entregarse en la guardia para que su personal los entregara a la jefatura, a una comisión que se encargaba de interrogar, liderada por el comisario y subcomisario, sin recordar sus nombres. Pero enseguida recuerda que Pirce, Bascur y otros que trabajaban en la unidad, eran de confianza del teniente Sanhueza. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de Armando Etter, que rola a fs. 492 y sig., a lo que el deponente señala no conocer a Etter, ni los hechos que relata. También se le lee, en lo pertinente, la declaración de Ramón Hugo Olivos Bascur, de fs. 860 a fs. 861 y de fs. 906 a fs. 910, a lo que el deponente señala desconocer todos los hechos narrados acerca de torturas o apremios ocurridos en la unidad luego del 11 de septiembre de 1973. Respecto al grupo de confianza de Sanhueza, puede mencionar a Pirce, Toloza y Torres, precisando que Torres era un funcionario que no hacía mucho servicio exterior, pues lo habían llevado a la unidad porque era bueno para jugar fútbol. A este Torres le decían "El Chuma". El padre de este Torres tenía un depósito de vino y a los hijos les tenían apodos, entre ellos el "chupilca" y "el chuma". Por último, también desconoce los hechos mencionados por Santiago Medina a fs. 869 y sig.

A.22 MERCENORIO RAIMUNDO TORRES TRONCOSO. (23 años de edad a la época de los hechos). Declara fs. 636 a fs. 637 (tomo II), de fs. 1332 a fs. 1333 (tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 2 de marzo de 2017, a fs. 636 a fs. 637 (Tomo II) expone que ingresó a carabineros en febrero de 1970. Para el 1 de septiembre de 1973, fue destinado a la 5° comisaría de Curacautín, lugar donde estuvo unos meses antes de ser trasladado a Lonquimay. En esa época tenía el grado de carabinero, por lo cual sus funciones se limitaban a solo hacer guardia, como ayudante y servicio a la comunidad. Desconoce si después de ocurrido el golpe de Estado había funcionarios dedicados a las detenciones de personas por motivos políticos. Tampoco salió a patrullar en algún vehículo de la unidad, solo recuerda una camioneta verde que era facilitada por el Banco Estado. Consultado sobre los carabineros Pirce y Ortiz, señala no recordarlos ya que

estuvo poco tiempo en la unidad. En cuanto a víctima, Julio San Martín, declara no haberlo conocido, ni tener conocimiento de su detención y posterior desaparición.

En declaración judicial a fs. 1332 a fs. 1333 (Tomo IV) Ratifica íntegramente su declaración policial de fecha 2 de marzo de 2017. Atestigua que sus laborales eran las cotidianas de un Carabinero, consistente en punto fijo en la gobernación y recorrido de población siempre acompañado de un superior, ya que contaba con dos años y medio de servicio. Anexa que pernoctaba en el cuartel por ser soltero y que desde el 11 de septiembre de 1973 rigió el grado 1, desconoce hasta qué fecha, debido a que en menos de un mes, como ya declaró, fue destinado a la Tenencia de Lonquimay, y todo el tiempo que estuvo en la Quinta Comisaría de Curacautín rigió el grado 1, aun rigiendo esta cuando ocurrió su traslado. Relata cómo era el régimen de trabajo, relativo a los turnos. Dice que luego del 11 de septiembre del 1973 se desempeñó en la Tenencia de Lonquimay y que no le correspondió realizar funciones de guardia ni de cuartelero en la Quinta Comisaría de Curacautín. Expresa que no recuerda ninguna orden restringiera al acceso al personal de Carabineros a ninguna dependencia de la Comisaría y según recuerda, todos los detenidos que llegaron en esa época eran por delitos comunes. Asevera no haber presenciado ningún tipo de apremio físico a ningún detenido, ni tomó conocimiento por ningún medio de la ocurrencia de ningún tipo de apremio físico que pudiera haber ocurrido en las dependencias de la Quinta Comisaría de Curacautín.

A.23 FERNANDO HERRERA CASTILLO. (28 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 642 a fs. 643, de fs. 665 a fs. 668 (tomo II)

En declaración extrajudicial de fecha 28 de febrero de 2017, a fs. 642 a fs. 643 (Tomo II) Explica que ingresó a carabineros en diciembre de 1965. En 1971 fue destinado a Curacautín con el grado de carabinero. Para septiembre de 1973, los servicios en la unidad no variaron, tampoco realizó detenciones de índole político. Agrega que además de los detenidos que realizaba la unidad, también llegaban detenidos que realizaba el ejército, que en su mayoría iban por motivos políticos. Dice que estos detenidos en ocasiones llegaban a la guardia y los militares no permitían que los ingresaran, ellos lo retiraban, así que desconoce su destino y recalca que no quedaba constancia de esto. Indica que en esa época estaba de jefe de unidad el Mayor Gustavo Zúñiga Duarte y de subjefe el Teniente Adrián Sanhueza. Añade que al interior de la unidad, había gente que realizaba trabajos de inteligencia, el que se denominó SICAR, entre los que los integraban eran los funcionarios Celis, Toloza entre otros. Consultado sobre algunos funcionarios, aclara que el cabo Pirce corresponde a Domingo Pirce Escobar

(actualmente fallecido), él era el encargado de la Central de Compras de la Unidad, que era una especie de almacén para los funcionarios. A pesar de este cargo realizaba de igual manera labores policiales. El carabinero Torres puede corresponder a Mercenario Torres o José Tomás Torres Osses. En cuanto a Ortiz, corresponde a Luis Ortiz Novoa, quien se identificaba en demasía con el gobierno militar, y nunca tuvieron una buena relación. Consultado acerca de Julio San Martín, declara que lo conoció, que él era zapatero, que había sido detenido y militaba en el partido comunista. Sólo supo por rumores posteriores por parte de funcionarios como de civiles, que Julio había sido detenido por Carabineros desde un bus donde se movilizaba, habría sido asesinado y su cuerpo habría aparecido a la orilla del camino en el sector de Santa Julia, lo cual no le consta.

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2017, a fs. 665 a fs. 668 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, de fecha 28 de febrero de 2017. Pero rectifica en cuanto Mercenario Torres cumplía otra función, y José Tomás Torres Osses era otro funcionario. Consultado sobre Julio San Martín, expone que lo conoció en una oportunidad, en el sindicato Moso donde estaba su hermano, solo lo conoció de vista, nunca tuvo ningún tipo de relación con él. También sabía que él militaba en el partido comunista y nunca dio problemas relacionado a su militancia política. Consultado sobre su muerte, señala que todo el mundo comentaba que lo habían matado, que este hecho había ocurrido camino a Lautaro, pero no se especificaban si eran militares o carabineros los responsables. Tampoco recuerda haber recibido alguna denuncia por los hechos ocurridos. Ante lo que se le consulta, responde que él escuchó que lo habían matado en el lugar donde fue encontrado, en un bus que venía de Curacautín, pero no conoce a las personas que iban en el bus. Añade que el comisario era don Gustavo Zúñiga Duarte, y el subcomisario que tenía que ver con los servicios era Adrián Sanhueza Muñoz. El deponente indica que en la unidad, había un servicio especializado que realizaba detenciones de índole político, en la cual se negó a participar. Algunos funcionarios que participaron de este servicio eran Toloza y Luis Ortiz, este último era el más fanático, pero desconoce si este participó en los hechos de la víctima de autos. Añade que nunca se hizo ningún procedimiento tendiente a esclarecer los hechos relativos a la muerte de Julio San Martín. Consultado sobre si hubo detenidos políticos en la unidad, solo recuerda a Gustavo Weisse Abarzúa, desconoce los cargos que se le imputaron, pero estuvo detenido en la comisaría, le parece que fue víctima de tortura, pero él no vio a nadie torturar, esto lo sabe porque el detenido lo dijo. Ante lo que se le pregunta, dice que vio varios procedimientos injustos practicados por Adrián Sanhueza, pero

desconoce si ordenó la ejecución de personas. Se lee en lo pertinente, la declaración de Gustavo Weisse Abarzúa, a lo cual señala que eso debe ser efectivo, que si andaba Sanhueza, es que eran carabineros los que participaron en la muerte de Julio San Martín. Casi todos los patrullajes de este servicio de inteligencia, se realizaban vestidos de civil. Dentro de las personas que estaban en el servicio de Inteligencia menciona a Celis y Tolosa, por el tiempo no recuerda más personas, pero cree totalmente que estas personas pudieran haber participado en la muerte de Julio San Martín, aunque no le consta. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración judicial de fs. 492 frente lo cual el deponente señala: “Él era el encargado de la sala de armas en Curacautín, su lugar de trabajo estaba frente a la guardia, él debe saber eso porque él era el que hacía entrega de armamento y logística, y él estaba todo el día ahí en su puesto de oficina.” A lo que se le consulta, dice que él tendría que haber tenido conocimiento, porque ingresaba las detenciones, pero específicamente a esa persona no la ingresó cuando prestaba ese tipo de servicios. El tribunal le lee la declaración de fs. 492 y fs. 493, a lo que el deponente concuerda con los nombres señalados como integrantes del grupo que efectuaba detenciones por motivos políticos, el cual estaba liderada por el teniente Sanhueza. Finalmente, dice que Armando Etter por los servicios que presto en la unidad debió haber tenido mucho más conocimiento de lo que ocurría en la unidad.

A.24 MIGUEL SEGUNDO MERINO GAJARDO. (28 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 646 a fs. 647 (tomo II), de fs. 1315 a fs. 1317 (tomo IV)

En declaración extrajudicial de fecha 2 de marzo de 2017, de fs. 646 a fs. 647 (Tomo II) Precisa que ingresó en 1972 a carabineros. En noviembre de ese mismo año, es destinado a la 5° comisaría de Curacautín, la cual estaba a cargo de un mayor de apellido Duarte y un Teniente cuyo nombre no recuerda. En diciembre de 1973 fue enviado al retén Licura por tres meses. Para septiembre de 1973, como era nuevo, su función era de ser cuartelero y ocasionalmente la de hacer patrullajes con personal más antiguo, no recordando que haya habido al interior del cuartel personal de inteligencia. Consultado por funcionarios de esa unidad, recuerda a Pirce, quien era Sargento y a los carabineros Ortiz y Torres, solo recuerda su nombre. Respecto a la víctima Julio San Martín, declara no conocerlo y no mantener ninguna información sobre él.

En declaración judicial de fecha 10 de febrero de 2020, a fs. 1315 a fs. 1317 (Tomo IV) ratifica su declaración que rola a fs. 647 y siguientes. Antes del 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como cuartelero, debiendo hacer

aseo en la guardia y en las caballerizas, ocasionalmente realizaba patrullajes con personal más antiguo. Esto último, lo realizaba con el sargento Toribio Salazar. Después del 11 de septiembre de 1973, llegaron detenidos a la comisaría, por el personal más antiguo, ejemplo de ello era el cabo "el chuma" Torres entre otros. Desconoce los motivos de esas detenciones. Ante lo que se le pregunta, dice recordar que pasó personal militar por la comisaría, conversaron con la jefatura y se fueron, porque parece que iban a la frontera. No supo que algún funcionario de carabinero haya efectuado patrullajes con personal militar o que le haya ido a mostrar lugares. Continúa su relato señalando que no recuerda que personal militar haya dejado detenidos en la unidad y tampoco supo que haya existido personas detenidas en la Comisaría de Curacautín luego del 11 de septiembre de 1973, que hayan estado por otros motivos diferentes a delitos comunes. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de Fernando Herrera Castillo, que rola a fs. 642 a fs. 643 y de fs. 665 y sig. El deponente indica que recuerda a un funcionario de apellido Herrera que jugaba basquetbol. En cuanto a sus declaraciones, desconoce todo lo que narra Herrera. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de Armando Etter, de fs. 492 y sig. A lo que el deponente señala desconocer a Etter, y los hechos que narra. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de Ramón Hugo Olivos Bascur, de fs. 860 a fs. 861, de 906 a fs. 910. A lo que el deponente señala que Olivos era el enfermero de ganado. En cuanto a sus dichos, desconoce lo que relata Olivos sobre la presencia de detenidos en la unidad y torturas aplicadas a ellos, pero señala que es efectivo lo que dice en relación a que Pirce, Torres, los hermanos Padilla y Ortiz que andaban siempre con el teniente Sanhueza. Anexa que el Torres que mencionó es el apodado "el chuma", de grado cabo. Por último, recalca nunca haber visto personas detenidas y torturadas en la unidad.

A.25 EDMUNDO DEL CARMEN SALAS BASCUR. (23 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 648 a fs. 649, de fs. 699 a fs. 700 (tomo II)

En declaración extrajudicial de fecha 28 de febrero de 2017, a fs. 648 a fs. 649 (Tomo II). Proclama que ingresó a carabineros en enero de 1973 siendo destinado a la 5° comisaría de Curacautín en agosto de ese año, unidad a cargo del Mayor Gustavo Zúñiga y que contaba con una dotación de aproximadamente 30 funcionarios. Para septiembre de 1973, siendo nuevo en la unidad, desconoce detalles respecto a detenidos de índole político, solo se enteró de la detención de Weisse en la unidad. En cuanto a la víctima Julio San Martín,

desconoce totalmente a esa persona y lo relativo a su detención y posterior desaparición.

En declaración judicial de fecha de 22 de noviembre de 2017, a fs. 699 a fs. 700 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 648 a fs. 649. Señala que para esa época estaba soltero y residía en la misma unidad. Señala que para después del 11 de septiembre de 1973 realizó patrullajes a pie dentro de la población. Respecto a Gustavo Weisse, declara que recuerda haberlo visto detenido en la unidad. También declara que en la 5° comisaría de Curacautín no había un grupo especial para practicar detenciones después del 11 de septiembre de 1973. El Tribunal le lee, en lo pertinente, el documento de fs. 13 y sig., a lo que el deponente indica desconocer el hecho que se le relata, ignorando de que funcionario Torres se trata ese documento, solo recuerda que en la comisaría Mercenorio Torres y Pedro Torres. Respecto a Pirce, solo recuerda que trabajaba en la central de compras. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de Armando Etter, que rola a fs. 492 y sig., a lo que el deponente indica que nunca vio detenido a Julio San Martín y desconoce los hechos que Etter relata, a pesar que estaba en situación de acuartelamiento.

A.26 EDUARDO EUGENIO SEPULVEDA PERLOZ. (23 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 650 a fs. 651 (tomo II), de fs. 1365 (tomo IV)

En declaración extrajudicial de fecha 28 de febrero de 2017, a fs. 650 a fs. 651 (Tomo II). Relata que en febrero de 1972 fue contratado por la prefectura Malleco-Angol. El 1 de octubre de 1973 tras haber llegado a la 5° comisaría de Curacautín, fue trasladado hasta la prefectura Licura, donde permaneció por dos meses, luego regresa a Curacautín hasta 1975, donde parte hacia Lonquimay. En su carrera policial, jamás vio malos tratos hacia las personas en todas las unidades en donde trabajó. Aclara que en virtud que para el 11 de septiembre de 1973 él era carabinero con solo 1 año de servicio, no participó, presenció, escuchó nada relacionado con delitos relacionados con derechos humanos y respecto a los hechos que se investigan, informa que él llegó a la 5° Comisaría de Curacautín el 1 de octubre de 1973, por lo que desconoce todo lo que se investiga. Finalmente, en cuanto a la víctima Julio San Martín, es la primera vez que escucha su nombre, ignorando cualquier antecedente respecto de él.

En declaración policial de fecha 3 de febrero de 2020, a fs. 1365 (Tomo IV) ratifica su declaración prestada ante la PDI, de fecha 28 de febrero de 2017. Aclara que nunca escuchó en su vida nada respecto a Julio San Martín,

dado a que en esos años era un “chiporro”, y en esa época como recién llegado a la institución no tenía ningún acceso a la información. Solo lo tenían afuera como vigilante exterior en el poco tiempo que estuvo en Curacautín, ya que poco después partió a Lonquimay.

A.27 RENÉ ENRIQUE SOTO REYES. (26 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 653 a fs. 654 (tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 24 de febrero de 2017, a fs. 653 a fs. 654 (Tomo II) señala que en agosto de 1972 ingresó a Carabineros, y en mayo de 1973 fue destinado hacia la 5° Comisaría de Curacautín. Con el grado de carabinero sus funciones se remitían a servicios ordinarios, como vigilante exterior, cuartelero y acompañante de jefe de servicio. Consultado sobre si realizó otras operaciones en la unidad, responde que efectuó patrullajes de infantería y a caballo, sin realizar detenciones. Con respecto a los vehículos que poseía la unidad, dice que según recuerda sólo tenían uno, no sabe de qué tipo. En cuanto a un suboficial de apellido Pilsen, declara que él era encargado de la central de compra de la unidad, realizando un trabajo meramente administrativo. Respecto a los funcionarios de apellido Torres y Ortiz, recuerda que había dos funcionarios con el apellido Torres (Mercenorio y José) y que a Luis Ortiz le apodaban “el chico”. Recalca el deponente que no tiene información acerca de que se hayan realizado detenciones políticas en la unidad y que Curacautín era un pueblo muy pequeño donde todos se conocen, por lo que una situación como la señalada anteriormente se hubiese sabido. Relacionado al caso de Julio San Martín, declara no tener antecedentes que aportar respecto a ello. Por último indica que estuvo ocho meses en esa unidad, ya que fue trasladado al retén Manzanar entre otros lugares.

A.28 BARTOLOMÉ GUTIERREZ GUTIERREZ. (47 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 655 a fs. 656 (tomo II), de fs. 1366 (tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 28 de febrero de 2017, a fs. 655 a fs. 656 (Tomo II) Asevera que conoció a Julio San Martín, ya que era de una familia conocida del sector y se dedicaba a la zapatería. A inicios de la década de los 70', Julio fue designado al parecer en la gobernación de Capitán Pastene y ahí perdieron contacto ya que el declarante era chofer de camión y pasaba bastante tiempo fuera de la ciudad. Agrega que San Martín era simpatizante del partido comunista. Respecto a las circunstancias de la detención de Julio, puede señalar que por comentarios de la gente de la localidad, se enteró que lo habían matado individuos desconocidos y que el cuerpo de él habría aparecido en el sector de Santa Julia. Esta información se la proporcionó el cuñado de Julio, cuyo nombre

no recuerda. Es todo cuanto puede aportar respecto a la detención de Julio San Martín. Consultado acerca de los funcionarios policiales Pirce, Ortiz y Torres, señala no conocerlos.

A.29 GUSTAVO ANTONIO WEISE ABARZÚA. (30 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 658 a fs. 660, de fs. 662 a fs. 664 (tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 28 de febrero de 2017, a fs. 658 a fs. 660 (Tomo II). Respecto a los hechos investigados, desarrolla que efectivamente conoció a Julio San Martín, él se dedicaba a la zapatería y militaba en el partido comunista, siendo designado en la época de los 70, como subdelegado en Lumaco. Ocurrido el golpe de Estado, se enteró que Julio fue detenido por carabineros, pero al rato fue liberado. A fines de septiembre de 1973 el deponente se entera que mientras Julio San Martín viajaba en un bus de recorrido Curacautín-Temuco, fue detenido por Carabineros, que según testigos fueron los funcionarios de apellido Mardones y Lacoste. A la altura del puente cautín bajan del bus a San Martín, una vez bajado, le disparan, lo que fue presenciado por pasajeros, a lo cual carabineros disparó al aire y el bus continuó su viaje. Testigo de esta situación fue un pasajero que iba en el bus de nombre Sigisfredo Cabrera. Continúa relatando señalando que el cadáver de Julio fue dejado en el lugar, desconociendo qué sucedió con él después. Consultado sobre algunas personas en particular señala lo siguiente: Luis Olivares, era ex director de la escuela industrial; Antonio Sanhueza, profesor de la escuela industrial; Hernán Soto, fallecido, profesor de la escuela industrial; Aldo Osorio, profesor, vive en el sector de río blanco. Consultado sobre algunos carabineros, señala que Pirce era sargento, Torres en la actualidad vive en el campo y Ortiz vive en Temuco.

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2017, a fs. 662 a fs. 664 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, de fecha 28 de febrero de 2017. Señala que San Martín lo conocía como zapatero y era vendedor del diario "el siglo" en Curacautín, era una persona muy introvertida y presumía que era comunista, ya que vendía este diario que era de ese partido. Agrega que no tenía ningún tipo de relación con él, ni jamás vio relaciones con alguien o que estuviera en reuniones de índole político. Cree que fue asesinado por ser nombrado subdelegado de Lumaco. De la muerte de San Martín, sabe que fue detenido por Carabineros, pero lo sabe de oídas, ya que Sigfredo Cabrera, quien viajaba en el bus le contó lo sucedido. Según ese testigo, los carabineros detuvieron el bus y le sacaron las llaves al chofer y el único que andaba a rostro descubierto era el Teniente Adrián Sanhueza, de la 5° Comisaría de Curacautín, a

quien tiene que haberlo enviado el Mayor de Curacautín llamado Gustavo Zúñiga Duarte. Todos los demás carabineros andaban con unos pasamontañas donde solo se le veían los ojos, siempre hacían los operativos así. Cuenta que a San Martín lo bajaron del bus y toda la gente se asomó por las ventanas y vio cómo lo mataron. Según le contó Sigifredo, le habrían disparado por la espalda, a unos 50 metros del bus, quedando su cadáver botado en ese lugar por tres días. Ante la pregunta del tribunal, el deponente indica que presume que Julio debió haber tenido un problema con alguien de Lumaco. Consultado sobre donde habrían ocurrido los hechos, señala que ocurrieron desde el puente cautín hacia Lautaro. También declara que la cónyuge de San Martín lloraba por las calles porque no la dejaban buscar a su marido, ya que en esa época se temía mucho a dos personas: Alfonso Podlech, fiscal que daba las órdenes para buscar a las personas y las mataban y al capitán del Río. Agrega que la señora de San Martín nunca habló con él y consultado sobre la patrulla, responde que en ella iban como 20 personas, entre ellos, según le comentó Sigfredo Cabrera, Mardones y Lacoste, siendo Mardones el que ostentaba el mayor cargo. Por último, señala que en esa patrulla solo iban carabineros, no militares. Finalmente, cuenta sus experiencias vividas en cuanto a detenciones.

A.30 MARÍA GLADY SAN MARTÍN SAN MARTÍN. (36 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 769 a fs. 771, a fs. 789, a fs. 792, a fs. 824, de fs. 827 (tomo III), de fs. 1219 (tomo IV).

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 1979, a fs. 769 a fs. 771 (Tomo III) expone que es hermana de Julio San Martín, quien cuatro meses antes de septiembre de 1973 se fue a vivir con su cónyuge a Capitán Pastene, lapso en el que él no les escribió, pero como ella tenía conocimiento que su hermano era comunista, fue a saber de él a Temuco, específicamente a la casa de los padres de la esposa de este. Relata que la esposa de su hermano, Inés Aedo Lara, le contó que Julio había sido detenido y llevado a la cárcel en Traiguén, por lo cual lo fue a visitar, viéndolo que estaba bien y este le comentó que recibía buenos tratos. Relata que, no recuerda fecha, pero en esa ocasión su hermano le expresó que ese día o al día siguiente lo iban a llamar para declarar y que posiblemente iba a salir en libertad. Posteriormente, tal como él lo había dicho, salió en libertad lo cual supieron por un telegrama que él mismo envió. Cuenta que al parecer, su hermano estuvo 3 días en Capitán Pastene después que salió en libertad. Luego de eso, viajó a Temuco y luego a Curacautín, llegando un día en la tarde en la micro Igi Llaima, pernoctando donde su madre Florentina San Martín. Sin embargo, esa tarde había ido donde su cuñada Juana Aedo, casa

donde la deponente lo fue a ver con su marido Renato Verdugo y ahí su hermano le comentó que nada le había pasado, que estaba tranquilo y que iba a trabajar en el taller de zapatería en Capitán Pastene, pues esa era su profesión. Añade que al día siguiente, su hermano tomó la micro que va a Temuco a las ocho horas. Lo anterior lo sabe por un hijo suyo llamado Edgardo Verdugo San Martín, quien viajó ese mismo día en esa micro. La deponente indica que luego supo de oídas que Julio había sido detenido camino a Lautaro por carabineros, sin saber sus nombres y sin poder asegurar esto. También se rumoreó que al día siguiente del viaje de San Martín, personas que iban en la micro procedente de Temuco lo habrían visto muerto en la orilla del camino, lo cual también lo sabe por rumores y a ella no le consta, pero en vista de estos rumores viajó a Temuco a avisarle a la cónyuge de su hermano y juntas se devolvieron a Curacautín a consultar a la comisaría, ahí las atendió el teniente Sanhueza, quien les dijo que San Martín había estado media hora detenido y había sido liberado. También aclara que en ningún momento hablaron con el mayor Zúñiga, y por ende, nunca las había amenazado. Suma que después de esto, nunca más supo del paradero de su hermano, pero no puede asegurar qué le pasó, puesto que hay gente de esa época que se dio por desaparecida y después aparecieron por otras partes, además también se sabe que estas personas andan con documentos falsos. Añade que su madre Florentina San Martín tiene una enfermedad al corazón y no sabe nada sobre la desaparición de su hijo, por lo que considera que sería una crueldad entrevistarla. Por último, señala que a su hermano Luis San Martín, lo habría visitado un joven ayudante de los buses Igi-Ilaima, de apellido Cid, quien le dijo que Julio había sido visto muerto, más o menos a la altura del fundo del señor Pertucé, aunque nada de eso le consta.

En declaración judicial de fecha 9 de mayo de 1979, fs. 789 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante carabineros, de fecha 26 de marzo de 1979. Pero aclara que la patrulla que detuvo a su hermano Julio San Martín, no sabe si estaba integrada por carabineros o militares.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de abril de 1979, a fs. 792 (Tomo III) declara ser hermana de Julio San Martín, que para la época del pronunciamiento militar, él había sido detenido en Traiguén, pero que para el día 25 de septiembre de 1973 había sido puesto en libertad, viajando posteriormente a casa de su esposa Gloria Inés Aedo Lara en Temuco y luego a Curacautín. Cuenta que en la noche del 28 de septiembre fue visitada en su domicilio por su hermano Julio y a las 8:00 horas del día 19 de septiembre, se embarcó en un bus Igi Llaima con destino a Temuco, siendo esta la última vez que lo vio. El 4 de

octubre de 1973, se presenta en su casa un joven de apellido Sías, quien trabajaba en el microbús, el que le informa que aproximadamente a las 9:00 hrs., en la ciudad de Lautaro, había subido al bus personal uniformado, al parecer Carabineros de Curacautín, quienes habían tomado detenido a Julio San Martín, y que días después, cuando viajaba nuevamente en el bus con destino a Temuco, como a unos 20 minutos de Curacautín, había visto el cadáver de Julio a una orilla del camino. Con esos antecedentes ella y su cuñada se presentaron en la comisaría de Curacautín, consultando sobre Julio, sin conseguir respuestas concretas. Termina diciendo que un comerciante de Curacautín de apellido Salazar, habría visto a su hermano Julio detenido en la comisaría de esa ciudad.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de marzo de 1991, a fs. 824 (Tomo III) explícita que es hermana de Julio San Martín, quien desapareció en 1973, después de ocurrido el golpe, por ser militar del partido comunista y que a la fecha de la declaración no se ha confirmado nada. Recuerda que para el 28 de septiembre de 1973, Julio llegó a Curacautín con el fin de visitar a su madre, quien se encontraba enferma, pernoctando ahí y al día siguiente se disponía a regresar a Temuco en un bus Igi-llaima que salía a las 8 de la mañana y que hacía su recorrido por Lautaro, pero no recuerda nombre de alguna persona que se lo haya dicho. Dice que inmediatamente regresó a Temuco para informarle esto a su cuñada, Gloria Inés Aedo Lara, y juntas regresaron a Curacautín donde fueron a la Comisaría y conversaron con el comisario de apellido Zúñiga y un Teniente de apellido Herrera, quienes las amenazaron, por lo cual se asustaron y no volvieron a preguntar. Hace presente que cuando viajó a Temuco a encontrarse con su cuñada, el auxiliar del bus Alejandro Sías, al pasar frente al asentamiento Santa Julio, le hizo un gesto con la mano para indicarle que en ese lugar había estado tirado el cuerpo de su hermano.

En declaración extrajudicial a fs. 827 (Tomo III) ratifica sus declaraciones prestadas ante la PDI. Agrega que es todo lo que puede declarar, ya que los hechos que relató, los escucho por terceros. Nada le consta personalmente.

En declaración judicial de fecha 26 de agosto de 2019, a fs. 1219 (Tomo IV) ratifica sus declaraciones que rolan a fs. 769 y sig., de fs. 774, de fs. 789, fs. 824, fs. 827. Agrega que cuando fue con su cuñada a consultar por Julio a la comisaría de Curacautín, las atendió un carabinero que no era oficial, si no que era de un grado más bajo, el que les dijo que a Julio lo tuvieron detenido por media hora y había sido liberado. Además, ambas fueron amenazadas para que dejaran de hacer consultas respecto a San Martín. En cuanto al parte policial de

fs. 774, y la declaración de fs. 789, aclara que su hermano fue detenido por carabineros de Curacautín, no por personal del ejército, lo cual siempre se supo en su familia y por eso fueron a consultar por él a la Comisaría. Ella por rumores que circularon, se enteró que los que tuvieron responsabilidad en la desaparición de su hermano eran los carabineros de Curacautín, entre ellos Toloza (fallecido), Ortiz y un funcionario apodado “el chico” Fernández, que conducía vehículos.

A.31 DOMINGO PIRCE ESCOBAR. (35 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 776, de fs. 826 (tomo III).

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 1979, a fs. 776 (Tomo III) acota desconocer cualquier antecedente respecto a la presunta desgracia de Julio San Martín, pues para septiembre de 1973 el deponente trabajaba en forma interna en la unidad, sin realizar patrullajes, por ende, no posee ninguna información respecto a San Martín. Nunca lo vio detenido en la comisaría. Por último indica que él mismo ayudo a revisar el registro de ingreso de detenidos y su nombre no apareció.

En declaración extrajudicial de fecha 12 de marzo de 1991, a fs. 826 (Tomo III) recuerda que para el pronunciamiento militar hasta 1979, trabajó en la comisaría de Curacautín. Niega tener participación y conocimiento de cualquier hecho sobre Julio San Martín, ya que en esa época él trabajaba en la central de compras de Carabineros y no cumplía servicios en la calle. Concluye su relato declarando haber conocido a San Martín, y que por rumores en la comisaría y por una hermana de él supo que se había extraviado. Esta hermana conversó con el deponente, a lo que él le consulta porqué se había mencionado su nombre como sospechoso, a lo que ella responde que solo les interesa un proceso judicial y obtener dinero a costa del gobierno, sin tener mayor importancia los nombres mencionados.

A.32 LUIS ENRIQUE FERNANDEZ IBAÑEZ. (41 años de edad a la época de los hechos) Declara de fs. 778 a fs. 779, a fs. 793 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 28 de marzo de 1979, a fs. 778 a fs. 779 ratifica su declaración ante Carabineros y expone que en 1973 era conductor de buses en Igi-Illaima, por lo que le consta que después del 11 de septiembre de 1973, subió al bus como pasajero Julio San Martín en el recorrido de las 8 de la mañana. Como a las 9.30 horas, al llegar a Lautaro, sobre el puente cautín, una patrulla de uniformados, sin saber si era de carabineros o militares, detienen el bus para realizar una revisión de documentos a los pasajeros, procediendo a detener a San Martín, quien iba sentado en el asiento N° 4, es decir, en la primera corrida, ocasión en que no detuvieron a nadie más. Asevera que no supo la razón

ni dónde se lo llevaron, pero según la gente que pudo ver, se lo llevaron en un vehículo. Cuenta que él conocía al Sargento Pirce y al Cabo Ortíz y Torres, oír debido a que en esa fecha la micro iba muy llena, no pudo apreciar quiénes eran los aprehensores. Afirma que esto no llamó la atención ya que en esa época era común las detenciones. Cuenta que después de eso él salió con permiso y no recuerda quién lo relevó. Posterior a su detención no volvió a ver más a San Martín, solo escuchó comentarios acerca de que lo habrían encontrado muerto cerca del asentamiento Santa Julia, lo cual a él no le consta. Por último, añade que para el año 1973 su acompañante era Alejandro Cías Cares.

En declaración policial de fecha 4 de abril de 1979 a fs. 793 (Tomo III) aduce que cuando era conductor de bus en la empresa Igi-Llaima, en un recorrido Curacautín-Lautaro-Temuco, pasando por Lautaro, a las 9 de la mañana de un día del año 1973, se subió una patrulla uniformada, sin especificar si eran militares o carabineros, detuvieron a Julio San Martín.

A.33 LUIS SAN MARTÍN. (45 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 780 a fs. 781, a fs. 787 (tomo III).

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, rolante a fojas 780 a 781 (Tomo III), afirma ser hermano de Julio San Martín. Sin precisar una fecha, señala que Julio lo fue a ver, ocasión en que le preguntó cómo lo habían tratado, pues sabía que había estado detenido en la cárcel de Traiguén por motivos políticos, ante lo cual le respondió que no había tenido ningún problema y que las autoridades lo habían tratado bien, pero no manifestó nada respecto a sus proyectos futuros, solo le dijo que por esa noche iba a pernoctar en casa de su madre y al día siguiente viajaría a Temuco por la mañana, para reunirse con su esposa. Apunta que a él no le consta que su hermano haya tomado la micro para hacer su viaje, eso solo lo supo por su madre. A los tres días después de eso, el ayudante del bus Igi-Llaima, de apellido Cías, lo visitó en su domicilio para avisarle que en el recorrido desde Temuco a Curacautín, vio muerto a su hermano Julio, sin explicarle como le constaba eso, si la micro había parado en el lugar o a qué altura del camino estaba. Después de recibir esa información, su cónyuge Nelly San Martín Quintana y Gladys San Martín, efectuaron averiguaciones en la comisaría de Lautaro, sin resultados positivos y al ir hacia allá, pudieron darse cuenta que en el camino no se encontraba el cuerpo de su hermano, según lo que Cía había manifestado, a pesar que esto se hizo al día siguiente que este fuera a avisar a su domicilio. Concluye su declaración señalando que la cónyuge de Julio San Martín, también efectuó averiguaciones, sin resultados positivos.

Diligencia de careo entre Luis San Martín y Hernán Cías Cares de fecha 5 de abril de 1979, a fs. 787 (Tomo III). Cías ratifica su declaración de fs. 785 a 786, señalando que efectivamente visitó a Luis San Martín para informar acerca de la detención de su hermano Julio, el mismo día en que se produjo la detención, sin expresar haber visto muerto a Julio en ninguna parte. San Martín ratifica su declaración, en cuanto en haberse reunido con Cías para ser informado de lo descrito anteriormente, pero en cuanto al comentario de haber visto muerto a Julio San Martín, no podría afirmar que se lo dijo Cía, porque esto también se lo comentó el Señor Escalona y otras personas, lo cual no recuerda bien en razón del tiempo transcurrido.

A.34 RAMÓN RENATO VERDUGO. (38 años de edad a la época). Declara de de fs. 781 a fs. 783, a fs. 818 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, a fs. 781 a fs. 783 (Tomo III) apunta ser esposo de Gladys San Martín, y que después de ocurrido el pronunciamiento militar, San Martín viajó desde Temuco hacia Curacautín para ver a su madre. Cuenta que se encontró con San Martín en la casa de Juana Aedo, donde conversaron acerca de su detención en Traiguén, la cual había sido por temas de política, pero le indicó que no tenía problemas y que las autoridades lo habían tratado bien. También le expresó que pernoctaría donde su madre y que al día siguiente viajaría a Temuco a encontrarse con su esposa, quien lo esperaba allá. Expresa no constarle que Julio efectivamente haya tomado la micro en la mañana, pero el deponente afirma que envió a su hijo a dejarle un paquete a casa de su madre o de Juana Aedo y en uno de esos lugares le dijeron que ya se había ido a la micro, motivo por el cual su hijo fue hasta la micro a entregarle dicho paquete. Posteriormente, a los tres días después, encontrándose el deponente en Malalcahuello, fue avisado telefónicamente que Julio fue encontrado muerto, pero no le dijeron dónde. Por comentarios posteriores se enteró que su cadáver había sido visto botado camino a Lautaro. Supo que su cónyuge Gladys San Martín con la cónyuge de Julio estuvieron averiguando en la comisaría de Curacautín, donde les habrían expresado que efectivamente Julio estuvo detenido, pero que había sido puesto en libertad. Ignora quién las atendió. Finaliza declarando que no hay evidencias de que Julio efectivamente haya muerto, pues todo se ha sabido por comentarios y que desde el viaje de Julio, nunca más lo volvió a ver.

En declaración judicial de fecha 28 de marzo de 1991, a fs. 818 (Tomo III) ratifica su declaración prestada a fecha 4 de abril de 1979. Señala no tener nuevos antecedentes que aportar. Con el transcurso del tiempo, a partir de

los casos de los detenidos desaparecidos hubo muchos comentarios y versiones al respecto, de las cuales no se tiene nada concreto, por lo que no podría dar a conocer ninguno de esos comentarios que no tienen base.

A.35 JUANA AEDO LARA. (33 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 783 a fs. 784 (tomo III).

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, a fs. 783 a fs. 784 (Tomo III) atestigua ser cuñada de Julio San Martín, y que a fines de septiembre 1973, él fue a Curacautín con un salvoconducto desde Temuco para ver a su madre quien se encontraba gravemente enferma, ocasión en que previamente pasó a casa de la deponente, donde le comentó que había estado detenido en Traiguén, pero que había sido bien tratado y que tenía que volver a Capitán Pastene ya que allá debía firmar, razón por la cual alojaría una noche en casa de su madre y al día siguiente viajaría a Temuco, en un bus a las 8 de la mañana, para juntarse con su esposa. Cuenta que previo a que San Martín tomara la micro, fue a despedirse a su casa y le consta que tomó esa micro ya que José Escalona, quien también iba en ese bus dijo que lo vio y que en medio del trayecto este bus fue detenido por un jeep carabineros, quienes detuvieron a San Martín y se lo llevaron, pero no dijo a dónde ni el motivo de la detención. Días después supo que Julio no había llegado a su casa, por lo que su cónyuge consultó en la comisaría de Curacautín sobre su paradero, dándole como respuesta que efectivamente fue detenido, pero que ya había sido liberado. Comenta que también por oídas se enteró que en el trayecto a Temuco, más o menos frente al fundo San Nicolás, habían encontrado a Julio muerto, pero nada de eso le consta. Solo que desde ese viaje no lo volvieron a ver más. Tampoco sabe qué carabineros lo habrían detenido y todas las averiguaciones que se hicieron por parte de la familia dieron resultados negativos.

A.36 ELENA ESCALONA JARA. (54 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 789 a fs. 790 y fs. 793 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 9 de mayo de 1979, a fs. 789 a fs. 790 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante carabineros. Señala que efectivamente con fecha 2 de octubre acompañaba a su hermano José Escalona a la ciudad de Temuco, por un control médico. Recuerda que tomaron el bus que hace el recorrido desde Curacautín a Temuco, a las 8 de la mañana, sentándose al lado izquierdo, aproximadamente en los asientos 23 y 24 y al llegar a la altura del asentamiento Santa Julia, un pasajero exclamó "hay un muerto", por lo cual el bus retrocedió un poco, pero nadie bajó, ya que iba bastante gente y alguien dijo que se trataba de Julio San Martín. Por lo que la gente decía el muerto estaba al

lado derecho del camino e incluso la gente miraba en esa dirección, sin embargo ni ella ni su hermano miraron, por lo que no le consta nada de esto. Dice que no vio que el chofer se bajara. Por último, rectifica su declaración dada ante carabineros en el sentido que el muerto haya estado en una cuneta, aclara que dijo que estaba al lado derecho, como lo indicaba la gente que estaba en el bus en ese día. Apunta que al parecer Julio San Martín se fue a Lumaco en junio de 1973, pero no lo ha vuelto a ver más.

En declaración judicial de fojas 793 (Tomo III) expone que más o menos el día 2 de octubre de 1973, mientras viajaba a Temuco, luego de transcurrido unos 20 minutos de viaje, el vehículo se detuvo y los pasajeros comentaron que a la vera del camino había un cadáver y que este pertenecía a Julio San Martín. Debido a la posición que llevaba, no pudo verlo. Aclara que San Martín era su vecino y estaba emparentada con él.

A.37 ORLANDO SALAZAR ASTUDILLO. (46 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 792 a fs. 793, de fs. 798 a fs. 799, de fs. 828 a fs. 830 (tomo III).

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, a fs. 792 a fs. 793 (Tomo III) Colige que ocurrido el pronunciamiento militar, fue detenido por carabineros de Curacautín y cuando se encontraba en la Comisaría, vio que también estaba detenido Julio San Martín.

En declaración judicial de fecha 14 de junio de 1979, a fs. 798 a fs. 799 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante la PDI, y dice que efectivamente fue detenido por carabineros de Curacautín después del pronunciamiento militar, por tener gran cantidad de radios en su negocio. Cuenta que a la comisaría llegó a las 10 horas y lo dejaron en libertad el mismo día como a las 22:30 horas. Recuerda que al llegar a la comisaría, vio que funcionarios llevaban detenido a Julio San Martín en una camioneta del banco Estado, a quien pusieron en un calabozo y no lo volvió a ver más.

En declaración judicial de fecha 2 de mayo de 1991, a fs. 828 a fs. 830 (Tomo III) Basa que efectivamente en el año 1973, fue detenido por carabineros de Curacautín como a las 10 de la mañana ya que supuestamente estaba ocultando mercadería al público, lo que en ese tiempo se llamaba "restricción de venta". Ese día de su detención, estaba en la comisaría cuando en la mañana vio llegar a un grupo de carabineros y traían detenido a Julio San Martín, persona a la cual él conocía bien. Cuenta que entre los comentarios que hizo Carabineros, escuchó que a San Martín lo habían detenido en el bus que iba a Temuco por Lautaro. El deponente fue dejado en libertad en la tarde o noche del

mismo día, mientras que Julio siguió detenido en la unidad. En cuanto al personal que estaba, dice que solo había Carabineros, no militares, pero no recuerda nombres de los que llevaban a San Martín detenido. Dice que tiene gravada esa situación ya que a este le hicieron sacarse los cordones en la guardia y luego lo metieron al primer calabozo que había saliendo de un pasillo hacia el interior de la comisaría. Asevera el deponente que él pudo ver todo ya que estaba detenido al interior de la comisaría y no en un calabozo. Ante lo que el tribunal le pregunta, responde que ese día que estuvo detenido, estaban en la comisaría el Mayor Gustavo Zúñiga, el Teniente Sanhueza, el primero Pillancares, el Sargento Salazar. En el momento en que llegó detenido San Martín, vio que en el grupo que se formó con los que llegaban estaba el cabo de apellido Ortiz y otra gente civil conocida, pero que por el tiempo transcurrido no recuerda nombres. También le es imposible precisar el personal que llegó con San Martín detenido ese día. Continúa relatando que al día siguiente de su detención, llegó a su domicilio el hermano de Julio, Luis San Martín, quien desesperadamente le pidió que lo acompañara a buscar a su hermano, el que estaba tirado muerto a orillas del camino en las inmediaciones del asentamiento Santa Julia, camino a Lautaro a lo que él se negó por miedo a verse envuelto en mayores problemas de los que tuvo anteriormente, y le aconsejó a Luis no ir a ese lugar, quien finalmente desistió de ir. Después se supo que el cadáver había desaparecido. También se comentó que adeptos a su filiación política, habrían recogido su cadáver y enterrado en el mismo lugar, algo que nunca fue confirmado ni desmentido.

A.38 ENRIQUE ALFONSO YAÑEZ ILLANES. (28 años de edad a la época de los hechos). Declara a fs. 825, de fs. 832 a fs. 833, de fs. 881 a fs. 883 (tomo III).

En declaración judicial de fecha 13 de marzo de 1991, a fs. 825 (Tomo III). Comunica haber sido muy amigo de Julio San Martín. Cuenta que en el año 1973, tenía una relación sentimental con su actual cónyuge, quien vivía en el asentamiento Santa Julia, por ende, él viajaba constantemente a visitarla y recuerda que unos días después del golpe militar, sin recordar la fecha exacta, pero más o menos a las 11 de la mañana, a unos doscientos metros del asentamiento, al costado Norte del camino, se encontraba el cuerpo sin vida de su amigo San Martín, el que estaba tapado con papel de diario. Por temor que inundaba en esa época, solo lo miró rápidamente y reconoció su reloj de pulsera en su mano izquierda. Al día siguiente nuevamente pasó por el lugar más o menos a la misma hora, de regreso a su domicilio pero ya no se encontraba el cuerpo en ese lugar. Ignora quién o quienes retiraron el cadáver y no recuerda mayores

detalles del lugar del hecho, además el cuerpo se encontraba tendido de espalda con la cabeza hacia el lado poniente y como estaba tapado no pudo ver su vestimenta. Por antecedentes que obtuvo después, incluso de algunos carabineros en retiro, señala que el autor del asesinato de San Martín fue el teniente Sanhueza, a quien conocía con el apodo del “guate perra” y que trabajaba en la comisaría de Curacautín. Asevera que este hecho lo saben varias personas en Curacautín y el asentamiento Santa Julia, pero por temor no quieren declarar. También supo que el Teniente Sanhueza, posiblemente a causa de ser el autor del hecho se trastornó y se quitó la vida, pegándose un tiro.

En declaración judicial, de fecha 3 de mayo de 1991, a fs. 832 a fs. 833 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante la PDI. Apunta que en esa época tenía una relación sentimental con su actual cónyuge, quien vivía en el asentamiento Santa Julia, por lo que viajaba constantemente a visitarla. En uno de esos viajes, divisó el cadáver de su amigo Julio San Martín, a orillas del camino, asegurando que era él aunque no le vio el rostro, pero lo reconoció por su vestimenta y su reloj de pulsera en su mano izquierda. Por la situación reinante en esa época y el temor que existía no dijo nada de lo que vio. De regreso a Curacautín, en el lugar donde yacía el cadáver, vio a unos militares haciendo guardia, cree que eran como 4 y sobre el cadáver había un letrero que decía “propiedad del ejército”. Explaya que anteriormente ya había expresado lo mismo que ahora, pero no había querido dar nombres, sin embargo ahora dice que en ese tiempo había dos funcionarios que acompañaban al teniente Sanhueza cuando detuvieron a San Martín y ellos iban en el jeep que alcanzó el bus en que iba San Martín. Uno se apellida Toloza y el otro funcionario era Salazar. Los nombres de estos funcionarios los sabe porque él estuvo haciendo sus propias averiguaciones. También atestigua que la gente en el asentamiento Santa Julia comentaba que el cadáver luego de ser entregado por Sanhueza al ejército, estuvo como tres o cuatro días allí antes de ser enterrado adentro del cerco y del camino, en el predio de René Pertuzé. Este entierro lo habría hecho don Alberto Sepúlveda.

En declaración judicial de fecha 28 de junio de 2018, a fs. 881 a fs. 883 (Tomo III) ratifica su declaración que rola a fs. 832 y sig. Señala que efectivamente conoció a Julio San Martín, él era zapatero y se ubicada en calle Manuel Rodríguez, cerca de la comisaría de Curacautín. Para la época, su actual cónyuge vivía en el asentamiento Santa Julia. El deponente recuerda haber visto el cadáver de San Martín en el suelo entre el camino y el cerco, tapado por cartones, no con diarios y solo lo reconoció por la punta de los zapatos. No se

quiso acercarse al cadáver por temor. Expresa que en ese momento iba a pie por el camino, ya que en esa época la movilización era muy mala, por lo cual ese trayecto a pie no solo lo hacía él, sino que toda la gente del asentamiento. Recuerda que cuando se devolvía por el mismo camino, él divisó a militares custodiando el cadáver. Dice estar seguro que eran militares y que el cuerpo aún se encontraba ahí, pero que estos militares no lo pararon ni le hicieron nada. Asevera que siempre se rumoreó que a San Martín le aplicaron la ley de fuga y que el responsable era el Teniente Sanhueza de Carabineros de Curacautín, junto a los carabineros Toloza y Salazar. También se comentó que el cuerpo había sido enterrado en el asentamiento, lo cual no le consta. Incluso anduvieron en el lugar con un detective, pero no pudieron ver nada. En cuanto a Alberto Sepúlveda y Pedro Muñoz, ambos están fallecidos. A continuación el deponente hace presente que en esa época había una persona de nombre Rolando Abarzúa, quien era empresario maderero y muy amigo del Teniente Adrián Sanhueza y supo por comentarios que esta persona era quien sindicaba a otros que eran contrarios al régimen y Adrián Sanhueza los mandaba a detener. Respecto a los relatos de Ramón Olivos Bascur, Santiago Medina Lobos y Galvarino Molina Gatica, en cuanto a la muerte de San Martín, declara que es primera vez que escucha eso. Él solo vio el cadáver y nada más. Finalmente indica que la distancia entre el puente Cautín y el lugar donde vio el cuerpo de Julio San Martín, era aproximadamente de 4 kilómetros. El cuerpo estaba como a 200 metros desde la salida del asentamiento Santa Julia hacia Curacautín. Lamentablemente todas las personas que pudieran haber aportado algo y que en ese momento vivían en el asentamiento, están fallecidas.

A.39 PEDRO JUAN MUÑOZ YAÑEZ. (59 años de edad a la época de los hechos). Declara a fs. 834 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 1991, de fs. 834 (Tomo III) declara que efectivamente fue campero en el fundo de René Pertuzé, llamado "San Manuel", lugar que actualmente es asentamiento en parte. Este campo fue objeto de una toma de la cual él fue parte y ahora es dueño de una parcela. Cuenta que cuando era campero, en una oportunidad se encontraba campeando animales dentro del fundo, por la orilla del camino público, frente al asentamiento Santa Julia y de pronto vio un hombre muerto, el cual estaba parado, afirmado en una estaca, como colgando de alambres, aunque no se acercó a él supo que estaba muerto pues al silbarle a los perros, se acercaron al cuerpo y este no se movió. Asevera que él no quiso meterse en nada y que como

el cuerpo estaba en el camino público no le importó. Además era algo delicado. Al día siguiente pasó por el mismo lugar y el cadáver ya no se encontraba ahí.

A.40 GERARDO TOLOZA ULLOA. (59 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 835 a fs. 836 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 22 de mayo de 1991, a fs. 835 a fs. 836 (Tomo III) colige que en el año 1973, él era cabo de carabineros en la 5° comisaría de Curacautín y en esa época no tuvo mucha participación y responsabilidad en detenciones, solo realizó traslados de detenidos a la cárcel de Victoria. Cuenta que una vez acompañó al Teniente Sanhueza, quien iba como jefe de grupo de aproximadamente 10 funcionarios, para ir al lugar de San Agustín, camino a Victoria, a la detención de unos ciudadanos que fueron llevados a Curacautín, entre ellos uno llamado Abelardo Mora. Luego estuvo en otro operativo similar en Manzanar a cargo del Mayor Gustavo Zúñiga. Aclara que nunca participó en la detención de Julio San Martín, ni tener conocimiento sobre su detención, aunque al día siguiente en que se supo de su detención, escuchó comentarios acerca de que estuvo en la comisaría, pero él no lo vio. Continúa su relato señalando que los funcionarios que acompañaban al teniente Sanhueza en detenciones eran el Carabinero Luis Ortiz, un funcionario de apellido del Valle y el carabinero Ramón Olivos Bascur, los que seguramente tengan algún antecedente respecto de los hechos investigados.

A.41 GUSTAVO FERNANDO ZÚÑIGA DUARTE. (45 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 837 a fs. 838 (tomo III)

Declaración judicial de 29 de noviembre de 1991, fs. 837 a fs. 838 (Tomo III). Apunta que para 1973, era mayor Comisario de carabineros en Curacautín y después del 11 de septiembre se le asignó el cargo de gobernador, independiente del cargo de Comisario. Cuenta que en ese año se procedía a la detención de personas, por órdenes de superiores. Estas detenciones se efectuaban contra de personas que se consideraban agitadoras, las cuales solo duraban unos días, lapso en que se averiguaban sus antecedentes para luego ser liberadas. Consultado sobre el caso en concreto, señala que Julio San Martín efectivamente estuvo detenido en la Comisaría a su cargo, persona que recuerda por la fotografía que se le exhibe el cual era dirigente comunista. Este estuvo detenido una vez y luego fue liberado, ya que las detenciones eran de carácter preventivo para evitar la agitación de masas. Con respecto a la desaparición de San Martín, colige que nada le consta ya que su labor era propiamente de gobernador y no participaba ni salía a patrullajes, solo en una oportunidad fue al sector de Manzanar con personal a su cargo porque se había escuchado

comentario de la existencia de una escuela de guerrillas. En cuanto a las detenciones, esas se practicaban por el teniente Sanhueza con su personal rotativo. Hace presente que ese Teniente nunca le rindió cuenta sobre las detenciones, es decir, la cuenta se rendía en sí, pero en ella nunca se le informó sobre la detención de Julio San Martín. Por último deja constancia que en esa época iban a Curacautín personal militar y de aviación y procedían a detener a ciudadanos en la vía pública, sin darle cuenta a él de nada.

A.42 SANTIAGO GUILLERMO MEDINA LOBOS. (21 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 856 a fs. 857, de fs. 869 a fs. 871 (tomo III)

En declaración policial de fecha 10 de abril de 2018, a fs. 856 a fs. 857 (Tomo III) Expresa que ingresó a carabineros en 1965, siendo destinado a la 5° comisaría de Curacautín. Para 1973 era parte de la unidad en Curacautín, la que se encontraba a cargo del mayor Gustavo Zúñiga, secundado por el teniente Sanhueza, además de los funcionarios Pian, Bascur, Pirce, Torres, Ortiz, Olivos, Saavedra Vergara, entre otros. Consultado acerca de la víctima Julio San Martín, aclara no tener ningún conocimiento respecto a su detención, solo recuerda que por rumores se enteró que su cadáver permanecía tirado a un costado del camino hacia Lautaro, frente al asentamiento Santa Julia, ignorando quién tomo el procedimiento con el cuerpo. Por último, indica que el funcionario a cargo de los detenidos políticos era el teniente Sanhueza, quien mantenía a estos detenidos en el patio y posteriormente eran entregados a los militares.

En declaración judicial de fecha 13 de junio de 2018, a fs. 869 a fs. 871 (Tomo III) ratifica su declaración que rola a fs. 856 a fs. 857. Respecto al rumor acerca de que el cadáver de San Martín se encontraba a un costado del camino hacia Lautaro, fue algo que escuchó en la comisaría de Curacautín, ya que era un comentario generalizado ahí. El deponente indica que lo que debió ocurrir es que se le diera cuenta al juez para que este diera la orden de levantar el cuerpo, para posteriormente haber sido enviado al Servicio Médico Legal. No sabe si las jefaturas de la unidad adoptaron este procedimiento y tampoco tuvo conocimiento que la familia de San Martín haya realizado gestiones en la unidad para levantar su cadáver. Continúa su declaración indicando que quienes estaban a cargo de los detenidos en la unidad eran carabineros pertenecientes al SICAR, liderados por Teniente y el Mayor de la unidad. Recuerda al Sargento Hugo Riquelme y Luis Celis como parte de este grupo. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de Armando Etter, a fs. 492 y sig., a lo cual indica que supo que San Martín estuvo detenido en la Comisaría de Curacautín y cree que fue por su militancia, pero nunca tuvo conocimiento de los apremios sufridos por San Martín

como lo relata Etter. Recuerda a Peñailillo y Romero como conductores de la unidad. Dice saber que a los detenidos los mantenían en la unidad y que luego llegaba personal de Ejército o de la aviación y se los llevaban. De las personas mencionadas por Etter en su declaración, solo recuerda que Riquelme participaba en el SICAR. Por otro lado, declara que el personal que detuvo a San Martín fue utilizado por el teniente, seguramente por orden del Mayor. Supo que este personal sacó a Julio del cuartel en la noche y lo condujeron hacia el lugar donde apareció muerto. Quienes participaron de esta ejecución fueron Pirce, Luis Ortiz y Torres Osses. Recuerda que ellos comentaron que se lo llevaron a un puente, y lo lanzaron al río o él se lanzó, y en ese momento le dispararon. De ahí lo habían dado por muerto, pero después apareció en el camino y la gente que viajaba en los buses lo vio. Todo lo relatado anteriormente lo sabe ya que el mismo grupo lo comentó en la unidad y fue de conocimiento de todos. Dice desconocer lo que pasó con el cuerpo posteriormente y no recuerda que Del Valle haya participado en ese hecho, pero insiste en que está seguro que Pirce, Luis Ortiz y Torres Osses fueron quienes participaron de la detención y ejecución de Julio San Martín. Aclara que este fue el único hecho de esta naturaleza del cual se enteró y que todos deberían conocer lo que pasó con Julio San Martín. Finalmente indica que no tendría problemas en ratificar esto frente a los carabineros que mencionó, pero tiene temor de que su familia se vea perjudicada o amenazada.

A.43 RAMÓN HUGO OLIVOS BASCUR. (29 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 860 a fs. 861, de fs. 906 a fs. 910 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 4 de mayo de 2018, de fs. 860 a fs. 861 (Tomo III) atestigua que ingresó a carabineros en 1969, siendo destinado a la 5° comisaría de Curacautín, donde permaneció hasta 1975. Esta comisaría se encontraba a cargo del Mayor Zúñiga, siendo secundado por el Teniente Adrián Sanhueza, además de los funcionarios Saavedra, Ortíz, Sargento Primero Pirce, Carlos Lacoste y otros que no recuerda. Luego del año 1973, su labor principal era la de realizar servicios en la población, guardias y vigilancia a detenidos políticos que se encontraban al interior de la unidad. Respecto a esto último, indica que al interior del cuartel siempre permanecían como 16 detenidos políticos entre los cuales recuerda a una persona de INDAP de apellido Fritz. A estos detenidos los interrogaban Sanhueza y el mayor Zúñiga y participaban los Carabineros que se encontraban en el cuartel además de personal militar que estaba apostado ahí. En cuanto a los interrogatorios, nunca participó de ellos, ya que su presencia era mal vista en la unidad, ya que en el gobierno de Allende, fue guardaespaldas de Fidel Castro en su visita a Chile lo cual lo dejó marcado. Sobre un presunto grupo

especial, aclara que no había tal grupo, solo que los más cercanos a Sanhueza eran Pirce, Torres, hermanos Padilla y Ortiz, los que frecuentemente lo acompañaban en las detenciones. Consultado sobre Julio San Martín, señala que lo conoció y le tenía un gran afecto, ya que él le reparaba el calzado institucional. A este lo vio detenido en la unidad por unos días y se acercó a darle un trozo de pan. En los días posteriores ya no lo volvió a ver y por comentarios en la guardia, escuchó que lo habían fusilado en el puente Cautín, no especificaban quién lo había hecho, pero sí era alguien de la unidad. Posterior a eso, apareció el cadáver de San Martín en el camino frente al asentamiento Santa Julia. De igual forma, por rumores se escuchó que Carabineros se trasladó a ese lugar haciendo desaparecer el cuerpo, quedando como historia que había sido introducido al interior del ojo de un río y tapado con piedras. Sobre quiénes son los responsables de la muerte de San Martín, no tiene certeza pero presume que fue Sanhueza y su personal más cercano.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2018, a fs. 906 a fs. 910 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 861 y sig. Señala que fue amenazado de muerte por defender a San Martín, cuando este estuvo detenido. Dice que no había motivos para detener a Julio, ya que era una persona tranquila. Cuenta que a San Martín lo tuvieron detenido en un calabozo junto a otros detenidos. En seguida se refiere a las declaraciones de Armando Etter, que rolan de fs. 492 y sig., indicando que desconoce si a San Martín lo quemaron con cigarrillos, pero sí es cierto que los tenían en los calabozos, sin poder moverse, ni sentarse y tampoco le daban comida. No recuerda que su familia lo haya visitado en la Comisaría, pero recuerda que la víctima comentaba que tenía a su madre enferma ese día. Recuerda que había un subteniente de Ejército de apellido Valenzuela quien le señaló que el teniente Adrián Sanhueza lo quería fusilar, por lo que increpó a este y le preguntó el por qué, a lo cual no supo darle respuesta. El deponente profundiza acerca de la situación de los detenidos en la unidad, detalla que estos eran llevados a las caballerizas y torturados individualmente. Tenían un teléfono con magneto que producía energía y se lo colocaban en el pene, lo cual se lo comentó Roberto Padilla, que era uno de los funcionarios de la unidad. Además, el teniente y el mayor comentaban lo que sucedía y se jactaban de ello. A la pregunta del tribunal, responde que Pirce, Torres, Ortiz, Toloza y el más viejo de los Padilla en edad eran los más cercanos a Sanhueza. Aclara que el Torres a que se refiere **es Torres Osses**. Luego comenta algunos casos de los que tiene conocimiento. El tribunal le lee, en lo pertinente la declaración de fs. 869 y sig., a lo cual responde que desconoce si los carabineros

Riquelme y Celis pertenecían al SICAR. También señala que es efectivo lo que señala Medina en cuanto a Julio San Martín, que funcionarios de la unidad lo habrían llevado a un puente y lo ejecutaron. Dice que fueron funcionarios de Carabineros de Curacautín, no de otra unidad. Dice que esto era un comentario en la unidad, una especie de estrella que se anotaba el Teniente por haber hecho eso. Indica no recordar a quiénes se atribuía lo realizado con Julio San Martín, que no le constan los nombres señalados. Solo sabe que Julio San Martín estuvo detenido en la unidad, un día llegó y este ya no estaba y Roberto Padilla le contó que lo habían matado. Respecto a las torturas que se les aplicaba a los detenidos, informa que el Teniente las realizaba con un grupo de 5 o 6 personas. Menciona a Pirce, el cabo Toloza, Ortiz como los funcionarios de confianza del Teniente y que ellos pudieron haber participado en esas cosas. Hace presente que en esa época había mucho consumo de alcohol en la unidad, Roberto Padilla le contaba que después que los Carabineros tomaban alcohol, iban a hacer sus fechorías. Añade que Fritz le contó que lo llevaron para fusilar y no le apuntaron. Respecto a Ortiz, menciona que siempre se desempeñó en la unidad, activamente, vestido con uniforme. No recuerda que este se haya vestido de civil después del 11 de septiembre de 1973. Menciona a Viñuela, Vidal, Coulon como personas de dinero que denunciaban a sus trabajadores y entregaban regalos a Carabineros, así como también lo hacía Rolando Abarzúa, quien era amigo del Teniente Sanhueza. Refiriéndose a los dichos de fs. 53 y sig., de Galvarino Molina, indica que coincide en general con lo que el deponente relató en cuanto que Carabineros de Curacautín ejecutó a San Martín. Sobre los nombres que Molina menciona, esto es, Ortiz y del Valle, dice que ellos eran muy “yuntas”, aunque no le consta al deponente que hayan tenido participación en el hecho, pero Ortiz era muy cercano al teniente Sanhueza, incluso pertenecían a un club de huasos. Cree que el grupo más cercano al Teniente eran quienes podrían saber lo que sucedió con Julio San Martín. Por último hace presente que ese tiempo había dos funcionarios que conducían micros hacia Curacautín - Lautaro. Uno de ellos era Fernández y el otro Pinoleo, quien era rubio y vivía en Temuco. La empresa de buses tiene entendido que era Igi Llaima.

A.44 NELSON MIGUEL AEDO LARA. (24 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 940 a fs. 941 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 2 de octubre de 2018, a fs. 940 a fs. 941 (Tomo III) Indica que él era cuñado de San Martín, el que estaba casado con su hermana mayor, Inés Aedo Lara. Recuerda que para septiembre de 1973, cuando Julio fue detenido, estaba trabajando en Temuco por lo que no alcanzó a

verlo. Dice que la víctima tenía a su mamá enferma en Curacautín y por eso se fue a ese lugar y tiene entendido que fue detenido por Carabineros y no otra rama de las fuerzas armadas. Añade que la única persona de su familia que vivía en Curacautín en esa época era su hermana Juana. Relata que lo último que supieron es que después de la detención, Julio fue visto fallecido en un fundo del sector de nombre "tres esquinas" o cerca de Santa Julia, por pasajeros de un bus que recorría ese sector. Expresa que su cuñado era quien tenía la representación del Diario "El Siglo" en Curacautín, por eso se asocia como vendedor de diario. Luego de eso fue nombrado en un cargo en Capitán Pastene. También declara que su hermana Inés tenía dos hijas que eran anteriores al matrimonio con Julio, una de ellas era Ana María Ríos Aedo y la otra Mireya Cárdenas Aedo. Recuerda que Ana María vivía con su abuela paterna y su padre, en Curacautín y Mireya vivía con sus abuelos maternos. Anexa que su hermana Inés realizó diversas gestiones para averiguar sobre Julio, aunque en ese tiempo todos tenían temor y a él lo acusaron de activista político en la planta lechera Copalca, por lo que fue detenido por personal del Regimiento Tucapel de Temuco. Narra lo vivido en su detención, diciendo que no son gratos los recuerdos que tiene.

A.45 LUCY ELENA AEDO LARA. (21 años de edad a la época de los hechos). Declara a fs. 942 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 2 de octubre de 2018, a fs. 942 (Tomo III) parte indicando que era cuñada de Julio San Martín, quien estaba casado con su hermana Inés Aedo Lara. Para septiembre de 1973 ella vivía en Temuco con su madre, estaba casada, tenía hijos y jamás vivió en Curacautín, no se crió con sus hermanos pero tenía una buena y continua relación con ellos. La deponente se enteró a través de su padre que Julio San Martín había fallecido y con los años se supo que había sido por hechos asociados al golpe militar, se decía que Julio había sido muerto por uniformados, pero no maneja información sobre qué rama de las fuerzas armadas era. No tiene más datos que aportar.

A.46 SANDRA ISABEL AEDO LARA. (8 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 950 a fs. 951 (tomo III)

En declaración de fecha 3 de octubre de 2018, a fs. 950 a fs. 951 (Tomo III) parte informando que era cuñada de Julio San Martín, quien estaba casado con su hermana Inés Aedo Lara. Para septiembre de 1973 ella vivía en Padre las casas con sus padres, hermano, hijos y cuñada. Relata que se enteró que carabineros de Curacautín detuvieron a Julio San Martín, entre Curacautín y Lautaro, el día 29 de septiembre de 1973. Dice que Julio había estado detenido en Capitán Pastene o Traiguén, pero por enfermedad de su madre le dieron

salvoconducto para poder ir a Curacautín y fue en ese viaje que se practicó la detención. Ante la pregunta del tribunal, responde que siempre se comentó que Julio había sido detenido por funcionarios de Carabineros de Curacautín, no de otra rama de las fuerzas armadas. También recuerda que su hermana Inés se enteró de su detención a través de Gladys San Martín, tras lo cual decidió ir a buscarlo. Consultó en Curacautín y Lautaro, pero no le daban explicaciones. Incluso recuerda que su hermana comentó que fue amenazada para que no siguiera con las averiguaciones o de lo contrario le pasaría lo mismo. Por último, comenta que a su hermana Inés, le habían comentado personas que viajaban en un bus, que habían divisado el cadáver de San Martín a mitad de camino entre Curacautín y Lautaro, pero nunca pudo encontrar el cuerpo.

A.47 EDUARDO ESTEFANO VERDUGO SAN MARTÍN (14 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 1001 a fs. 1002 (tomo III), de fs. 1238 (tomo IV)

En declaración policial de fecha 28 de marzo de 2019, a fs. 1001 a fs. 1002 (Tomo IV) Afirma que para septiembre de 1973, su tío Julio San Martín vivía en Curacautín, donde él también vivía junto a su familia. Dice que un día su padre lo envió como a las 7:30 de la mañana hasta la casa de su tío, con el objeto de entregarle una caja con mercadería. Para esa oportunidad, recuerda que su tío lo atendió y se disponía a viajar a Temuco, lugar donde estaba la esposa. De igual forma indica que San Martín estaba vestido con un chaleco, pantalón de tela, además de un paletó o blazer y una manta de castilla y este le indicó que estaba contento y más tranquilo, ya que había sido detenido hace como un mes en Traiguén. Añade que a su tío le habían otorgado un salvoconducto para que se dirigiera a Temuco, pero antes decidió pasar a Curacautín a visitar a su madre, para luego abordar un bus de la empresa "Igi Llaima", sin embargo se comenta que él fue detenido y bajado de ese bus y que la familia tomó conocimiento de eso unos 10 días más tarde, lo cual es versión de los mismos funcionarios de la empresa de buses. Por último, también se comentaba que el carabinero Ortiz dio aviso de alguna forma a carabineros con el objetivo de interceptar ese bus donde viajaba. Recuerda que los comentarios apuntaban a que su tío había sido dejado a orillas de la ruta en el sector de Santa Julia. Además se comenta que Carabineros de Curacautín se habría percatado supuestamente de la presencia de San Martín en esa localidad y que un Carabinero de apellido Ortiz habría avisado de alguna forma a los Carabineros de Lautaro con la finalidad de interceptar este medio de transporte.

En declaración judicial de fecha 26 de agosto de 2019, a fs. 1238 (Tomo IV) señala que Julio San Martín era su tío por línea materna y que vivía en capitán Pastene. En 1973 estuvo detenido en Traiguén por asuntos políticos por un mes. El deponente indica que por orden de su padre, le fue a dejar una caja con mercadería. Posteriormente San Martín tomó un bus con destino a Temuco, pero en el trayecto fue bajado por carabineros de Curacautín. De los funcionarios que lo tomaron detenido, recuerda que se comentaba que era el carabinero Ortiz, Torres, Romero y Fernández. Un par de días después de su detención, Gladys San Martín se enteró de su desaparición por conversaciones. A ella le informaron que Julio San Martín yacía muerto en camino que une Curacautín con Lautaro.

A.48 LUIS SEGUNDO ORTIZ NOVOA. (27 años de edad a la época de los hechos) a fs. 245 a fs. 246 (copia de la cual se encuentra a fojas 339 a 340), de fs. 301 a fs. 303, de fs. 345 a fs. 347 (tomo I), de fs. 359, de fs. 550 a fs. 551 (tomo II), de fs. 851 (tomo III)

En declaración judicial de fecha 23 de enero de 2014, a fs. 245 a fs. 246 (Tomo I) Asevera que ingresó a carabineros en 1965 siendo su primera destinación en la 14° comisaría de Providencia. Para el año 1973, ostentaba el grado de carabinero en la 5° comisaría de Curacautín, la que se encontraba a cargo del mayor Zúñiga Duarte. En cuanto a los hechos investigados, señala que efectivamente conoció a Julio San Martín, dado que ambos bailaban cueca, también sabe que en su momento fue subdelegado de Traiguén o Lumaco. Respecto a su posible participación en la detención y posterior desaparición de Julio San Martín, recalca enfáticamente no tener responsabilidad en ello. Añade que existía un pequeño grupo de funcionarios destinado a practicar detenciones por temas políticos, la que estaba a cargo del teniente Sanhueza. Este grupo lo conformaban entre otros por Pirce, Mardones, Bascur, Salgado y Etter. Por último reitera que se enteró por la guardia de la comisaría que San Martín se encontraba detenido, sin verlo físicamente, y que Sanhueza con su grupo practicaron la detención.

En declaración judicial de fecha 17 de junio de 2014, a fs. 303 a fs. 305 (Tomo I) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 245 a fs. 246. Agrega que fue reintegrado a sus funciones de carabinero el 2 de octubre de 1973. Desde su reintegración estuvo cumpliendo funciones de aseo en la unidad, sin realizar patrullajes ni practicar detenciones de personas en la época que estaba pendiente su vuelta oficial a la unidad. Consultado acerca del grupo operativo que practicaba la detención de personas por temas políticos, recuerda a algunos funcionarios de apellidos Torres, Etter y Peñailillo, los que estaban a

cargo del teniente Sanhueza. Este grupo se movilizaba en un jeep y una camioneta requisada al banco estado. Estos vehículos eran conducidos por Etter y otro funcionario del que no recuerda su nombre. Prosigue con su relato indicando que San Martín, lo vio detenido mientras hacía aseo.

En declaración policial de fecha 17 de octubre de 2014, a fs. 339 a fs. 340 (Tomo I) Decanta que ingresó a carabineros en 1965 siendo su primera destinación en la 14° comisaría de Providencia. Para el año 1973, ostentaba el grado de carabinero en la 5° comisaría de Curacautín, la que se encontraba a cargo del mayor Zúñiga Duarte. En cuanto a los hechos investigados, señala que efectivamente conoció a Julio San Martín, dado que ambos bailaban cueca, también sabe que en su momento fue subdelegado de Traiguén o Lumaco. Respecto a su posible participación en la detención y posterior desaparición de Julio San Martín, recalca enfáticamente no tener responsabilidad en ello. Añade que existía un pequeño grupo de funcionarios destinado a practicar detenciones por temas políticos, la que estaba a cargo del teniente Sanhueza. Este grupo lo conformaban entre otros por Pirce, Mardones, Bascur, Salgado y Etter. Por último reitera que se enteró por la guardia de la comisaría que San Martín se encontraba detenido, sin verlo físicamente, y que Sanhueza con su grupo practicaron la detención.

En declaración judicial de fecha 15 de diciembre de 2014, a fs. 345 a fs. 347 (Tomo I) consultado, responde que el motivo de su declaración ocurrió el 7 de septiembre de 1973, ya que en días anteriores había fallecido el padre del deponente, por lo que solicitó al presidente de los transportistas de Curacautín una camioneta para trasladarse, de lo que se enteró el gobernador de Curacautín, quien efectuó un reclamo. Prosigue con su relato señalando que en la comisaría había dos vehículos, un jeep de marca Willis, y una camioneta requisada al banco estado. Esos vehículos eran conducidos por Etter y Peñailillo. Respecto del caso de Julio San Martín, recuerda que se enteró de su situación, cuando llegó a la comisaría, un grupo de funcionarios le comentaron al deponente que tomaron detenido a San Martín. Estos funcionarios eran Pirce, Bascur y Etter.

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2015, a fs. 359 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rolan a fs. 339 a fs. 340, fs. 301 a fs. 303 y fs. 345 a fs. 347. Indica que los funcionarios que le comentaron que San Martín estaba detenido en los calabozos eran Pirce, Bascur y Etter, quienes pertenecían al grupo que practicaba detenciones por carácter político.

Diligencia de Careo entre Armando Hernán Etter González y Luis Segundo Ortiz Novoa, de fecha 14 de diciembre de 2016, a fs. 550 a fs. 551

(Tomo II). Ortiz señala no reconocer a la persona con quien se le carea, el tribunal le señala que se trata de Armando Etter. Ratifica su declaración que rola a fs. 301 y sig. Etter por su parte reconoce a Ortiz, señala que trabajaron juntos en la 5° comisaria de Curacautín. Ratifica sus dichos que rolan a fs. 492 y sig., pero rectifica su declaración en la parte donde afirma quienes eran las personas que estaban con el teniente Sanhueza las que quemaban con cigarrillos a San Martín, no asegura que se tratara de ellos. Ortiz replica asegurando saber que San Martín estaba detenido, porque se comentaba en la unidad. Etter por su lado, recuerda que debió acompañar a un oficial de apellido del Río a buscar armamento. También deja en claro que él era guarda almacén y encargado de armamento y que no participó en todas las detenciones. En lo demás, tanto Etter como Ortiz se mantienen en sus dichos, incluso siendo amonestados por el Tribunal para que concuerden en sus dichos.

Diligencia de careo entre Luis Segundo Ortiz Novoa y Miguel del Valle Zúñiga, de fecha 16 de mayo de 2018, a fs. 851 (Tomo III). Ortiz no reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le informa que se trata de del Valle Zúñiga. Ratifica en lo pertinente, la declaración de fs. 846 y sig. Por su parte, del Valle reconoce a quien se le carea, agrega que el señor Ortiz era Carabinero en Curacautín. Consultado Ortiz, señala que no sabía manejar en ese tiempo, nunca condujo un vehículo en Curacautín. El tribunal le informa que no aparece su desvinculación de Carabineros, a lo que contesta que Zúñiga se lo comunicó de manera verbal, que probablemente nunca llegó a oídos de los superiores. Del Valle indica que no podía estar tan equivocado, que Romero era el conductor oficial, y que Ortiz manejaba de manera esporádica. Finaliza el careo con ambos manteniéndose en sus dichos, incluso habiendo sido amonestados por el Tribunal para que concuerden ante sus contradicciones.

A.49 LUIS ALBERTO COLOMA FERNANDEZ. (25 años de edad a la época de los hechos). Declara de fs. 1145 a fs. 1145 vta. (tomo IV)

En declaración de fecha 2 de mayo de 2019, a fs. 1145 (Tomo IV) comenta que para 1973, el deponente era carabinero en la 1° comisaría de Ancud. A fines de ese año, fue destinado a Temuco. Entre ese lapso, también fue destinado a un paso fronterizo ubicado en Curacautín. En la cual dependía de la 1° comisaría de Lautaro. En cuanto a la víctima Julio San Martín, señala que es primera vez que escucha su nombre, e ignora todo antecedente relacionado con su detención, dado que a la fecha de los hechos, él se encontraba en la 1° comisaría de Ancud.

B. DOCUMENTOS (30)

B.1. A fojas 12 a 14 (Tomo I) Informe del Arzobispado de Santiago Fundación Documentación y archivo de la Vicaría de la solidaridad, con antecedentes que poseen de la víctima Julio San Martín, que en síntesis indica “que Julio San Martín, casado, militante del Partido Comunista y Subdelegado de Gobierno en la localidad de Capitán Pastene, fue detenido el día 29 de septiembre de 1973, por efectivos de Carabineros de Cautín, a la entrada de la ciudad de Lautaro...” “Aún cuando no se tienen los antecedentes a la vista, se tiene información que en el Juzgado de Letras de Traiguén se instruyó la causa rol 8947 por presunta desgracia de Julio San Martín, por orden de la Corte de Apelaciones de Temuco. De igual modo, en el Juzgado de Letras de Curacautín, se inició el 13 de marzo de 1979, otra denuncia por presunta desgracia en la persona del afectado, rol 11.558, luego que el Primer Juzgado de Letras de Temuco se declaró incompetente ante la presentación hecha por la cónyuge de Julio San Martín, señora Inés Aedo Lara, en orden a solicitar se investigara el paradero de su esposo. Hasta la fecha de este informe, ninguna autoridad ha respondido sobre la suerte corrida por Julio San Martín, quien continúa en calidad de detenido y desaparecido”

B.2. A fojas 15 (Tomo I) Informe del Director Regional Tesorero de la Araucanía, informando que revisado sus sistemas computacionales, Julio San Martín San Martín no se encuentra registrado como contribuyente, no teniendo movimiento alguno a la fecha.

B.3. A fojas 16 (Tomo I) Oficio de la Compañía de transportes Igi Llaima, comunicando que su compañía nunca ha estado vinculada al recorrido Curacautín-Temuco-Curacautín y que la constitución de la sociedad es a partir del año 1987, por lo cual entienden que la causa está referida a otra empresa.

B.4. A fojas 18 (Tomo I) Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, el que remite los siguientes antecedentes:

a) **A fs. 19 (Tomo I)** Extracto de filiación y antecedentes de Julio San Martín San Martín

b) **A fs. 20 (Tomo I)** certificado de nacimiento de Julio San Martín San Martín.

c) **A fs. 21 (Tomo I)** fotocopia partida de nacimiento de Julio San Martín San Martín.

B.5. A Fojas 22 (Tomo I) Oficio del departamento control de fronteras, informando que revisados los archivos del Dpto. de control fronteras dependiente

de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, desde el 01 de septiembre de 1973 a la fecha, Julio San Martín San Martín no registra movimientos migratorios.

B.6. A Fojas 24 (Tomo I) Oficio de la Directora regional del Servicio Médico Legal de la Araucanía, informando que revisado sus archivos, no se encuentra registro de Julio San Martín San Martín.

B.7. A Fojas 25 (Tomo I) Oficio de la Municipalidad de Curacautín, informando que revisados los libros de sepultación desde septiembre de 1973 a la fecha, no se registra la sepultación en el Cementerio Municipal de Julio San Martín San Martín.

B.8. A Fojas 26 (Tomo I) Oficio del Servicio de Impuestos Internos informando que el contribuyente Julio San Martín San Martín no registra antecedentes en esa institución.

B.9. A Fojas 28 (Tomo I) Oficio del Museo de la Memoria y los derechos humanos el que remite antecedentes de la víctima, Julio San Martín San Martín, los que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 29 (Tomo I) Fotocopia de certificado de nacimiento de Julio San Martín San Martín

b) A fs. 30 (Tomo I) Fotocopia de partida de nacimiento de Julio San Martín San Martín

c) A fs. 31 (Tomo i) Fotocopia certificado de matrimonio de Julio San Martín e Inés Aedo Lara

d) A fs. 32 (Tomo I) Fotografía

e) A fs. 33 y 34 (Tomo I) Fotocopia servicio de seguro social de Julio San Martín San Martín.

d) A fs. 35 (Tomo I) Fotocopia certificado de situación militar al día de Julio San Martín San Martín.

e) A fs. 36 a 37 (Tomo I) Copia de solicitud nombramiento de curador ausente.

f) A fs. 38 a 42 (Tomo I) Copia de denuncia por presunta desgracia de Julio San Martín.

g) A fs. 42 a 46 (Tomo I) Antecedentes del Arzobispado de Santiago. Vicaría de la solidaridad

h) A fs. 47 a 50 (Tomo I) Declaraciones juradas de Inés Aedo Lara ya resumidas en el considerando 2.

i) A fs. 51 (Tomo I) Declaración de Inés Aedo Lara ante la Comisión de Verdad y Reconciliación ya resumida en el considerando 2

j) A fs. 53 a 54 (Tomo I) Declaración de Galvarino Molina Gatica ante la Comisión de Verdad y Reconciliación, resumida en el considerando 2°.

k) A fs. 55 (Tomo I) Declaración ante la CNRR de Graciela Jofré Castro

l) A fs. 56 (Tomo I) Declaración ante la CNRR de Hernán Sías, resumida en el considerando 2°.

m) A fs. 57 (Tomo I) certificado de visita al Juzgado de Curacautín

n) A fs. 58 (Tomo I) Declaración ante la CNRR de Berta del Carmen Contreras y Bartolomé Gutiérrez Gutiérrez, resumida en el considerando 2.

o) A fs. 59 (Tomo) Declaración ante la CNRR de Miguel Parra Rivas, resumida en el considerando 2.

p) A fs. 60 (Tomo I) Declaración ante la CNRR de Inés Aedo Lara, resumida en el considerando 2.

q) A fs. 61 a 65 (Tomo I) Oficio a Directora del Servicio de Registro Civil e identificación, solicitándole el envío de copia de los certificados de nacimiento, antecedentes, defunción y acta de defunción de distintas personas, entre las cuales se encuentra Julio San Martín San Martín.

q) A fs. 66 a 71 (Tomo I) Oficio de la Directora del Servicio de Registro Civil e identificación, indicando que no es posible remitir certificado de defunción de algunas personas, entre las cuales se encuentra Julio San Martín, pues no se encuentra ingresada su defunción en la base de datos.

r) A fs. 72 a 74 (Tomo I) Oficio a Policía Internacional

s) A fs. 75 a 76 (Tomo I) Oficio de Jefatura Nacional de Extranjería y Policía internacional.

t) A fs. 77 a 81 (Tomo I) Oficio a General Director de Carabineros

u) A fs. 82 a 83 (Tomo I) Oficio de Consejo asesor superior, de Carabinero de Chile

v) A fs. 84 (Tomo I) Oficio a director del cementerio de Curacautín.

B.10. A Fojas 86 (Tomo I) Oficio del Director regional del Servicio Electoral el que no informa datos de Julio San Martín San Martín

B11. A fojas 98 a 100 (Tomo I) Oficio del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros remitiendo antecedentes respecto de la dotación de Carabineros que en distintos periodos se desempeñaron en diferentes unidades policiales de Temuco, entre las que se encuentra relación del personal de la 5° Comisaría de Curacautín y destacamentos dependientes.

B.12. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 119 a 126 (Tomo I), Informe policial N° 4847/202 de fecha 21 de octubre del 2013, contiene declaración policial voluntaria de Miguel Luis del Valle Zúñiga y Juan de Dios Marileo Grandon.

b) A fs. 237 a 256 (Tomo I) Informe policial N° 761/202 de fecha 03 de febrero de 2014, contiene declaración policial voluntaria de Luis Segundo Ortíz Novoa, Arnulfo Rivas Mena, Roberto Leal Orellana, Américo Gabriel Águila Caro, Sergio Méndez Quilodrán, Aldo Bustamante Delgadillo,

c) A fs. 264 a 284 (Tomo I) Informe policial N° 2517/202 de fecha 29 de abril de 2014, que contiene declaración policial voluntaria de Antonio Inostroza Segura, María Sylvia Aedo Lara y Galvarino Molina Gatica; Fotocopia de declaración jurada de Inés Aedo Lara; Fotocopia de antecedentes y situación militar al día de Julio San Martín San Martín; Fotocopia de certificado de matrimonio de Julio San Martín e Inés Aedo Lara; Fotocopia de fotografía de la víctima de autos y Fotocopia de certificado de nacimiento de Julio San Martín.

d) A fs. 333 a 343 (Tomo I) Informe policial N° 6257/202 de fecha 24 de octubre de 2014, que contiene declaración policial voluntaria de Gladys de las Mercedes Escalona Leiva, Luis Segundo Ortiz Novoa y Hernán Sías Cares.

e) A fojas 481 a 485 (Tomo II) Informe policial N°1973/202 de fecha 11 de abril de 2016, que contiene declaración policial voluntaria de Armando Etter González.

f) A fojas 503 a 514 (Tomo II) Informe policial N° 4094/202 de fecha 27 de julio de 2016, que contiene declaración policial voluntaria de Arnulfo Rivas Mena, Roberto Leal Orellana y Pedro Romero Urrutia.

g) A fojas 560 a 578 (Tomo II) Informe policial N° 443/202 de fecha 20 de enero de 2017, que contiene declaración policial voluntaria de Benedicto Narváez Valenzuela, José Tomás Torres Osses, Marcelino Fernández Cabeza y Pedro Pablo Torres Matamala.

h) A fojas 609 a 660 (Tomo II) Informe policial N° 1891/202 de fecha 11 de abril de 2017, que contiene declaración policial voluntaria de Héctor Mardones Cárcamo, Mercenorio Torres Troncoso, Miguel Luis Del Valle Zúñiga, Juan de Dios Marileo Grandón, Luis Herrera Castillo, Jorge Labraña Álvarez, Miguel Merino Gajardo, Edmundo Salas Bascur, Eduardo Sepúlveda Penroz, René Soto Reyes, Bartolomé Gutiérrez Gutiérrez, Berta Del Carmen Contreras y Gustavo Weisse Abarzúa.

i) A fojas 728 a 729 (Tomo III) Informe policial N° 784/202 de fecha 07 de febrero de 2018, que contiene Identificación de personas.

j) A fojas 742 a 744 (Tomo III) Informe policial N° 204/222 de fecha 28 de febrero de 2018, el que ubica, individualiza y deja en espera de citación a testigos.

k) A fojas 958 a 973 (Tomo III) Informe policial N° 4028/202 de fecha 8 de octubre de 2018 con declaración policial voluntaria de Sergio Arturo Venegas aedo, Santiago Guillermo medina Lagos, Saúl Saavedra Vergara, Ramón Hugo Olivos Bascur y Sigisfredo Alfonso Cabrera Salazar.

l) A fojas 999 a (Tomo III) Informe policial N° 1437/202 de fecha 01 de abril de 2019, que contiene declaración policial voluntaria de Edgardo Verdugo San Martín.

m) A fojas 1143 a 1145 (Tomo IV) Informe policial N° 1148 de fecha 06 de mayo de 2019 que contiene declaración policial voluntaria de Luis Alberto Coloma Hernández.

n) A fojas 1148 a 1149 (Tomo IV) Informe policial N° 1939/202 de fecha 06 de mayo de 2019 Con resultado de informe de inspección por PDI en lugar de supuesta inhumación ilegal

B.13. A Fojas 142 a 198 (Tomo I) Documentos acompañados en querrela interpuesta por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, los que se desglosan de la siguiente manera.

a) A fs. 142 a 143 (Tomo I) Fotocopia simple de la página 384, del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en la que consta la calidad de víctima de violación de los derechos humanos de Julio San Martín San Martín.

b) A fs. 144 a 198 (Tomo I) Fotocopia simple del informe individual para resolución del consejo de la víctima Julio San Martín San Martín, elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que en sus conclusiones señala que “de los antecedentes existentes, es razonable concluir que Julio San Martín sufrió graves violaciones a sus Derechos Humanos. Que dicha violación probablemente esté vinculada a su militancia y los cargos directivos que detentó en un partido de izquierda. Que su desaparecimiento se debió a la actuación de agentes del Estado, específicamente miembros de los cuerpos armados. No existiendo un informe oficial, que explique con verosimilitud circunstanciada el paradero, destino y suerte del detenido, y siendo los agentes aprehensores las últimas personas que le vieron con vida, existe convicción moral que esta persona fue víctima de la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas y que los actos en referencia comprometen la responsabilidad del Estado.”

c) Escrito de solicitud de nombramiento de curador de ausente, a fs. 171 a fs. 172 (Tomo I). Expone en ese escrito que ella es cónyuge de Julio San Martín. Que para el día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por efectivos de Traiguén, luego de 10 días fue liberado. También señala que el 29 de septiembre de 1973, su cónyuge también fue detenido por carabineros de Lautaro. Al día siguiente de su detención, ella efectúa diversas averiguaciones para obtener resultados acerca del paradero de su cónyuge, sin resultados.

d) Escrito de denuncia de presunta desgracia, a fs. 173 a fs. 175 (Tomo I): Expone en ese escrito que ella es cónyuge de Julio San Martín. Que para el día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por efectivos de Traiguén, luego de 10 días fue liberado. También señala que el 29 de septiembre de 1973, su cónyuge también fue detenido por carabineros de Curacautín. Previo a ese hecho, San Martín estaba en Curacautín con el objetivo de visitar a su madre, la que supuestamente estaba enferma. San Martín se enteró de ello por un telegrama aparentemente falso, por lo que solicitó un salvoconducto, el que fue concedido. Al día siguiente de su detención, ella efectúa diversas averiguaciones para obtener resultados acerca del paradero de su cónyuge, sin resultados.

B.14. A Fojas 257 (Tomo I) Oficio del Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Curacautín, el que remite causas criminales acumuladas Rol N° 11.558 Y 15.125, ambas por presunta desgracia de Julio San Martín San Martín y causa Rol N° 16.762 por Hallazgo de Osamentas Humanas.

B.15. A Fojas a 472 (Tomo II) Informe del Servicio de registro Civil e Identificación con fotografías de cédulas de identidad otorgadas en los años más próximos a 1973, del personal de Carabineros de Curacautín.

B.16. A Fojas 696 (Tomo II) Certificado de defunción de Hernán Alejandro Sías Cares, ordenado agregar en autos.

B.17. A Fojas 697 (Tomo II) Certificado de Toribio Salazar Lara, ordenado agregar a autos.

B.18. A Fojas 710 a 713 (Tomo III) Informe de Carabineros de Chile, con certificado de la 5° Comisaría de Curacautín, informando que no existen libros de novedades de guardia entre septiembre y diciembre de 1973 de la Quinta Comisaría de Curacautín, Retén manzanar y Rari Ruca, agregando además copias de acta de incineración de libros de 5° Comisaría de Curacautín, de 23 de marzo de 1974.

B.19. A Fojas 718 (Tomo III) Oficio del Dpto. de Derechos Humanos de Carabineros el que remite hojas de vida y fotografías de funcionarios de la Quinta Comisaría de Curacautín (a fs. 721 se ordena formar cuaderno separado) entre las

que se encuentran las correspondientes al Sargento Segundo José Tomas Torres Osses.

B.20. A Fojas 719 a 720 y 723 a 725 (Tomo III) Oficio del Servicio de Registro Civil e identificación con red familiar completa de Julio San Martín e Inés Aedo Lara.

B.21. A Fojas 746 a 751 (Tomo III) Informe de la Brigada de investigación criminal de Lautaro de fecha 16 de febrero de 2018, el que contiene declaración de Sergio Arturo Venegas Aedo (fs. 749) quien denuncia hallazgo de osamentas.

B.22. A Fojas 760 a 840 (Tomo III) Copias de piezas de expediente en causa rol 11.558, ordenada traer a la vista a fs. 759, las que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fojas 761 (Tomo III) Certificado de matrimonio entre Julio San Martín e Inés Aedo Lara.

b) A fojas 762 (Tomo III) Fotografía de Julio San Martín.

c) A fojas 763 (Tomo III) Certificado de nacimiento de Julio San Martín.

d) A fojas 764 a 800 (Tomo III) Denuncia por presunta desgracia (ya resumida precedentemente)

e) A fojas 801 a 802 (Tomo III) Extracto de filiación y antecedentes de Julio San Martín.

f) A fojas 804 (Tomo III) Acta de inspección a libros en comisaría.

g) A fojas 805 (Tomo III) Carátula expediente causa Rol 15.725

h) A fojas 806 a 810 (Tomo III) Oficio N° 2122 de fecha 6 de febrero de 1991, enviado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación al Juzgado de Letras de Curacautín enviando fotocopias de declaraciones de Galvarino Molina Gatica e Inés Aedo Lara.

B.23. A Fojas 1004 a 1031 (Tomo III) Informe pericial fotográfico N° 178/019, enviado por el Laboratorio de criminalística regional de Temuco, correspondiente al sector Rivera Sur del Río Cautín, en el Fundo Monte Flor, sector Agua Santa, Altomeco, Ruta S-11-R, comuna de Lautaro.

B.24. A fojas 1033 a 1077(Tomo III y IV) Certificados de defunción de las personas mencionadas fallecidas en las nóminas agregadas en el cuaderno reservado y las señaladas en los informes policiales, ordenados agregar a los autos, los que se desglosan de la siguiente manera: Gustavo Zúñiga Duarte (fs. 1.033); Adrián Segundo Sanhueza Muñoz (fs. 1.034); Manuel Eugenio Valderrama Castro (fs. 1.035); Luis Humberto Mora Morales (fs. 1.036); Higinio Alejandro Pillancari (fs. 1.037); Narciso Mardones Caamaño (fs. 1.038); Guillermo Burgos

Hinojosa (fs. 1.039); Tomás Peñailillo Bustos (fs. 1.040 y 1.053); José Alfredo Lagos Chavarría (fs. 1.041); Diego segundo Mercado Sanhueza (fs. 1.042); Domingo Pirce Escobar (fs. 1.043); José Domingo retamales Cuevas (fs. 1.044); Miguel Segundo Bascur Oñate (fs. 1.045); José Andrés Bravo Troncoso (fs. 1.046); Hugo Méndez Fernández (fs. 1.047); Hugo Antonio Riquelme Sepúlveda (fs. 1.048); Gerardo Toloza Ulloa (fs. 1.049); Pedro Villagrán Albarrán (fs. 1.050); Juan Bautista Cheuquepán Arzola (fs. 1051); Armando Luis Celis Zapata (fs. 1.052); German Troncoso González (fs. 1.054); Javier Contreras salamanca (fs. 1055); Víctor Figueroa Cariaga (fs. 1056); Antonio Segundo Gutiérrez Pérez (fs. 1.057); Santiago Mella Guerra (fs. 1058); Jose Fidel Saavedra salinas (fs. 1.059); René Saavedra Vergara (fs. 1060); Raúl Plaza Candia (fs. 1061); Roberto Jovino Padilla Cofré (fs. 1062); José Antonio Moreno Rebolledo (fs.1063); Enrique Rivera almendras (fs. 1065); Gustavo Hernández Vergara (fs. 1066); Alfredo Carrasco San Martín (fs. 1067); Luis san Martín (fs. 1.068); Benito Vidal Torres (fs. 1069); Hernán Gonzalo Soto Quezada (fs. 1070); Carlos Emigdio Gómez Jofré (fs. 1071); Elena Escalona Jara (fs. 1.072); Luis Enrique Fernández Ibáñez (fs. 1073); Ramón Renato Verdugo (fs. 1.074); Pedro Juan Muñoz Yañez (fs. 1.075); Inés Aedo Lara (fs. 1.076); Orlando Salazar Astudillo (fs. 1.077).

B.25. A Fojas 1078 a 1090 (Tomo IV) Copia simple de las páginas 27 a 29, 46, 49 a 54 y 61 del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Almonacid Arellano y otros versus Chile", de 26 de septiembre de 2016.

B.26. A Fojas 1091 y 1251 (Tomo IV) Extracto de Filiación y Antecedentes de Luis Segundo Ortíz Novoa.

B.27. A fojas 1092 y 1247 (Tomo IV) Extracto de Filiación y Antecedentes de José Tomás Torres Osses.

B.28. A fojas 1150 a 1154 (Tomo IV) Informe pericial de dibujo y planimetría N° 149/2019 elaborado por el Laboratorio de criminalística regional de Temuco, respecto del sector Alto Meco, Fundo Monte Flor, calle Cautín.

B.29. A fojas 1370 a 1373 (Tomo IV) Informe pericial psiquiátrico N° 29-2020, elaborado por el departamento de salud mental del Servicio Médico Legal de la Región de la Araucanía, respecto de José Tomas Torres Osses, quien en sus conclusiones señala que se trata de un hombre sin alteración de juicio de realidad; Con un nivel intelectual normal; Con sus funciones corticales superiores conservadas; Niega participación en los hechos por los cuales está siendo Procesado; No presenta alteración mental ni patología que le impida enfrentar un proceso legal.

B.30. A fojas 2022 a 2084 (Tomo VI) Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con los antecedentes que poseen de la víctima Julio San Martín San Martín.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que producto de los hechos acaecidos luego del 11 de septiembre de 1973, Julio San Martín San Martín, casado, militante del Partido Comunista y Subdelegado de Gobierno en la localidad de Capitán Pastene, fue detenido el 15 de septiembre de 1973 por Carabineros de Capitán Pastene, siendo trasladado hasta la cárcel de Traiguén, lugar en el que se le mantuvo recluido hasta el 24 de septiembre de ese año, siendo dejado en libertad y regresando a su domicilio ubicado en la localidad de Capitán Pastene. Estando en su domicilio, se le comunicó que su madre se encontraba enferma en la comuna de Curacautín, ante lo cual solicitó autorización a Carabineros para viajar a esa ciudad, otorgándosele un salvoconducto para poder acudir a dicho lugar. Todo lo anterior según documentos de fs. 13 (*tomo I*), entre otros relatos.

B.- Que el día 29 de septiembre de 1973, luego de visitar a su madre, Julio San Martín San Martín emprendió su regreso, abordando un bus que realizaba el recorrido entre Curacautín y Lautaro. Sin embargo, en el trayecto entre ambas comunas, el bus en el que viajaba fue interceptado por un vehículo en que se movilizaban funcionarios de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, entre los cuales se individualizó al cabo Domingo Pirce (fallecido, según fs. 1.043, tomo II) y los carabineros Torres y Ortiz. Los uniformados realizaron una revisión del bus, solicitando la identificación de los pasajeros y ordenaron a Julio San Martín bajarse de él, siendo testigos de estos hechos los otros ocupantes del bus y Hernán Sías Cares, quien efectuaba labores de auxiliar (fallecido, según fs. 696, tomo II). Lo precedente según testimonios de fs. 56, a fs. 166, de fs. 341 a fs. 342, de fs. 348 bis a fs. 349 (*tomo I*), de fs. 785 a fs. 786, a fs. 787, de fs. 778 a fs. 779, de fs. 793 a fs. 794 (*tomo II*), entre otras declaraciones y documentos de proceso.

C.- Que luego de su detención por los funcionarios de carabineros, Julio San Martín San Martín fue trasladado a la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, allí fue ingresado a los calabozos de la unidad, siendo visto en

ese lugar por Orlando Salazar Astudillo (de fs. 792 a fs. 793, de fs. 798 a fs. 799, de fs. 828 a fs. 830, *tomo III*) (fallecido, según fs. 1.077, *tomo IV*), quien también era ingresado como detenido. La detención de Julio San Martín San Martín y de su permanencia en los calabozos de la Quinta Comisaría de Curacautín, fue comentada entre los funcionarios policiales, entre ellos el cabo Armando Etter González que realizaba funciones de guarda almacén; el cabo Ramón Hugo Olivos Bascur, quien cumplía funciones operativas; y el carabinero Luis Segundo Ortiz Novoa, quien, además, habría participado de la detención de San Martín San Martín (de fs. 345 y siguientes, *tomo I*). Incluso, el propio funcionario que cumplía labores de guarda almacén pudo observar en una oportunidad que el Teniente Adrián Sanhueza (fallecido, según fs.1.034, *tomo III*), le colocó un cigarrillo encendido en el cuello a una persona que estaba detenida en ese lugar y que por comentarios correspondía a Julio San Martín San Martín (de fs. 492 y siguientes, *tomo II*). Asimismo, el cabo Ramón Hugo Olivos Bascur tuvo contacto directo con San Martín, ya que se acercó en oportunidades al calabozo para darle un trozo de pan, según afirmaciones de fs. 861 ratificadas a fs. 906 y siguientes (*tomo III*).

D.- Que estando detenido Julio San Martín San Martín fue sacado una noche por los mismos funcionarios que participaron de su aprehensión, estos son, Domingo Pirce Escobar, Luis Ortiz Novoa y José Tomás Torres Osses, conducido a un puente, procediendo a dispararle y lanzarlo posteriormente al río, hechos que fueron comentados por estos mismos uniformados en la unidad policial enterándose de ello la dotación de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, entre ellos Ramón Hugo Olivos Bascur y Santiago Medina Lobos (según acotaciones de fs. 906 y fs. 870, respectivamente, *tomo III*). Incluso, en fechas posteriores, un carabinero de apellido Méndez de la misma dotación de Curacautín, (actualmente fallecido, según fs.1.047, *tomo III*) le comentó lo acontecido con Julio San Martín a una persona residente en la comuna de Curacautín, esto es, de la detención de Julio San Martín y su ejecución, según el propio relato del testigo Galvarino Molina Gatica (según aseveraciones de fs. 163 a fs. 164, de fs. 274 a fs. 275, de fs. 294 a fs. 295 (*tomo I*))

E.- Que al día siguiente de la detención de Julio San Martín, el auxiliar del bus que realizaba el recorrido frecuente entre las comunas de Curacautín y Lautaro, y que fuera testigo de la aprehensión, observó que a orillas de la ruta se encontraba fallecido Julio San Martín, bajándose del vehículo junto a otros pasajeros, pudiendo ver signos quemaduras en su cuerpo, como de

cigarros y, además, no tenía uñas y su cara esta muy azul, media morada (según expresiones de fs. 348 bis a fs. 349, *tomo I*). Del hallazgo también se enteró Enrique Alfonso Yañez Illanes, quien pudo observar el cuerpo de Julio San Martín cuando caminaba por el sector, hacia el asentamiento Santa Julia, divisandolo tirado en el suelo, entre un cerco y el camino (según manifestaciones de fs. 881 a fs. 883, *tomo III*)

Por lo anterior, la cónyuge de Julio San Martín San Martín doña Inés Aedo Lara (actualmente fallecida, según fs. 1.076, tomo IV), fue avisada que vecinos de la ciudad de Curacautín le comunicaron que Julio San Martín se encontraba fallecido y su cuerpo se hallaba abandonado a orillas del camino, en las cercanías de un asentamiento llamado Santa Julia, en la misma comuna de Curacautín. Ante la noticia, doña Inés Aedo Lara concurreó hasta la Comisaría de Carabineros de Curacautín donde el Mayor Gustavo Zúñiga Duarte (fallecido, según fs.1.033, *tomo III*) le expresó que efectivamente sus hombres habían detenido a Julio San Martín San Martín, pero que lo habían dejado en libertad en la tarde del mismo día y que había proseguido su viaje a Temuco. Al no regresar su cónyuge a casa y no tener noticia sobre su paradero, doña Inés Aedo Lara concurreó en repetidas oportunidades a Curacautín sin obtener ninguna noticia oficial y concreta, salvo que en reiteradas ocasiones vecinos rumoreaban que su cónyuge había sido baleado y que su cadáver permaneció durante varios días en el campo, cerca del Asentamiento Santa Julia. Al intentar dirigirse a tal lugar a objeto de verificar esas informaciones, la señora Inés Aedo fue impedida por el mayor Gustavo Zúñiga Duarte. Todo lo anterior por la declaración de fs. 795 (*tomo III*), entre otros documentos del proceso.

Finalmente, sobre el destino del cuerpo de Julio San Martín, el cabo Olivos Bascur logró escuchar que personal de Carabineros se trasladó hasta el lugar e hizo desaparecer el cuerpo de Julio San Martín, rumoreándose que había sido introducido al interior de un ojo de río y tapado con piedras, según narraciones de fs. 860 a fs. 861, ratificadas a fs. 906 y siguientes (*tomo III*)

F.- Que ppor último, hasta esta fecha ningún funcionario público del Ejército de Chile, Carabineros de Chile o de otra rama de las Fuerzas Armadas y/o de Orden y Seguridad que se desempeñaban en la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo sucedido con Julio San Martín San Martín, manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento de

todo tipo de antecedentes sobre los hechos que se han mencionado en los párrafos precedentes.

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados, en esta etapa procesal, constituyen los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Julio San Martín San Martín, previsto y sancionado en los artículos 141, 150 n° 1 y 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además **delito de lesa humanidad**. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Ilma. Corte de Apelaciones y la Excm. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 6 de noviembre de 2015

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumercindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 17 de agosto de 2016

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017.

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 15 de junio de 2020;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en las persona de Domingo Huenul Huaiquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.-

X. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de dicimebre de 2017.-

Y. Causa rol 63.535, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018. (Cúmplase 26 d emarzo de 2019)

Z. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

AA. Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 09 de abril de 2021.

BB. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 02 de junio de 2021.

BB. Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 16 de junio de 2021.

DD. Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020.

EE. Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

FF. Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

GG. Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

HH. Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

II. Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018

JJ. Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.K Causa rol 29.879, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2017.

LL. Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

MM. Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, **Secuestro Calificado** de **Pedro Millalén Huenchuñir**, sentencia de 22 de septiembre de 2021.

NN. Causa rol 44.305 del Juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de febrero de 2021.

Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través

del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciera sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7º) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapen masivamente de

la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michel Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

C. DECLARACIONES INDAGATORIAS

8°) Que prestando declaración indagatoria **JOSÉ TOMÁS TORRES OSSES** (30 años a la época de los hechos), quien declaro de fs. 573 a fs. 574, de fs. 586 a fs. 588 (tomo II).

En declaración Extrajudicial de fecha 2 de diciembre de 2016 a fs. 573 a fs.574 (Tomo II) expresa que ingresó a carabineros de Chile el 01 de junio de 1966, siendo su primera destinación la Segunda Comisaría de Collipulli, hasta el año 1971 en que es destinado a Curacautín, donde permaneció hasta el año 1988, para luego ser trasladado a la Segunda Comisaria de Arauco hasta el año 1990, en que vuelve destinado a la Comisaría Victoria donde permaneció hasta el año 1991, fecha en que se acoge a retiro con el grado de Sargento Segundo. Señala que durante el año 1973 se desempeñaba en la Quinta Comisaría de Curacautín, ostentando el grado de Carabinero. Unidad que estaba a cargo del Mayor Gustavo ZUÑIGA DUARTE, Subcomisario Teniente Adrián SANHUEZA, Sargento Primero MARDONES, Sargento Primero PIRCE y otros funcionarios que no recuerda, pero eran aproximadamente 30 funcionarios policiales. Indica que sus labores al interior de la Comisaria de Curacautín consistían en realizar los distintos servicios que allí se llevaban a cabo, entre los cuales recuerda servicios a la población, patrullajes, control de alcoholes. Agrega que jamás formo parte de comisiones extrainstitucionales en organismos de inteligencia, tales como D.I.N.A. o C.N.I. o realizar algún tipo de curso en esa área. Manifiesta que efectivamente había funcionarios del SICAR dedicados a la detención de personas involucradas en política entre las cuales recuerda a el Cabo Primero CELIS, Teniente SANHUEZA, Suboficial URRUTIA y el Cabo Primero DEL VALLE ZUÑIGA, los cuales traían a estas personas y las dejaban en el quincho al lado de las

caballerizas, pero su oficina la mantenían en la gobernación. Sobre posibles interrogatorios o torturas realizadas en dicha unidad indica que no fue testigo ni tampoco tuvo información por otro funcionario, solamente recuerda como detenidos en la unidad a don Carlos GOMEZ, Luis OLIVAREZ, Hernán SOTO, Aldo OSORIO, Héctor MONTES. En relación con la víctima de los hechos investigados LUIS SAN MARTIN SAN MARTIN, señala que efectivamente lo conoció debido a que era vendedor del diario y tomó conocimiento de su muerte por comentarios de otros funcionarios oficiales que esta persona habría sido encontrada muerta en vía pública, desconociendo quien lo detuvo y quienes le dieron muerte, indicando que jamás lo vio detenido en la Comisaría.

En declaración Judicial de fecha 15 de marzo de 2017 a fs. 586 a fs. 588 (tomo II) ratifica declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rola de fojas 573 a fs. 574. El Tribunal le exhibe la fotografía de fojas 284 que corresponde a Julio San Martín San Martín. El deponente indica que es la persona que señaló en su declaración policial y que era vendedor de diarios. Menciona que para el 11 de septiembre llevaba 2 años desempeñándose en la 5ta comisaría de carabineros de Curacautín. También menciona en aquella época había vehículos policiales, unos jeep verdes que fueron requisados a alguna institución pública y además una camioneta del Banco Estado. Respecto a los conductores de la unidad, recuerda a Romero. Sin embargo, menciona que Después del 11 de septiembre se requisaron más vehículos, por lo que cualquier funcionario podía manejar pero que el deponente en ese tiempo no sabía manejar. Cuenta que a partir del 11 de septiembre de 1973 la situación de acuartelamiento en la unidad fue de grado 1, es decir, debían dormir en la unidad y además, alimentarse en ese lugar. Esta situación se prolongó por un par de semanas, pero no menos de 15 días. Señala recordar a las personas detenidas porque eran mantenidas en el hall de la unidad y en la pérgola que estaba en el patio de la unidad. Algunas de estas personas tuvieron que alojar ahí disponiendo para ello la pérgola del cuartel. No lo hicieron en los calabozos pues estos estaban dispuestos para los delitos comunes. Presume que estas personas estaban detenidas en la unidad por motivos políticos. Recuerda haber trasladado al regimiento de Victoria a Hernán Soto, Aldo Osario, Héctor Montes y a dos gendarmes, al parecer era un cabo y un sargento, de la cárcel de Curacautín que estaban detenidos en la unidad. Ellos fueron conducidos en unas camionetas que fueron prestadas por una persona dueña de una cervecería en Curacautín. Menciona que le correspondía ir en la parte de atrás, en el pick up de la camioneta, con su arma junto a los

detenidos. Menciona desconocer si los detenidos eran ingresados en los libros de guardia de la unidad. Señala que no le correspondió ver o ingresar detenidos al momento de estar como cuartelero. Continúa su relato apuntando que en esa época él tenía la edad de 30 años y medía 1.69 m. Además, había dos funcionarios más con apellido Torres, entre ellos Mercenario Torres y Pedro Torres, ambos mayores que él, Mercenario era más bajo y Pedro tenía una altura similar. Respecto al carabinero Ortiz, indica que no recuerda que antes del 11 de septiembre haya tenido algún problema que lo hiciera desvincularse la comisaría. Señala que Ortiz hacía las mismas funciones que realizaban todos en la unidad. Respecto a la formación del SICAR en Curacautín, indica que este se formó inmediatamente producido el pronunciamiento militar. Sus oficinas se ubicaron en la gobernación de la comuna, pero los detenidos eran llevados a la unidad, manteniéndolos en el quincho al lado de las caballerizas. Este quincho estaba al lado de las caballerizas y cercano a la pérgola que mencionó. Aclara que Sanhueza, Del Valle y Celis fueron los primeros integrantes de ese grupo y Urrutia se integró después del año 73. El Tribunal le lee, en lo pertinente, el documento de fs. 13 y siguientes. El deponente indica no ser el carabinero Torres que se indica en ese documento. Señala nunca bajar a San Martín del bus ni tampoco saber de su detención en la unidad. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de fs. 302 y siguientes. El deponente insiste en no ser el funcionario de apellido Torres que señala Ortiz, pero podría ser Pedro Torres Matamala, ya que era el funcionario de confianza del capitán. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 348 bis y siguientes. El deponente vuelve a insistir en que no integró la patrulla que señala el sr. Sías. Añade que en cuanto a las características físicas de los funcionarios Celis y el Teniente Sanhueza, eran personas más altas que él y macizas. Por último, el Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 492 y siguientes. El deponente indica nunca haber visto detenido a Julio San Martín y desconoce los hechos que da a conocer Armando Etter en su declaración.

9º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **JOSÉ TOMÁS TORRES OSSES**, quien fue sometido a proceso de **fs. 1.094 a 1.101 (Tomo IV)**, con fecha 06 de mayo de 2019, auto de procesamiento que fue confirmado por la Illtma. Corte de Apelaciones de Temuco a **fs. 1.132 (Tomo IV)**. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1.408 a 1.414 (Tomo IV)**, con fecha 10 de junio de 2020, como autor de los delitos de **secuestro simple**,

apremios ilegítimos y homicidio calificado en la persona de Julio San Martín San Martín, perpetrados en la comuna de Curacautín en el mes de septiembre de 1973.

Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (23)

1) Domingo Jaime Huilical Ortíz	13) Luis San Martín
2) Juan de Dios Marileo Grandon	14) Luis Enrique Fernández Ibáñez
3) Miguel Luis Del Valle Zúñiga	15) Hernán Alejandro Sías Cares
4) Arnulfo Rivas Mena	16) Orlando Salazar Astudillo
5) Antonio Inostroza Segura	17) Galvarino Gatica Molina
6) Benedicto Abel Narvaez Valenzuela	18) Enrique Alfonso Yañez Illanes
7) Gustavo Weisse Abarzúa	19) Pedro Juan Muñoz Yañez
8) Elena Escalona Jara	20) Armando Etter González
9) Inés Aedo Lara	21) Gustavo Fernando Zúñiga Duarte
10) Gladys de las Mercedes Escalona Leiva	22) Santiago Medina Lagos
11) Juana Aedo Lara	23) Ramón Olivos Bascur
12) María Glady San Martín	

Aparte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

a.1 DOMINGO JAIME HUILICAL ORTÍZ: En declaración judicial de 8 de noviembre de 2013 de fojas 104 a fs 105 (Tomo I) informa que ingresó a Carabineros en noviembre de 1970. Para septiembre de 1973 se desempeñaba en el retén Manzanar, dependiente de la 5° Comisaría de Curacautín, con el grado de Carabiniere. Tras el 11 de septiembre de 1973, fueron recogidos los retenes a la unidad base, es decir, Manzanar se recogió a la 5° Comisaría de Curacautín, sin recordar si fueron uno o más meses en situación de acuartelamiento. Dentro de

sus funciones entre otras, estaba la de ser cuartelero, encargándose del aseo del recinto, custodia de los detenidos y apoyar a la guardia. Luego señala no recordar a las personas que integraban la 5° Comisaría de Curacautín. Continúa su relato diciendo que después del 11 de septiembre había dos vehículos institucionales, un furgón y un jeep tipo land rover, ambos de color blanco y negro. No recuerda si hubo incautación de vehículos a las instituciones públicas para realizar labores de patrullaje, así como tampoco recuerda a quienes se desempeñaban como conductores en esa Comisaría. Agrega que nunca le correspondió efectuar labores de patrullaje en la población a bordo de vehículos institucionales ni de otro tipo. Ante la pregunta del tribunal, responde que no puede afirmar que en Curacautín se hayan mantenido detenidos por motivos políticos, tampoco recuerda que después del 11 de septiembre de 1973 se haya aumentado el número de detenidos al interior de la Comisaría. Dice no haberse enterado de ningún suceso irregular con los detenidos que haya ocurrido en la Comisaría de Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. Consultado acerca del caso de Julio San Martín San Martín, él declara desconocer el hecho y a la persona consultada en cuestión. Pero añade haber escuchado comentarios en la unidad que en un sector rural de Curacautín se habría encontrado un cadáver, ignorando si se efectuó un procedimiento para levantar dicho cadáver o esclarecer dicho rumor, sin precisar una fecha específica después del 11 de septiembre de 1973 en la que escuchó esos comentarios. Finaliza su declaración señalando que solo tenía el grado de Carabinero y solo se limitaba a obedecer las órdenes de sus superiores.

a.2. JUAN DE DIOS MARILEO GRANDÓN: En declaración judicial de 8 de noviembre de 2013, fs. 106 a fs. 108 (Tomo I) el deponente señala que para el 11 de septiembre de 1973, ostentaba el grado de Carabinero en la 5° Comisaría de Curacautín, en donde cumplía funciones de patrullaje en la población, vigilante exterior, cuartelero, entre otras. Cuenta que después del 11 de septiembre de 1973 se acuartelaron en grado 1, debiendo pernoctar en el cuartel y sólo salir para hacer patrullajes. Apunta que en todo el período, Carabineros fue el encargado del orden y la seguridad de Curacautín. Recuerda como parte de la dotación al suboficial Gutiérrez, Pillancari, Mardones, Lagos y el comisario de apellido Zúñiga. Después del 11 de septiembre de 1973 había dos jeeps que eran institucionales, además de los vehículos del SAG e INDAP que fueron incautados y utilizados por la Comisaría. A lo que se le pregunta, dice recordar que un funcionario de apellido Peñailillo era el conductor de la Comisaría y además, los funcionarios que tuviera licencia de conducir al día, fueron autorizados por el

comisario para conducir los vehículos, entre ellos estaba Etter y Romero y le parece que también Del Valle y Herrera lo podían hacer, pero no está completamente seguro de ello. Asevera que efectivamente hubo detenidos por motivos políticos en la Comisaría de Curacautín. Estos eran mantenidos en el patio del cuartel. Tiene entendido que estaban ahí porque lo ordenaban los tribunales militares. Los detenidos eran mantenidos hasta por lo menos una semana, luego de lo cual eran trasladados al regimiento de Angol. Dice que los carabineros de la Comisaría eran los encargados del traslado a la unidad militar. Luego agrega que no le correspondió trasladar a detenidos por motivos políticos hasta el regimiento de Angol y que las detenciones por motivos políticos eran efectuadas por el personal de carabineros de Curacautín no correspondiéndole en ningún caso componer patrullas que realizaran esa labor. Alega no haberse enterado de ningún suceso irregular con los detenidos que haya ocurrido en la Comisaría de Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. Atestigua que el Oficial de apellido Sanhueza era el encargado de los detenidos por motivos políticos. Él tenía que coordinar todo lo referente a ellos y destinar a parte del personal para el traslado a Angol. Respecto al caso de Julio San Martín San Martín, manifiesta que desconoce el hecho y que es segunda vez que escucha ese nombre, ya que fue interrogado por la Brigada investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, ante quienes declaró sobre el mismo hecho. Sin embargo, recuerda que en una fecha que no puede precisar del año 1973, hubo un homicidio en la comuna de Curacautín, en un camino rural ubicado a la salida hacia la frontera. Tiene entendido que se dio cuenta al Juzgado de Letras y hubo una investigación criminal respecto a ese caso.

a.3. Miguel Luis Del Valle Zúñiga. En declaración judicial de 8 de noviembre de 2013 a fs. 109 a fs. 111 (Tomo I) Explaya que ingresó a Carabineros en el año 1969 y para septiembre de 1973 se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín con el grado de Carabinero. Sus funciones eran la efectuar patrullajes en la población, vigilante exterior, cuartelero entre otros. Especifica que la labor de cuartelero consiste en vigilar los calabozos en donde están los detenidos y en apoyar las labores al suboficial de guardia. Después del 11 de septiembre de 1973, la unidad se acuarteló en grado 1, debiendo pernoctar y almorzar en la unidad, no pudiendo hacer vida familiar. Debían estar alertas por cualquier eventualidad que surgiera, solo podían salir a efectuar patrullajes en la población. Recalca que a pesar de estar en grado 1, no se recogieron las unidades que dependían de la Comisaría. En esa misma fecha, llegó el personal del Ejército a

tomar el control de la comuna, prolongándose esta situación por alrededor de un mes. Recuerda como parte de la dotación al suboficial mayor Pillancali, Mardones, suboficial Pirce, y al parecer también habían unos funcionarios de apellido Torres. Dice que después del 11 de septiembre en la unidad había dos vehículos, un jeep y un furgón que tenían los colores blanco y negro y que eran los institucionales, sumado a otros 3 o 4, los que habían sido incautados a instituciones públicas. Los vehículos los conducía ocasionalmente el Carabinero de apellido Romero junto uno o dos más en la unidad. Prosigue su relato declarando que efectivamente habían detenidos por motivos políticos en la Comisaría de Curacautín, los cuales eran mantenidos en los calabozos de la unidad, no existiendo dependencia especial para este tipo de detenidos y no se mantenían privados de libertad por más de un día. Anexa que las detenciones por motivos políticos eran efectuadas por el personal de ejército y también por carabineros. Él nunca participó en detenciones por motivos políticos. Las detenciones de este tipo eran realizadas por los funcionarios de mayor rango de la unidad. A lo que se le pregunta, contesta no recordar que se hayan compuesto patrullas mixtas entre Carabineros y Ejército después del 11 de septiembre de 1973. Las patrullas eran por institución, no se mezclaban con los militares para patrullar. También indica que no se enteró de ningún suceso irregular con los detenidos que haya ocurrido en la Comisaría de Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. A su pregunta, los interrogatorios de los detenidos políticos eran. Consultado acerca de los interrogatorios a los detenidos políticos, señala que eso se efectuaba por personal del ejército y por el oficial Sanhueza de Carabineros. Consultado acerca del caso de Julio San Martín San Martín, el deponente manifiesta desconocer el hecho y a la persona en sí, pero trae a colación un hecho ocurrido después del 11 de septiembre de 1973, que se comentó en la unidad acerca de la aparición de un cadáver en un camino del sector rural de Curacautín, desconociendo si se efectuó un procedimiento para levantar dicho cadáver o si los superiores ordenaron verificar dicho rumor. Finaliza aseverando que en ese tiempo solo tenía el grado de Carabinero, por lo que solo se limitaba a hacer lo que le mandaban sin cuestionar las ordenes de sus superiores.

En declaración judicial de 2 de diciembre de 1991 a fs. 839 a fs. 840 (Tomo III). Afirma que trabajó en la comisaría de Curacautín durante el año 1973, siendo un carabinero recién ingresado al servicio policial. Cuando él trabajaba en esa comisaría el subcomisario era el teniente Adrián Sanhueza. Afirma que en esa época se detuvo a muchas personas, en número que le sería imposible indicar ya que fue mucha la gente que se detuvo, siendo él participe de varias, cuando debía

acompañar a algún superior, pero aclara que en cuanto al caso preciso de Julio San Martín San Martín, no lo conoció, ni oyó mencionar su nombre, dado a que él estaba recién llegado a la ciudad y conocía a muy pocas personas. Respecto a una declaración que dio otro testigo respecto que se habría obligado a una persona a saltar al río o lanzado al mismo, él aclara que eso no es efectivo, que mientras él estuvo en Curacautín nunca se cometió un hecho similar con algún detenido. Asevera que él era un Carabinero más, sin grao ni antigüedad y se limitaba a recibir órdenes de sus superiores, pero en un caso así él se habría negado a cometerlo, por lo que afirma que solo es una invención. Finaliza su declaración enfatizando en si tuviera algún antecedente acerca de la muerte de San Martín, no tendría ningún problema proporcionar dichos antecedentes, pero como señaló anteriormente, nunca lo conoció y él estuvo poco tiempo en Curacautín y a principios de 1974 fue trasladado a Victoria.

En declaración judicial de 16 de mayo de 2018 a fs. 846 a fs. 848 (Tomo III) Ratifica las declaraciones que rolan a fs. 109 y siguientes y de fs. 839 y siguientes, así como también la de fs. 123 y siguientes y de fs. 638 y siguientes prestadas ante la Policía de Investigaciones de Chile. Atestigua que después del 11 de septiembre de 1973, es probable haya participado en detenciones de personas junto a sus superiores, los cuales eran detenidos en la vía pública, nunca en sus domicilios y los motivos de su detención era por infringir el toque de queda. Recuerda haber detenido personas en el día, ya que el toque de queda empezaba a las 8:00 de la mañana y le parece que los primeros días había toque de queda todo el día. Respecto a los dichos de Gerardo Toloza rolante a fs. 835 y sig., manifiesta que jamás salió con el teniente Sanhueza, siempre andaba a cargo de un cabo o sargento en un procedimiento en la calle. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 492 y sig., a lo cual el deponente indica que jamás vio detenido a Julio San Martín San Martín y desconoce los hechos que da a conocer Armando Etter en su declaración. De igual forma ignora el procedimiento de ingreso y egreso de los detenidos. Dice que en su labor de cuartelero le correspondía la mantención, el aseo del cuartel y apoyar al suboficial de guardia. El cuartelero también es quien acompaña a los detenidos a los calabozos cuando son ingresados en la unidad y es probable que después del 11 de septiembre de 1973 haya ingresado a los calabozos a detenidos. No recuerda los nombres de los detenidos que hayan estado en la unidad después de esa fecha. También indica que el cuartelero de la unidad era el encargado de llevar los detenidos al baño, pero eso no se hacía, los detenidos debían hacer sus necesidades en el mismo calabozo. Esto por medidas de seguridad y además,

habían disposiciones de los superiores. Continúa contando que en esa época se comentaba que los oficiales eran los encargados de los interrogatorios a los detenidos y se rumoreaba que los llevaban a otra dependencia de la unidad para ser interrogados. Ante lo que se le pregunta, contesta que en la unidad había caballares y caballerizas, en estas últimas había fardos. No recuerda que en la unidad se haya mantenidos detenidos en las caballerizas, pero cuando los calabozos no daban abasto, los detenidos eran mantenidos en el patio de la unidad, los tenían sentados allí, lo cual no duraba más del día, porque luego los dejaban en libertad. Añade no haber visto mujeres detenidas en la comisaría de Curacautín luego del 11 de septiembre de 1973. Consultado sobre Toribio Salazar, responde que él se desempeñaba en Curacautín después del 11 de septiembre de 1973. Sobre Luis Ortiz, describe que él era que manejaba uno de los furgones policiales y a veces el jeep, él iba a buscar y dejar al Teniente o al Comisario a su casa. Indica que a pesar de que Romero era el conductor titular, Ortiz también conducía en algunas ocasiones el jeep o el furgón y aunque tenía el grado de carabinero, Luis Ortiz era una persona de confianza de la superioridad. Según su recuerdo, Luis Ortiz siempre trabajó en la comisaría y siempre vestido de uniforme. No recuerda haberlo visto desempeñarse en la comisaría vestido de civil y después del 11 de septiembre de 1973 lo hacía permanentemente en la unidad, no recordando que haya sido desvinculado de carabineros o algo similar.

a.4. Arnulfo Rivas Mena: En declaración policial de fecha 21 de enero de 2014, a fs. 247 a 248 (Tomo I) el deponente decanta que ostentaba el grado de Carabinero en la 5° Comisaría de Curacautín en el año 1973, recordando que al mando de la unidad se encontraba el mayor Gustavo Zúñiga Duarte y la conformaban alrededor de 50 funcionarios. Respecto al caso de Julio San Martín, señala que él lo conoció, ya que era zapatero en Curacautín. En cuanto a su detención y desaparición, el deponente se enteró de ese hecho a finales de septiembre de 1973, por medio de familiares de San Martín, quienes conversaron con él para pedirle información de su paradero, pero él respondió que ignoraba cualquier antecedente ya que nunca lo vio en la comisaria ni supo que personal de la unidad lo haya tomado detenido. Finalmente agrega que a la fecha de la declaración, nunca tomó conocimiento ni se enteró por comentarios acerca de lo sucedido con San Martín.

En declaración policial de fecha 16 de junio de 2014, a fs. 296 a 297 (Tomo I), ratifica la declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 247 a 248 y acota que efectivamente conoció a Julio San Martín, ya que él tenía un lugar donde arreglaba zapatos, cerca de la Comisaría. Jamás lo vio como activista, ni en

manifestaciones. Dice que en la plana mayor, el comisario era Gustavo Zúñiga Duarte y también había un oficial de apellido Sanhueza. En cuanto a las detenciones de personas por carácter político, desconoce la existencia de un grupo de carabineros que se dedicara a ello, que eso lo efectuaban los militares, los cuales los detenían, los llevaban a la Comisaría y los interrogaban ahí, sin ver torturas de ningún tipo. Dice que la costumbre era detener a la gente, soltarlos y volverlos a detener y que siempre lo hacían los militares. Estos llegaban en cualquier momento en sus vehículos. Consultado acerca de los funcionarios que operaban en la Comisaría, recuerda a Méndez, Del Valle y Ortiz, que cumplían las mismas funciones que los demás, es decir, servicios de población. Dice recordar a un solo funcionario de apellido Méndez, que le decían “chico Méndez” y que era de Cañete.

En declaración policial de fecha 30 de junio de 2016, a fs. 509 a fs. 510 (Tomo II) expone que respecto a la víctima, lo conoció ya que era zapatero, teniendo un taller a una cuadra de la Comisaría de Curacautín. Recuerda que San Martín no tenía antecedentes delictuales y no lo vinculaban como simpatizante de partidos políticos de izquierda. En cuanto a su detención, recalca no tener antecedentes de ello, que las detenciones de carácter político las efectuaban el teniente Sanhueza, el sargento 2° Pirce y el Carabinero Padilla. Prosigue su relato señalando que familiares de San Martín se habrían acercado a él con el objeto de obtener información sobre su detención, agregando que solo conversó con el padre de San Martín, sin poder dar antecedentes ya que desconocía su situación. Consultado acerca de la conducción de los vehículos policiales, niega haber efectuado esa labor, sin embargo recuerda en esa función al carabinero de apellido Romero, quien incluso era conductor del Mayor de la Comisaría. Por último, en cuanto al hallazgo de un cadáver a la altura del puente ubicado en la salida de Curacautín, aclara no saber nada acerca de eso.

a.5. Antonio Inostroza Segura: En declaración policial, a fs. 270 a fs. 271 (Tomo I), de 20 de marzo de 2014. Expone que es profesor normalista, siendo su primera destinación la comuna de Curacautín, donde conoció a Julio San Martín, quien era artesano zapatero y además era miembro del partido comunista, del cual el deponente también era militante, por lo cual entablaron una amistad, ya que San Martín era un hombre muy responsable e inteligente, llamando la atención que se había educado en materias como música, literatura y otras que contrastaban con su oficio, además de ser muy dedicado en su labor de bombero. Cuenta que era casado con Inés Aedo, con quien no tuvo hijos. Continúa su

declaración relatando que en el gobierno del presidente Allende, le fue otorgado el puesto de Presidente Provincial de la unidad popular de Malleco, por lo cual propuso a Julio San Martín como subdelegado de Gobierno en la comuna de Lumaco y Capitán Pastene, cargo que realizó hasta el golpe de estado. Luego relata Para septiembre de 1973 fue detenido y juzgado por un consejo de guerra, siendo condenado a 10 años de cárcel, que tras una apelación se rebajó a 3 años. Luego fue acogido por la Cruz Roja y fue enviado a Alemania y otros países antes de regresar a Chile en 1989. Ya en Chile, se le encargó por su partido la función de ser secretario general del PC en la provincia de Malleco, por lo cual tuvo la oportunidad de conocer la información que circulaba acerca de algunos detenidos desaparecidos entre los que se encontraba Julio San Martín. Se enteró que San Martín fue detenido en septiembre de 1973 por Carabineros de Curacautín, cuando viajaba en un bus Igi-Llaima, siendo trasladado a la Comisaría, y que su cadáver fue visto tirado y sangrante en el camino frente al asentamiento Santa Julia, desapareciendo sin ser ubicado hasta la fecha. Concluye señalando que solo esos antecedentes maneja.

a.6. Benedicto Abel Narvaez Valenzuela: En declaración extrajudicial de fecha 1 de diciembre de 2016, a fs. 571 a fs. 572 (Tomo II). Decanta que para el año 1973 desempeñaba sus funciones en la 5° Comisaría de Curacautín con el grado de Carabinero, unidad que estaba a cargo del Mayor Gustavo ZUÑIGA DUARTE, Subcomisario Teniente Adrián SANHUEZA y otros funcionarios que no recuerda, pero eran aproximadamente 40 funcionarios policiales. Sus labores consistieron en realizar patrullajes, servicios a la población, control de alcoholes. Asevera que durante su carrera funcionaria, jamás formó parte de comisiones extra institucionales en organismos de inteligencia, tales como D.I.N.A. o C.N.I. o realizar algún tipo de curso en esa área. Señala también que efectivamente había un grupo de carabineros dedicado a las detenciones de personas por motivos políticos, entre los que recuerda al suboficial Mardones, sargento segundo Pirce y el carabinero Pedro Torres Matamala, los cuales detenían a personas y las llevaban al quincho al lado de las caballerizas. En relación a posibles interrogatorios o torturas realizadas en la unidad, afirma no haber sido testigo ni tampoco fue informado por otro funcionario, sólo recuerda que de las personas que estaban detenidas se encontraban algunos profesores de su escuela industrial y de la escuela Consolidada, entre ellos don Luis Olivares, Antonio Sanhueza, Durán, Hernán Soto y otros que no recuerda. Consultado acerca de la víctima Julio San Martín, responde que lo conoció ya que era

vendedor del diario "El Siglo", y que estaba casado con una mujer de apellido Aedo. Respecto a su muerte, solo con el curso de los años se enteró de ese suceso, ya que nunca lo vio detenido en la comisaría.

En declaración judicial de fecha 14 de marzo de 2017, a fs. 582 a fs. 584 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 571 a fs. 572. Pero rectifica en la parte donde señala que Pedro Torres Matamala formaba parte del grupo que detenía personas por motivos políticos, ya que a quien hacía referencia era a Mercenario Torres. Señala que conoció a Julio San Martín, que estaba casado con una vecina de su infancia, además compartía con sus cuñados cuando eran niños, pues jugaban a la pelota, como en los años 60. Cuenta que a partir del 11 de septiembre de 1973, llegaron a la comisaría detenidos profesores que ubicaba, como Olivares, Sanhueza, Durán y Soto. Esos detenidos no eran registrados en los libros de guardia. El deponente presumía que estaban detenidos por ser partidarios del gobierno derrocado y cuenta que no tenía contacto con ellos, porque les prohibían ir al lugar donde estaban. El tribunal le pregunta cómo supo que estos detenidos estaban ahí, si no tenían acceso a ellos, a lo que el declarante contesta que ellos tenían su ropa en una pieza cuya ventana daba al exterior, ahí se podía ver una pérgola, en la cual mantenían a los detenidos que mencionó. Consultado acerca del carabinero Ortiz, señala que él siempre estuvo activo en la institución, no recuerda que antes del 11 de septiembre de 1973 fuera dado de baja, esta persona era de confianza del teniente Sanhueza y del capitán Zúñiga. El Tribunal le lee la declaración rolante a fs. 492 y siguientes, a lo que indica que nunca vio detenido a San Martín y desconoce los hechos que relata Etter en su declaración, haciendo presente que Etter siempre estaba en la unidad, a diferencia de él que salía a hacer patrullajes. Luego comenta sobre la situación de acuartelamiento que vivieron después del 11 de septiembre y añade que los únicos detenidos que vio en la unidad son los profesores que mencionó anteriormente. En cuanto a San Martín, dice que cuando prestó su declaración, él se enteró que éste estaba desaparecido. Concluye que a pesar de tener contacto con los cuñados de San Martín, nunca tuvo conocimiento de detención y desaparición, y menos de los hechos que relata Etter.

a.7. Gustavo Weisse Abarzúa: En declaración extrajudicial de fecha 28 de febrero de 2017, a fs. 658 a fs. 660 (Tomo II). Respecto a los hechos investigados, desarrolla que efectivamente conoció a Julio San Martín, él se dedicaba a la zapatería y militaba en el partido comunista, siendo designado en la época de los 70, como subdelegado en Lumaco. Ocurrido el golpe de Estado, se

enteró que Julio fue detenido por carabineros, pero al rato fue liberado. A fines de septiembre de 1973 el deponente se entera que mientras Julio San Martín viajaba en un bus de recorrido Curacautín-Temuco, fue detenido por Carabineros, que según testigos fueron los funcionarios de apellido Mardones y Lacoste. A la altura del puente cautín bajan del bus a San Martín, una vez bajado, le disparan, lo que fue presenciado por pasajeros, a lo cual carabineros disparó al aire y el bus continuó su viaje. Testigo de esta situación fue un pasajero que iba en el bus de nombre Sigisfredo Cabrera. Continúa relatando señalando que el cadáver de Julio fue dejado en el lugar, desconociendo qué sucedió con él después. Consultado sobre algunas personas en particular señala lo siguiente: Luis Olivares, era ex director de la escuela industrial; Antonio Sanhueza, profesor de la escuela industrial; Hernán Soto, fallecido, profesor de la escuela industrial; Aldo Osorio, profesor, vive en el sector de río blanco. Consultado sobre algunos carabineros, señala que Pirce era sargento, Torres en la actualidad vive en el campo y Ortiz vive en Temuco.

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2017, a fs. 662 a fs. 664 (Tomo II) ratifica su declaración prestada ante la PDI, de fecha 28 de febrero de 2017. Señala que San Martín lo conocía como zapatero y era vendedor del diario "el siglo" en Curacautín, era una persona muy introvertida y presumía que era comunista, ya que vendía este diario que era de ese partido. Agrega que no tenía ningún tipo de relación con él, ni jamás vio relaciones con alguien o que estuviera en reuniones de índole político. Cree que fue asesinado por ser nombrado subdelegado de Lumaco. De la muerte de San Martín, sabe que fue detenido por Carabineros, pero lo sabe de oídas, ya que Sigfredo Cabrera, quien viajaba en el bus le contó lo sucedido. Según ese testigo, los carabineros detuvieron el bus y le sacaron las llaves al chofer y el único que andaba a rostro descubierto era el Teniente Adrián Sanhueza, de la 5° Comisaría de Curacautín, a quien tiene que haberlo enviado el Mayor de Curacautín llamado Gustavo Zúñiga Duarte. Todos los demás carabineros andaban con unos pasamontañas donde solo se le veían los ojos, siempre hacían los operativos así. Cuenta que a San Martín lo bajaron del bus y toda la gente se asomó por las ventanas y vio cómo lo mataron. Según le contó Sigfredo, le habrían disparado por la espalda, a unos 50 metros del bus, quedando su cadáver botado en ese lugar por tres días. Ante la pregunta del tribunal, el deponente indica que presume que Julio debió haber tenido un problema con alguien de Lumaco. Consultado sobre donde habrían ocurrido los hechos, señala que ocurrieron desde el puente cautín hacia Lautaro. También declara que la cónyuge de San Martín lloraba por las calles porque no la

dejaban buscar a su marido, ya que en esa época se temía mucho a dos personas: Alfonso Podlech, fiscal que daba las órdenes para buscar a las personas y las mataban y al capitán del Río. Agrega que la señora de San Martín nunca habló con él y consultado sobre la patrulla, responde que en ella iban como 20 personas, entre ellos, según le comentó Sigfredo Cabrera, Mardones y Lacoste, siendo Mardones el que ostentaba el mayor cargo. Por último, señala que en esa patrulla solo iban carabineros, no militares. Finalmente, cuenta sus experiencias vividas en cuanto a detenciones.

a.8. Elena Escalona Jara: En declaración judicial de fecha 9 de mayo de 1979, a fs. 789 a fs. 790 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante carabineros. Señala que efectivamente con fecha 2 de octubre acompañaba a su hermano José Escalona a la ciudad de Temuco, por un control médico. Recuerda que tomaron el bus que hace el recorrido desde Curacautín a Temuco, a las 8 de la mañana, sentándose al lado izquierdo, aproximadamente en los asientos 23 y 24 y al llegar a la altura del asentamiento Santa Julia, un pasajero exclamó “hay un muerto”, por lo cual el bus retrocedió un poco, pero nadie bajó, ya que iba bastante gente y alguien dijo que se trataba de Julio San Martín. Por lo que la gente decía el muerto estaba al lado derecho del camino e incluso la gente miraba en esa dirección, sin embargo ni ella ni su hermano miraron, por lo que no le consta nada de esto. Dice que no vio que el chofer se bajara. Por último, rectifica su declaración dada ante carabineros en el sentido que el muerto haya estado en una cuneta, aclara que dijo que estaba al lado derecho, como lo indicaba la gente que estaba en el bus en ese día. Apunta que al parecer Julio San Martín se fue a Lumaco en junio de 1973, pero no lo ha vuelto a ver más.

a.9. Inés Aedo Lara: Declaración extrajudicial de fecha 2 de agosto de 1978, a fs. 157 a fs. 159 (Tomo I) Expone ser la cónyuge de Julio San Martín, quien era militante del partido comunista. El 14 de septiembre de 1973, una patrulla se presentó en su casa en Capitán Pastene, siendo detenido y llevado a Traiguén. Finalmente fue liberado. Con el transcurso de los días se entera que su madre se encuentra enferma, por lo que solicita un salvoconducto para viajar a Curacautín a visitarla, lo que fue concedido. Finalmente se encontró con su madre y se disponía a regresar a Temuco en un bus Igi-llaima el 29 de septiembre de 1973, en medio del trayecto fue detenido por carabineros de Curacautín, entre los cuales se encontraba el **cabo Pirce, los carabineros Ortiz y Torres**. La deponente se entera de la detención de San Martín a través de Gladys San Martín, hermana de Julio. El 30 de septiembre por vecinos de la ciudad, se entera

que se había divisado el cadáver de Julio San Martín. La deponente, junto a Gladys San Martín, se avocaron en averiguar la verdad, por lo que efectuaron diversas consultas en Curacautín y Lautaro. En una de esas indagaciones la atiende el mayor Zúñiga, quien le expresa que San Martín estuvo detenido, pero que ya había sido liberado. En otra consulta efectuada, ese mayor la amenaza de que algo les podía pasar si continuaban con sus indagaciones.

Declaración extrajudicial de fecha 20 de septiembre de 1978, a fs. 160 (Tomo I) Señala que el día 22 de agosto de 1978 se presentó en su domicilio un funcionario de Investigaciones que no se identificó y procedió a interrogarla acerca de sus actividades para dar con el paradero de su cónyuge que se encontraba detenido y desaparecido desde el año 1973. Le preguntó acerca de dónde había sido detenido Julio San Martín y si ella había realizado algunas gestiones en Santiago para dar con su paradero, como asimismo le preguntó si su marido había sido político y el cargo que ocupaba en el Partido Comunista de Curacautín. También fue interrogada acerca de por qué no había hecho alguna diligencia antes, ya que había pasado tanto tiempo, a lo que respondió señalando que antes no había a quien recurrir, y que como había dicho el ministro del Interior que cualquier denuncia seria se debía recurrir al obispado de Temuco.

Declaración extrajudicial, de fecha 29 de agosto de 1990, a fs. 161 a fs. 162 (Tomo I): Señala que José San Martín el día mencionado viajaba en un bus hacia Lautaro, cuando fue interceptado por carabineros de Curacautín, entre los funcionarios que estaban eran **Pirce, Torres y Ortiz**. Con anterioridad también había sido detenido por Carabineros en Capitán Pastene, llevado a la cárcel de Traiguén y dejado libre sin cargos. El motivo de su viaje a Curacautín era visitar a su madre, quien supuestamente se encontraba enferma. De lo anterior se enteró por un telegrama aparentemente falso. Testigos de estos hechos que menciona son José Escalona (difunto) quien le contó a los comparecientes de la detención ya que iba también en ese bus, así como también su hija Gladys Escalona. Un Señor Carrillo le contó que vio a San Martín entrar a la Comisaría y el Señor Parada le contó que lo vio dentro pues estuvo detenido con él. Por último, el mayor Zúñiga les dijo que San Martín estuvo detenido, pero ya había sido liberado, y las amenazó con represalias si seguían efectuando averiguaciones. Añade que hay gente que vio su cadáver botado en el asentamiento Santa Julio en el camino entre Curacautín y Lautaro y que el mismo bus de la detención pasó frente al cadáver unos cinco días después de la y por lo tanto el chofer, el auxiliar de apellido Cía y los pasajeros debieron verlo. Además la señora Escalona viajaba en el bus y dijo haber visto el cadáver.

Declaración extrajudicial de fecha 4 de mayo de 1996, a fs. 170 (Tomo I): Indica que Julio San Martín estuvo detenido en Traiguén, siendo liberado a los días después, sin cargos ni maltratos de ningún tipo. Dice que ella lo visitaba y le llevaba comida. La deponente ratifica que su cónyuge viajó en un bus desde Curacautín hacia Temuco, y en el medio del trayecto, fue bajado y detenido por carabineros de Curacautín al llegar a Lautaro. De eso se enteró a través de un partiente y amigo además del auxiliar del bus de apellido Sías. Anexa que como fue llevado al retén de Curacautín, fue a preguntar por San Martín, junto con una hermana de este, donde le señalaron “ese comunista” había estado allí pero que lo habían liberado y que si seguían preguntando las iban a detener a ellas, razón por la cual dejaron de hacerlo , pero siguieron indagando entre testigos y amigos. Adosa que un trabajador de apellido Parada (fallecido) le contó que estuvo detenido con él en el retén de Curacautín y que sentía como lo golpeaban y torturaban en las noches durante varios días. Después liberaron a Parada pero no a su esposo. Expone que el Sr. Sías, en secreto le contó que vio el cadáver de San Martín frente al asentamiento Santa Julia, lo cual también fue visto un por tío de la deponente. Afirma que piensa que le aplicaron la ley de fuga. Por último, señala que buscó por todas partes y no pudo obtener certezas acerca del lugar de inhumación, sin embargo no tiene dudas que a su esposo lo mataron.

Declaración judicial, de fecha 4 de junio de 1979, a fs. 795 a 797 (Tomo III): Ratifica su denuncia por presunta desgracia, haciendo la salvedad que respecto al jeep que habría interceptado el bus donde viajaba Julio San Martín, no puede asegurar ni siquiera de oídas que haya sido efectuado por los funcionarios Ortiz, Pirce y Torres, porque en realidad a ellos los vio en la comisaría cuando fue a investigar sobre el paradero de su cónyuge. Por otra parte, hace presente que al ir a la Comisaría, carabineros cuyos nombres no recuerda, le contestaron con evasivas sobre el paradero de su marido, por lo cual solicitó hablar con el mayor de Carabineros de esa época, quien según averiguaciones que realizó en esa época era Gustavo Zúñiga Duart, sin embargo ella a este no lo conocía, de tal manera que no puede asegurar que haya sido él con quien tuvo la audiencia, pero al solicitarle permiso para ir al lugar donde había sido visto el cadáver de su marido, le respondió que no debía hacer esas averiguaciones y que él se iba a encargar. En cuanto a lo que se le interroga, puede decir que en el año 1973 junto a su esposo se fueron a vivir a Capitán Pastene, lugar en que con fecha 14 de septiembre su hogar fue allanado por militares y al día siguiente su marido fue detenido, también por militares, por ser subdelegado de gobierno. En esa fecha fue llevado a la cárcel de Traiguén, dejándolo en libertad el día 24 de septiembre

de ese año. Añade que, por razones de enfermedad de la madre de su marido, este viajó hasta Curacautín con fecha 28 de septiembre de 1973, previa autorización de Carabineros a través de salvoconducto. La deponente indica que su marido debía regresar a Temuco el día 29 de septiembre, para juntarse con ella, pero no llegó. Posteriormente, en los primeros días de octubre de 1973, encontrándose ella en la casa de sus padres en Temuco, llegó su cuñada Gladys San Martín, quien le contó que gente, entre los cuales recordaba un joven de apellido Sía, le había dicho que a su marido lo habían visto muerto en el camino a Lautaro, poco antes de llegar al asentamiento Santa Julia, por lo cual se fue a Curacautín con su cuñada, yendo a Carabineros, como ya lo ha expresado anteriormente. Apunta que José Escalona, quien actualmente está fallecido, le hizo saber que en la fecha que su marido iba de regreso a Temuco en un bus Igi Llaima, también lo hacía él, viendo que en la entrada del Puente Cautín, en Lautaro, la micro había sido interceptada por un jeep, no precisando si se trataba de carabineros o militares, quienes habían bajado a San Martín, pero debido a que la micro iba muy llena, no vio para dónde lo llevaron, todo lo cual ocurrió como a las 9 de la mañana. Adosa que con posterioridad, al ir a la comisaría, se encontró casualmente con una persona de apellido Carrillo, quien le dijo que su marido había llegado detenido a la Comisaría como a las 14 horas. También agrega que el funcionario que la atendió en la Comisaría y que se le ocurre era el Mayor Zúñiga, le dijo que su marido había sido detenido y puesto en libertad ese mismo día. Expresa que todos los hechos que ha narrado respecto de cuando su marido viajaba a Temuco, solamente los sabe de oídas y nada le consta personalmente, ni mucho menos lo vio muerto. Cree que su marido pudo haber tenido muchos enemigos ya que pertenecía al partido comunista, pero no puede señalar a nadie en especial como para pensar que lo hubiesen matado, porque hasta la fecha no hay ninguna seguridad que esto sea así. Hace presente que en el tribunal de Traiguén se lleva otra causa por presunta desgracia de su esposo, lo que le consta solo por haber comparecido a prestar declaración ante ese tribunal. Añade que durante el tiempo que su marido estuvo detenido en la cárcel de Traiguén ella lo fue a ver dándose cuenta que estaba bien, como asimismo él le expuso que no había recibido ningún mal trato y al salir en libertad no tuvo ningún problema hasta que fue a Curacautín, sin que hasta la fecha haya regresado a su hogar, ignorando su actual paradero. Finalmente ratifica su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Victoria, debiendo aclarar que la fecha de detención de su marido en Capitán Pastene, fue el 25 de septiembre de 1973 y dado en libertad sin ningún problema con fecha 24 del mismo mes y año.

Declaración judicial de fecha 28 de marzo de 1991, a fs. 817 (Tomo III): Ratifica íntegramente su declaración prestada ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y que es todo lo que puede decir al respecto, pues que no le consta personalmente acerca de la forma y el lugar, ni las circunstancias en que fue detenido su cónyuge, tampoco los funcionarios responsables de su detención, si eran carabineros o militares. Solo sabe que el hecho es que su marido fue detenido en septiembre de 1973 y nunca más supo de él, desapareció del todo, piensa que debe estar muerto y lo único que pide es que aparezca su cadáver para darle sepultura, no tiene resentimientos ni guarda represalias para quienes lo mataron. Asimismo ratifica todo lo declarado y obrado por ella en causa rol N° 11.558 del año 1979, en la cual se reabrió sumario según lo que se le hace saber. Finalmente, en cuanto a los nombres de los testigos y carabineros cuyos apellidos se dan a conocer, los desconoce, al igual que su paradero actual. Lo que puede decir es que el Señor Carrillo al parecer está fallecido.

Declaración extrajudicial de fecha 9 de marzo de 1991, a fs. 823 (Tomo III): Indica que su cónyuge fue militante del partido comunista, y que producido el golpe militar, fue detenido por primera vez en Capitán Pastene y trasladado a Traiguén, donde fue liberado días después. Unos cuatro días después recibió un telegrama donde se indicaba que su madre estaba gravemente enferma, por lo que solicitó un salvoconducto a Carabineros para viajar a Curacautín a visitarla. El 28 de septiembre de 1973 viaja a esta ciudad, donde constata que lo de la enfermedad de su madre no era efectivo, no obstante pernoctó en casa de ella y al día siguiente, es decir el 29 de septiembre, tomó un bus Igi Llaima a las 8 horas, con destino a Temuco, ya que la iba a pasar a buscar a casa de sus padres. Dicha micro tenía su recorrido por el camino de tierra que llega a la ciudad de Lautaro y justamente antes de pasar por el Puente Cautín a la llegada de esas ciudad, Carabineros de uniforme pararon la micro y su cónyuge fue bajado y detenido, lo subieron a un jeep y regresaron a la Comisaría de Curacautín, según antecedentes que en esa época le entregó don José Escalona Jara, quien viajaba en el mismo bus. Estos hechos fueron coincidentes con lo que le contó don Alejandro Sías, auxiliar del bus, a su cuñada Gladys San Martín. Esta misma cuñada Gladys fue a buscarla a Temuco y viajaron primero a Lautaro, en donde realizaron diversas consultas sin obtener resultados, por lo cual siguieron a Curacautín donde se entrevistaron con el mayor Zúñiga Duarte, quien les dijo que San Martín estuvo detenido, pero había sido liberado ese mismo día por andar con salvoconducto, sin embargo su cuñada le dijo que ella sabía que Julio había sido

muerto a un costado del camino que une Curacautín con Lautaro, frente al fundo Santa Julia, a unos diez kilómetros de Curacautín.

a.10. Gladys de las Mercedes Escalona Leiva: En declaración policial de fecha 16 de octubre de 2014, a fs. 338 (Tomo I) expone que para el 11 de septiembre de 1973, tenía 24 años y vivía en Curacautín con su Padre José Escalona Jara y su madre Cleminda Leiva Barra y era estudiante de Pedagogía en inglés en la universidad de Chile. Consultada acerca de los hechos investigados, señala que conoció a Julio San Martín ya que era su vecino, sin saber mucho más acerca de él. Hace presente que su padre José Escalona les comentó a la familia que a Julio San Martín lo bajaron del bus carabineros por un control rutinario. Posteriormente a esto señaló que algunas personas le comentaron que Julio se encontraba muerto en el puente Cautín con un letrero que decía “quien recoja este cuerpo será de inmediato fusilado”.

En declaración judicial, de fecha 17 de marzo de 2015, a fs. 358 (Tomo II), ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola de fs. 338. Sin embargo, rectifica en aquella parte de su declaración en la que menciona que su padre les comentó que carabineros hizo descender del bus a San Martín. Su padre solo mencionó que a San Martín lo bajaron del bus, pero no señaló a los responsables. Ella no iba en compañía de su padre cuando eso ocurrió, sino que iba su hermana, actualmente fallecida. Desconoce si su padre comentó algo de lo sucedido a otras personas.

En declaración policial de fecha 9 de abril de 1979, fs. 793 (Tomo III), señala que a fines de septiembre de 1973, ella viajaba como pasajera en un bus de recorrido de Curacautín-Lautaro-Temuco y que al llegar a Lautaro, subió una patrulla uniformada, sin especificar si eran carabineros o militares, quienes detuvieron a San Martín, el que también iba a bordo del bus. Ignora mayores antecedentes.

En declaración judicial de fecha 14 de junio de 1979, a fs. 799 a 800 (Tomo III) Ratifica su declaración policial precedente y expone que efectivamente viajaba en un bus Igi-Llaima a las 8 de la mañana, desde Curacautín hacia Temuco. Dice que en esa época la policía controlaba los carnet y, no recuerda si carabineros o militares, pararon la micro. En uno de los asientos delanteros estaba San Martín, a quienes estos funcionarios le pidieron su documentación, y lo hicieron bajar, pero no se percató a donde lo llevaron. Después de eso el bus siguió con su recorrido y nunca más supo de San Martín. Finaliza su declaración añadiendo que no le consta que San Martín haya muerto, pero que oyó decir a su

padre José Escalona que a San Martín lo habrían visto muerto en el camino hacia Lautaro, pero que eso no le consta.

En declaración judicial de 11 de marzo de 1991, a fs. 813 a fs. 814 (Tomo III), Ratifica su declaración prestada con fecha 14 de junio de 1979. Relata que no recuerda con exactitud los pormenores de los hechos, pero sí recuerda el 29 de septiembre de 1973, ya que era el día posterior a su cumpleaños. Dicho día ella viajaba a Temuco por razones de estudio y que al llegar a Lautaro, efectivos de las fuerzas armadas, sin saber si eran carabineros o militares, revisaron las documentaciones de los pasajeros del bus, solo haciendo bajar a San Martín, a quien se lo llevaron detenido, a nadie más. Tampoco supo a donde se lo llevaron y no le llamó la atención el hecho pues en esa época era normal que se detuvieran personas. Es todo lo que le consta. Sin embargo, señala que su padre José Escalona, le comentó que en viaje posterior que él hizo, escuchó comentarios en el bus respecto que se habría encontrado el cadáver de San Martín a orillas del camino. Estos comentarios los habrían realizado los mismos pasajeros de ese viaje, pero no le dijo haber visto a San Martín. Su padre viajaba con su tía Elena Escalona.

a.11. Juana Aedo Lara: En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, a fs. 783 a fs. 784 (Tomo III) atestigua ser cuñada de Julio San Martín, y que a fines de septiembre 1973, él fue a Curacautín con un salvoconducto desde Temuco para ver a su madre quien se encontraba gravemente enferma, ocasión en que previamente pasó a casa de la deponente, donde le comentó que había estado detenido en Traiguén, pero que había sido bien tratado y que tenía que volver a Capitán Pastene ya que allá debía firmar, razón por la cual alojaría una noche en casa de su madre y al día siguiente viajaría a Temuco, en un bus a las 8 de la mañana, para juntarse con su esposa. Cuenta que previo a que San Martín tomara la micro, fue a despedirse a su casa y le consta que tomó esa micro ya que José Escalona, quien también iba en ese bus dijo que lo vio y que en medio del trayecto este bus fue detenido por un jeep carabineros, quienes detuvieron a San Martín y se lo llevaron, pero no dijo a dónde ni el motivo de la detención. Días después supo que Julio no había llegado a su casa, por lo que su cónyuge consultó en la comisaría de Curacautín sobre su paradero, dándole como respuesta que efectivamente fue detenido, pero que ya había sido liberado. Comenta que también por oídas se enteró que en el trayecto a Temuco, más o menos frente al fundo San Nicolás, habían encontrado a Julio muerto, pero nada de eso le consta. Solo que desde ese viaje no lo volvieron a ver más. Tampoco

sabe qué carabineros lo habrían detenido y todas las averiguaciones que se hicieron por parte de la familia dieron resultados negativos.

a.12. María Glady San Martín: En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 1979, a fs. 769 a fs. 771 (Tomo III) expone que es hermana de Julio San Martín, quien cuatro meses antes de septiembre de 1973 se fue a vivir con su cónyuge a Capitán Pastene, lapso en el que él no les escribió, pero como ella tenía conocimiento que su hermano era comunista, fue a saber de él a Temuco, específicamente a la casa de los padres de la esposa de este. Relata que la esposa de su hermano, Inés Aedo Lara, le contó que Julio había sido detenido y llevado a la cárcel en Traiguén, por lo cual lo fue a visitar, viéndolo que estaba bien y este le comentó que recibía buenos tratos. Relata que, no recuerda fecha, pero en esa ocasión su hermano le expresó que ese día o al día siguiente lo iban a llamar para declarar y que posiblemente iba a salir en libertad. Posteriormente, tal como él lo había dicho, salió en libertad lo cual supieron por un telegrama que él mismo envió. Cuenta que al parecer, su hermano estuvo 3 días en Capitán Pastene después que salió en libertad. Luego de eso, viajó a Temuco y luego a Curacautín, llegando un día en la tarde en la micro Igi Llaima, pernoctando donde su madre Florentina San Martín. Sin embargo, esa tarde había ido donde su cuñada Juana Aedo, casa donde la deponente lo fue a ver con su marido Renato Verdugo y ahí su hermano le comentó que nada le había pasado, que estaba tranquilo y que iba a trabajar en el taller de zapatería en Capitán Pastene, pues esa era su profesión. Añade que al día siguiente, su hermano tomó la micro que va a Temuco a las ocho horas. Lo anterior lo sabe por un hijo suyo llamado Edgardo Verfugo San Martín, quien viajó ese mismo día en esa micro. La deponente indica que luego supo de oídas que Julio había sido detenido camino a Lautaro por carabineros, sin saber sus nombres y sin poder asegurar esto. También se rumoreó que al día siguiente del viaje de San Martín, personas que iban en la micro procedente de Temuco lo habrían visto muerto en la orilla del camino, lo cual también lo sabe por rumores y a ella no le consta, pero en vista de estos rumores viajó a Temuco a avisarle a la cónyuge de su hermano y juntas se devolvieron a Curacautín a consultar a la comisaría, ahí las atendió el teniente Sanhueza, quien les dijo que San Martín había estado media hora detenido y había sido liberado. También aclara que en ningún momento hablaron con el mayor Zúñiga, y por ende, nunca las había amenazado. Suma que después de esto, nunca más supo del paradero de su hermano, pero no puede asegurar qué le pasó, puesto que hay gente de esa época que se dio por desaparecida y

después aparecieron por otras partes, además también se sabe que estas personas andan con documentos falsos. Añade que su madre Florentina San Martín tiene una enfermedad al corazón y no sabe nada sobre la desaparición de su hijo, por lo que considera que sería una crueldad entrevistarla. Por último, señala que a su hermano Luis San Martín, lo habría visitado un joven ayudante de los buses Igi-llaima, de apellido Cid, quien le dijo que Julio había sido visto muerto, más o menos a la altura del fundo del señor Pertucé, aunque nada de eso le consta.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de abril de 1979, a fs. 792 (Tomo III) exploya ser hermana de Julio San Martín, que para la época del pronunciamiento militar, él había sido detenido en Traiguén, pero que para el día 25 de septiembre de 1973 había sido puesto en libertad, viajando posteriormente a casa de su esposa Gloria Inés Aedo Lara en Temuco y luego a Curacautín. Cuenta que en la noche del 28 de septiembre fue visitada en su domicilio por su hermano Julio y a las 8:00 horas del día 19 de septiembre, se embarcó en un bus Igi Llaima con destino a Temuco, siendo esta la última vez que lo vio. El 4 de octubre de 1973, se presenta en su casa un joven de apellido Sías, quien trabajaba en el microbús, el que le informa que aproximadamente a las 9:00 hrs., en la ciudad de Lautaro, había subido al bus personal uniformado, al parecer Carabineros de Curacautín, quienes habían tomado detenido a Julio San Martín, y que días después, cuando viajaba nuevamente en el bus con destino a Temuco, como a unos 20 minutos de Curacautín, había visto el cadáver de Julio a una orilla del camino. Con esos antecedentes ella y su cuñada se presentaron en la comisaría de Curacautín, consultando sobre Julio, sin conseguir respuestas concretas. Termina diciendo que un comerciante de Curacautín de apellido Salazar, habría visto a su hermano Julio detenido en la comisaría de esa ciudad.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de marzo de 1991, a fs. 824 (Tomo III) explícita que es hermana de Julio San Martín, quien desapareció en 1973, después de ocurrido el golpe, por ser militar del partido comunista y que a la fecha de la declaración no se ha confirmado nada. Recuerda que para el 28 de septiembre de 1973, Julio llegó a Curacautín con el fin de visitar a su madre, quien se encontraba enferma, pernoctando ahí y al día siguiente se disponía a regresar a Temuco en un bus Igi-llaima que salía a las 8 de la mañana y que hacía su recorrido por Lautaro, pero no recuerda nombre de alguna persona que se lo haya dicho. Dice que inmediatamente regresó a Temuco para informarle esto a su cuñada, Gloria Inés Aedo Lara, y juntas regresaron a Curacautín donde fueron a la Comisaría y conversaron con el comisario de apellido Zúñiga y un Teniente de

apellido Herrera, quienes las amenazaron, por lo cual se asustaron y no volvieron a preguntar. Hace presente que cuando viajó a Temuco a encontrarse con su cuñada, el auxiliar del bus Alejandro Sías, al pasar frente al asentamiento Santa Julio, le hizo un gesto con la mano para indicarle que en ese lugar había estado tirado el cuerpo de su hermano.

En declaración judicial de fecha 26 de agosto de 2019, a fs. 1219 (Tomo IV) ratifica sus declaraciones que rolan a fs. 769 y sig., de fs. 774, de fs. 789, fs. 824, fs. 827. Agrega que cuando fue con su cuñada a consultar por Julio a la comisaría de Curacautín, las atendió un carabinero que no era oficial, si no que era de un grado más bajo, el que les dijo que a Julio lo tuvieron detenido por media hora y había sido liberado. Además, ambas fueron amenazadas para que dejaran de hacer consultas respecto a San Martín. En cuanto al parte policial de fs. 774, y la declaración de fs. 789, aclara que su hermano fue detenido por carabineros de Curacautín, no por personal del ejército, lo cual siempre se supo en su familia y por eso fueron a consultar por él a la Comisaría. Ella por rumores que circularon, se enteró que los que tuvieron responsabilidad en la desaparición de su hermano eran los carabineros de Curacautín, entre ellos Toloza (fallecido), Ortiz y un funcionario apodado “el chico” Fernández, que conducía vehículos.

a.13. Luis San Martín: En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, rolante a fojas 780 a 781 (Tomo III), afirma ser hermano de Julio San Martín. Sin precisar una fecha, señala que Julio lo fue a ver, ocasión en que le preguntó cómo lo habían tratado, pues sabía que había estado detenido en la cárcel de Traiguén por motivos políticos, ante lo cual le respondió que no había tenido ningún problema y que las autoridades lo habían tratado bien, pero no manifestó nada respecto a sus proyectos futuros, solo le dijo que por esa noche iba a pernoctar en casa de su madre y al día siguiente viajaría a Temuco por la mañana, para reunirse con su esposa. Apunta que a él no le consta que su hermano haya tomado la micro para hacer su viaje, eso solo lo supo por su madre. A los tres días después de eso, el ayudante del bus Igi-Ilaima, de apellido Cías, lo visitó en su domicilio para avisarle que en el recorrido desde Temuco a Curacautín, vio muerto a su hermano Julio, sin explicarle como le constaba eso, si la micro había parado en el lugar o a qué altura del camino estaba. Después de recibir esa información, su cónyuge Nelly San Martín Quintana y Gladys San Martín, efectuaron averiguaciones en la comisaría de Lautaro, sin resultados positivos y al ir hacia allá, pudieron darse cuenta que en el camino no se encontraba el cuerpo de su hermano, según lo que Cía había manifestado, a pesar que esto se hizo al día

siguiente que este fuera a avisar a su domicilio. Concluye su declaración señalando que la cónyuge de Julio San Martín, también efectuó averiguaciones, sin resultados positivos.

a.14. Luis Enrique Fernández Ibáñez: En declaración judicial de fecha 28 de marzo de 1979, a fs. 778 a fs. 779 ratifica su declaración ante Carabineros y expone que en 1973 era conductor de buses en Igi-Illaima, por lo que le consta que después del 11 de septiembre de 1973, subió al bus como pasajero Julio San Martín en el recorrido de las 8 de la mañana. Como a las 9.30 horas, al llegar a Lautaro, sobre el puente cautín, una patrulla de uniformados, sin saber si era de carabineros o militares, detienen el bus para realizar una revisión de documentos a los pasajeros, procediendo a detener a San Martín, quien iba sentado en el asiento N° 4, es decir, en la primera corrida, ocasión en que no detuvieron a nadie más. Asevera que no supo la razón ni dónde se lo llevaron, pero según la gente que pudo ver, se lo llevaron en un vehículo. Cuenta que él conocía al Sargento Pirce y al Cabo Ortiz y Torres, oer debido a que en esa fecha la micro iba muy llena, no pudo apreciar quiénes eran los aprehensores. Afirma que esto no llamó la atención ya que en esa época era común las detenciones. Cuenta que después de eso él salió con permiso y no recuerda quién lo relevó. Posterior a su detención no volvió a ver más a San Martín, solo escuchó comentarios acerca de que lo habrían encontrado muerto cerca del asentamiento Santa Julia, lo cual a él no le consta. Por último, añade que para el año 1973 su acompañante era Alejandro Cías Cares.

a.15. Hernán Alejandro Sías Cares: En Declaración ante la CNRR de fecha 2 de mayo de 1996 a fs. 166 (Tomo I) Expresa que conocía muy bien a don Julio San Martín, conocido zapatero del lugar. El día de los hechos viajaba el Sr. San Martín, en bus de recorrido desde Curacautín y en dirección a Lautaro. Carabineros conocidos de Curacautín, que viajaban en un jeep institucional, adelantaron el bus y lo interceptaron en la población Guacolda, a la entrada de Lautaro. Sólo preguntaron por el Sr. San Martín, lo bajaron y luego de subirlo al jeep, se devolvieron en dirección a Curacautín. El bus siguió en dirección a Temuco, sin que nadie se atreviese a comentar nada, por lo complejo de esa época. Unos días después, cuando iban en dirección a Temuco, encontraron el cadáver en Santa Julia, a orilla de camino seco, botado en el mismo camino. Lo reconocieron porque pararon a verlo. El deponente en su calidad de auxiliar y **el Sr. Escalona**, pasajero del bus que hoy está fallecido, dieron cuenta de ese

suceso a Carabineros de Lautaro, pero según comentan, cuando llegaron el cadáver ya no estaba. Santa Julia es un asentamiento, no muy lejos de Curacautín y se dice que lo sepultaron en ese lugar, por razones humanitarias, lo que no le consta al deponente. Expresa que él le dijo esto a la viuda para que no lo buscara más y le pidió que no diera su nombre pues tenía miedo y ahora tampoco desea verse involucrado.

En declaración policial, a fs. 341 a fs. 342 (Tomo I), de fecha 19 de octubre de 2014 El testigo indica que efectivamente conoció a Julio San Martín, ya que eran vecinos y en su casa reparaba calzados, además pertenecía al Partido Socialista, siendo una persona conocida y tranquila de Curacautín, pero para el 11 de septiembre de 1973, su vecino mantenía una detención en su ciudad la cual lo obligaba a no salir del pueblo. Recuerda que a fines de septiembre de ese año, viajaba en bus como auxiliar de la empresa Igi-Llaima desde Curacautín, con paso por Lautaro con destino a Temuco, a ese bus se sube San Martín y se sienta en el asiento N° 8. Al llegar a Lautaro el bus es interceptado por un jeep de Carabineros de Curacautín, al cual se suben dos funcionarios quienes recorren la máquina y solicitan a San Martín bajar del bus y lo suben al jeep con dirección a Curacautín, continuando el bus hacia su destino. Al día siguiente, realizando el mismo trayecto, se percatan que frente al asentamiento Santa Julia, al costado derecho en una cuneta, había un cuerpo tirado y al bajar comprobaron que se trataba de Julio San Martín, el cual se encontraba boca abajo, su rostro estaba azul, en su trasero se encontraba cortado su pantalón y su piel estaba marcada por heridas de cigarrillos apagados. En el lugar también bajó don José Escalona con su hija, a quien recuerda como familia de la víctima. De la misma forma, el cuerpo fue observado por el conductor de la máquina, Luis Fernández (fallecido) y otras personas que no recuerda. Luego de haber observado lo sucedido, el bus continuó hasta Temuco para luego regresar a Curacautín, donde decide contarle a la cónyuge de la víctima lo sucedido, por lo cual se dirige a su casa, donde encuentra al suegro y le entrega la información. Ante lo que se le pregunta, responde que no recuerda haber visto algún funcionario que fuera en el bus, pero sí recuerda que siempre subía para dirigirse a Lautaro, un Carabinero de apellido Salazar. Hace presente que no recuerda los nombres de los aprehensores pero sí sabe que eran de Curacautín. Finalmente indica que si le exhiben las fotografías de los Carabineros podría reconocerlos y agrega que escuchó en una oportunidad que el cuerpo de Julio fue enterrado al costado de donde se encontraba, lo cual no le consta porque no lo vio.

En declaración judicial de fecha 16 de diciembre de 2014, a fs. 348 bis a fs. 349 (Tomo I) ratifica su declaración que rola fs. 56 y la prestada ante la PDI, que rola fs. 341 y siguientes. Rectifica su declaración en aquella parte donde mencional al funcionario de Carabineros de apellido Salazar, quien viajaba regularmente a Lautaro. Dice recordarlo muy bien, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín y tenía su familia en Lautaro. Recuerda perfectamente que este carabinero iba en el bus el día que encontraron el cadáver de Julio San Martín, sin embargo este no se bajó a mirar lo acontecido. Añade el deponente que este Carabinero tenía como característica física el ser medianamente calvo, por lo que lo apodaban “cabeza de rodilla”. En cuanto a la detención de San Martín, dice que eso fue aprehendido por 4 funcionarios, a quienes los ubicaba bien ya que vivía en esa época en la ciudad y además se movilizaban en la única empresa que en ese tiempo hacía el recorrido hacia Lautaro. Ese día, dos de los funcionarios se subieron al bus e indicaron que sólo San Martín, quien iba en el asiento N° 8, debía bajarse, quien sin mediar resistencia alguna bajó y se fue con ellos. Al otro día pudieron ver el cadáver a orillas del camino, como ya lo relató anteriormente. Consultado acerca de las características físicas de los Carabineros que practicaron la detención, el deponente señala que eran macizos y más altos que él, todos vestidos con el uniforme institucional. Asevera que no podría dar apellidos o apodos de los funcionarios aprehensores ya que no los recuerda, pero sí puede asegurar que eran de Curacautín, porque los ubicaba de esa comuna. Continúa su declaración indicando que el jeep que utilizaban era institucional, de color verde y que cuando se bajaron a mirar el cuerpo de San Martín, pudo ver su trasero estaba con quemaduras, como de cigarrros. Además no tenía uñas y su cara estaba muy azul, media morada. No vi que tuviera impactos de bala en su cuerpo. El Tribunal le consulta si recuerda a otros pasajeros que se hayan bajado a ver el cadáver de San Martín, ante lo cual el deponente responde que sólo recuerda al chofer, don Luis Fernández, a José Escalona y su hija.

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, a fs. 785 a fs. 786 (Tomo III) expone que en el año 1973, después del pronunciamiento militar, en circunstancias que en el deponente era ayudante de la micro que viajaba desde Curacautín a Temuco, se subió como pasajero Julio San Martín, quien se sentó al parecer en el asiento N° 4. Este bus salió a las 8 de la mañana y al llegar al puente ubicado entre Lautaro y llamado Cautín, frente al Regimiento Lautaro, fue parado por uniformados, desconociendo si eran Carabineros o militares, y si eran de Lautaro o Curacautín, pues andaba más o menos al medio del bs y este estaba lleno, por lo que solo pudo darse cuenta que bajaron a San Martín y se lo llevaron

sin saber los motivos ni qué dirección tomaron. Acota que este hecho no le llamó la atención ya que en esa época era habitual el que se registrara identificación y que algunas veces se llevaran detenidas a algunas personas. Ese mismo día, ya de regreso desde Temuco a Curacautín, se dirigió a la casa de Luis San Martín para comentarle que Julio San Martín había sido detenido, sin haberle manifestado haber visto a Julio San Martín muerto, ya que una vez que fue detenido, no lo volvió a ver más.

En diligencia de careo entre Luis San Martín y Hernán Alejandro Cía Cares, de fecha 5 de abril de 1979 a fs. 787 (Tomo III), Cía ratifica su declaración prestada ante el tribunal, señalando que efectivamente visitó a Luis San Martín para informar acerca de la detención de su hermano Julio, el mismo día en que se produjo la detención, sin expresar haber visto muerto a Julio en ninguna parte. San Martín ratifica su declaración, en cuanto en haberse reunido con Cía para ser informado de lo descrito anteriormente, pero en cuanto al comentario de haber visto muerto a Julio San Martín, eso se lo comentó Escalona y lo escuchó de otras y en realidad debido al tiempo transcurrido no puede recordarlo con exactitud.

a.16. Orlando Salazar Astudillo: En declaración judicial de fecha 4 de abril de 1979, a fs. 792 a fs. 793 (Tomo III) Colige que ocurrido el pronunciamiento militar, fue detenido por carabineros de Curacautín y cuando se encontraba en la Comisaría, vio que también estaba detenido Julio San Martín.

En declaración judicial de fecha 14 de junio de 1979, a fs. 798 a fs. 799 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante la PDI, y dice que efectivamente fue detenido por carabineros de Curacautín después del pronunciamiento militar, por tener gran cantidad de radios en su negocio. Cuenta que a la comisaría llegó a las 10 horas y lo dejaron en libertad el mismo día como a las 22:30 horas. Recuerda que al llegar a la comisaría, vio que funcionarios llevaban detenido a Julio San Martín en una camioneta del banco Estado, a quien pusieron en un calabozo y no lo volvió a ver más.

En declaración judicial de fecha 2 de mayo de 1991, a fs. 828 a fs. 830 (Tomo III) Basa que efectivamente en el año 1973, fue detenido por carabineros de Curacautín como a las 10 de la mañana ya que supuestamente estaba ocultando mercadería al público, lo que en ese tiempo se llamaba "restricción de venta". Ese día de su detención, estaba en la comisaría cuando en la mañana vio llegar a un grupo de carabineros y traían detenido a Julio San Martín, persona a la cual él conocía bien. Cuenta que entre los comentarios que hizo Carabineros, escuchó que a San Martín lo habían detenido en el bus que iba

a Temuco por Lautaro. El deponente fue dejado en libertad en la tarde o noche del mismo día, mientras que Julio siguió detenido en la unidad. En cuanto al personal que estaba, dice que solo había Carabineros, no militares, pero no recuerda nombres de los que llevaban a San Martín detenido. Dice que tiene gravada esa situación ya que a este le hicieron sacarse los cordones en la guardia y luego lo metieron al primer calabozo que había saliendo de un pasillo hacia el interior de la comisaría. Asevera el deponente que él pudo ver todo ya que estaba detenido al interior de la comisaría y no en un calabozo. Ante lo que el tribunal le pregunta, responde que ese día que estuvo detenido, estaban en la comisaría el Mayor Gustavo Zúñiga, el Teniente Sanhueza, el primero Pillancares, el Sargento Salazar. En el momento en que llegó detenido San Martín, vio que en el grupo que se formó con los que llegaban estaba el cabo de apellido Ortiz y otra gente civil conocida, pero que por el tiempo transcurrido no recuerda nombres. También le es imposible precisar el personal que llegó con San Martín detenido ese día. Continúa relatando que al día siguiente de su detención, llegó a su domicilio el hermano de Julio, Luis San Martín, quien desesperadamente le pidió que lo acompañara a buscar a su hermano, el que estaba tirado muerto a orillas del camino en las inmediaciones del asentamiento Santa Julia, camino a Lautaro a lo que él se negó por miedo a verse envuelto en mayores problemas de los que tuvo anteriormente, y le aconsejó a Luis no ir a ese lugar, quien finalmente desistió de ir. Después se supo que el cadáver había desaparecido. También se comentó que adeptos a su filiación política, habrían recogido su cadáver y enterrado en el mismo lugar, algo que nunca fue confirmado ni desmentido.

a.17. Galvarino Gatica Molina: En declaración ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 30 de agosto de 1990 rolante a fojas 163 a 164 (Tomo I) Asevera que los hechos que relata los conoció a través de los dichos de un carabinero que se desempeñaba en el Retén de Curacautín, de apellido Méndez. Los hechos los relató el año 1974, fecha en que se desempeñaba en ese retén y habrían sucedido en el año 1973. Julio San Martín era militante del partido comunista y se desempeñaba como subdelegado en la comuna de Lumaco en la fecha del pronunciamiento. Fue detenido en ese lugar y enviado a la cárcel de Traiguén, donde estuvo hasta el mes de octubre. Regresó a su ciudad, Curacautín, donde había sido secretario comunal del Partido Comunista, todo esto antes de ser nombrado subdelegado. Cuando volvió a Curacautín llegaron Carabineros a buscarlo a su domicilio y lo llevaron a un puente que sale hacia la comuna de Lautaro y allí lo obligaron a que se tirara bajo el puente. Pese a las súplicas de él, fue obligado y definitivamente lanzado. Una

vez en el agua lo balearon. Los Carabineros que participaron eran un grupo de ocho, entre los cuales estaba el Teniente Adrián Sanhueza; un carabinero Ortiz; Del Valle; quienes servían en el retén de Curacautín. Al día siguiente apareció el cadáver en el camino por lo que se presumió que no murió, sino que se arrastró hasta el camino y habría muerto. Pasó la micro Curacautín- Lautaro y mucha gente pudo ver el cadáver y un carabinero que iba en el bus dijo que el cuerpo pertenecía a las Fuerzas Armadas. Lo fueron a buscar y lo echaron en una parte profunda del río, lo habrían amarrado y puesto peso para que se hundiera. Añade que este relato lo volvió a repetir el Carabinero, que él conocía a la víctima y el carabinero lo sabía. Dice que fue gobernador en Curacautín, que la primera vez que hizo el relato estaba fuera de servicio y que él no participó en hecho, sus compañeros le habrían contado y pudo notar que la segunda vez no se contradijo en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 21 de marzo de 2014, a fs. 274 a fs. 275 (Tomo I) Comunica que para el año 1973 se desempeñaba como gobernador del departamento de Curacautín y militaba en el Partido Socialista. En cuanto a Julio San Martín, lo conoció ya que él militó en el Partido Comunista y tenía el cargo de secretario del Partido de Curacautín. Cuenta que una vez ocurrido el golpe de estado, patrullas de militares llegaron a la comuna y fue notificado por un oficial que debía cumplir arresto domiciliario, dejando de ocupar el cargo de gobernador. No obstante, días posteriores pudo viajar a la ciudad de Angol, ya que tenía residencia en dicho lugar. Expresa que en octubre de 1973, fue citado al Juzgado de Letras de Curacautín, ya que había entregado una vivienda abandonada a una familia, por lo que viajó desde Angol hasta Curacautín, sin recordar fecha exacta, en un bus interurbano. Al regresar el mismo día a Angol, ya en el bus, se le acerca un Carabinero de Curacautín de apellido Méndez, oriundo de Cañete, quien luego de una conversación, le confiesa que San Martín había sido asesinado por Carabineros. Luego, este mismo carabinero le señala que un grupo de alrededor de 8 funcionarios, entre ellos Pirce, Bascur, Sanhueza, Del Valle, Ortiz y Salazar lo habían tomado detenido y llevado hasta un puente ubicado a la salida de Curacautín, que San Martín suplicaba que no lo lanzaran ya que tenía hijos y no quería morir, siendo lanzado en ese instante y al caer a las aguas, los Carabineros comenzaron a dispararle, para luego en ese mismo lugar comenzar a ingerir alcohol con la finalidad de olvidar el momento antes descrito. También le relató que al día siguiente el cadáver de San Martín fue encontrado a las orillas del camino que une a Lautaro con Curacautín, por un bus el cual se detuvo y los pasajeros que venían en su interior, descendieron y se percataron

que se trataba de San Martín, encontrándose entre ellos un Carabinero quien manifestó que se trataba de un muerto de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, Carabineros llegó al lugar y procedieron amarrar las extremidades del cuerpo y a colocarle peso con piedras, para luego ser lanzado al río y así se fuera a aguas profundas. El deponente indica que el Carabinero Méndez, le volvió a reiterar esta versión en una 2° oportunidad que se lo encontró en la ciudad de Curacautín en el año 1990, donde nuevamente tuvo que declarar en el Tribunal pero como testigo sobre lo ocurrido con Julio San Martín, haciendo presente que Méndez supo todo esto por intermedio de un Carabinero que participó en el hecho y que no recuerda en ese momento el nombre. Finalmente agrega que nunca más se volvió a encontrar con el Carabinero Méndez y que ignora qué pasó con la investigación que llevaba el tribunal de Curacautín con respecto a lo sucedido con Julio San Martín, enterándose por comentarios que los familiares de la víctima no habrían querido continuar con el proceso.

a.18. Enrique Alfonso Yañez Illanes: En declaración judicial de fecha 13 de marzo de 1991, a fs. 825 (Tomo III). Comunica haber sido muy amigo de Julio San Martín. Cuenta que en el año 1973, tenía una relación sentimental con su actual cónyuge, quien vivía en el asentamiento Santa Julia, por ende, él viajaba constantemente a visitarla y recuerda que unos días después del golpe militar, sin recordar la fecha exacta, pero más o menos a las 11 de la mañana, a unos doscientos metros del asentamiento, al costado Norte del camino, se encontraba el cuerpo sin vida de su amigo San Martín, el que estaba tapado con papel de diario. Por temor que inundaba en esa época, solo lo miró rápidamente y reconoció su reloj de pulsera en su mano izquierda. Al día siguiente nuevamente pasó por el lugar más o menos a la misma hora, de regreso a su domicilio pero ya no se encontraba el cuerpo en ese lugar. Ignora quién o quienes retiraron el cadáver y no recuerda mayores detalles del lugar del hecho, además el cuerpo se encontraba tendido de espaldas con la cabeza hacia el lado poniente y como estaba tapado no pudo ver su vestimenta. Por antecedentes que obtuvo después, incluso de algunos carabineros en retiro, señala que el autor del asesinato de San Martín fue el teniente Sanhueza, a quien conocía con el apodo del “guate perra” y que trabajaba en la comisaría de Curacautín. Asevera que este hecho lo saben varias personas en Curacautín y el asentamiento Santa Julia, pero por temor no quieren declarar. También supo que el Teniente Sanhueza, posiblemente a causa de ser el autor del hecho se trastornó y se quitó la vida, pegándose un tiro.

En declaración judicial, de fecha 3 de mayo de 1991, a fs. 832 a fs. 833 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante la PDI. Apunta que en esa época tenía una relación sentimental con su actual cónyuge, quien vivía en el asentamiento Santa Julia, por lo que viajaba constantemente a visitarla. En uno de esos viajes, divisó el cadáver de su amigo Julio San Martín, a orillas del camino, asegurando que era él aunque no le vio el rostro, pero lo reconoció por su vestimenta y su reloj de pulsera en su mano izquierda. Por la situación reinante en esa época y el temor que existía no dijo nada de lo que vio. De regreso a Curacautín, en el lugar donde yacía el cadáver, vio a unos militares haciendo guardia, cree que eran como 4 y sobre el cadáver había un letrero que decía “propiedad del ejército”. Explaya que anteriormente ya había expresado lo mismo que ahora, pero no había querido dar nombres, sin embargo ahora dice que en ese tiempo había dos funcionarios que acompañaban al teniente Sanhueza cuando detuvieron a San Martín y ellos iban en el jeep que alcanzó el bus en que iba San Martín. Uno se apellida Toloza y el otro funcionario era Salazar. Los nombres de estos funcionarios los sabe porque él estuvo haciendo sus propias averiguaciones. También atestigua que la gente en el asentamiento Santa Julia comentaba que el cadáver luego de ser entregado por Sanhueza al ejército, estuvo como tres o cuatro días allí antes de ser enterrado adentro del cerco y del camino, en el predio de René Pertuzé. Este entierro lo habría hecho don Alberto Sepúlveda.

En declaración judicial de fecha 28 de junio de 2018, a fs. 881 a fs. 883 (Tomo III) ratifica su declaración que rola a fs. 832 y sig. Señala que efectivamente conoció a Julio San Martín, él era zapatero y se ubicada en calle Manuel Rodríguez, cerca de la comisaría de Curacautín. Para la época, su actual cónyuge vivía en el asentamiento Santa Julia. El deponente recuerda haber visto el cadáver de San Martín en el suelo entre el camino y el cerco, tapado por cartones, no con diarios y solo lo reconoció por la punta de los zapatos. No se quiso acercar al cadáver por temor. Expresa que en ese momento iba a pie por el camino, ya que en esa época la movilización era muy mala, por lo cual ese trayecto a pie no solo lo hacía él, sino que toda la gente del asentamiento. Recuerda que cuando se devolvía por el mismo camino, él divisó a militares custodiando el cadáver. Dice estar seguro que eran militares y que el cuerpo aún se encontraba ahí, pero que estos militares no lo pararon ni le hicieron nada. Asevera que siempre se rumoreó que a San Martín le aplicaron la ley de fuga y que el responsable era el Teniente Sanhueza de Carabineros de Curacautín, junto a los carabineros Toloza y Salazar. También se comentó que el cuerpo había sido

enterrado en el asentamiento, lo cual no le consta. Incluso anduvieron en el lugar con un detective, pero no pudieron ver nada. En cuanto a Alberto Sepúlveda y Pedro Muñoz, ambos están fallecidos. A continuación el deponente hace presente que en esa época había una persona de nombre Rolando Abarzúa, quien era empresario maderero y muy amigo del Teniente Adrián Sanhueza y supo por comentarios que esta persona era quien sindicaba a otros que eran contrarios al régimen y Adrián Sanhueza los mandaba a detener. Respecto a los relatos de Ramón Olivos Bascur, Santiago Medina Lobos y Galvarino Molina Gatica, en cuanto a la muerte de San Martín, declara que es primera vez que escucha eso. Él solo vio el cadáver y nada más. Finalmente indica que la distancia entre el puente Cautín y el lugar donde vio el cuerpo de Julio San Martín, era aproximadamente de 4 kilómetros. El cuerpo estaba como a 200 metros desde la salida del asentamiento Santa Julio hacia Curacautín. Lamentablemente todas las personas que pudieran haber aportado algo y que en ese momento vivían en el asentamiento, están fallecidas.

a.19. Pedro Juan Muñoz Yañez: En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 1991, de fs. 834 (Tomo III) expone que efectivamente fue campero en el fundo de René Pertuzé, llamado "San Manuel", lugar que actualmente es asentamiento en parte. Este campo fue objeto de una toma de la cual él fue parte y ahora es dueño de una parcela. Cuenta que cuando era campero, en una oportunidad se encontraba campeando animales dentro del fundo, por la orilla del camino público, frente al asentamiento Santa Julia y de pronto vio un hombre muerto, el cual estaba parado, afirmado en una estaca, como colgando de alambres, aunque no se acercó a él supo que estaba muerto pues al silvarle a los perros, se acercaron al cuerpo y este no se movió. Asevera que él no quiso meterse en nada y que como el cuerpo estaba en el camino público no le importó. Además era algo delicado. Al día siguiente pasó por el mismo lugar y el cadáver ya no se encontraba ahí.

a.20. Armando Hernán Etter González: En declaración policial de fecha 9 de abril de 2016, a fs. 484 a fs. 485 (Tomo II) Precisa que para el año 1973, se encontraba destinado en la 5° comisaría de Curacautín, como guarda almacén y encargado de la sala de armas. Unidad que se encontraba a cargo del capitán Gustavo Zúñiga, siendo secundado por el Teniente Sanhueza, contando esta unidad con aproximadamente treinta funcionarios, entre los que menciona Ortiz, Salgado, Del Valle, Padilla, Riquelme y Mardones. En cuanto al caso de Julio San Martín, recuerda que llegó detenido una persona con su nombre. Nunca

lo observó personalmente, solo sabía que era comunista, quien permaneció varios días detenido en el calabozo. También observó que a San Martín lo quemaban con cigarrillos por carabineros, entre los cuales recuerda al cabo Tolosa, Riquelme, el carabinero Ortiz y al teniente Sanhueza. Mientras San Martín estuvo detenido, los comentarios en la unidad eran de que como se podía dañar tanto a una persona, no lo alimentaban y en los registros señalaban que lo dejaban en libertad y a la noche lo volvían a detener, de lo cual debió haber tenido conocimiento el personal de guardia. Posteriormente se comentó que a San Martín lo encontraron muerto en el campo, específicamente en un asentamiento del cual no recuerda nombre. Concluye su declaración señalando que los funcionarios comentaban que a San Martín lo habían matado pero se desconocía quiénes, solo se podía pensar que había sido el grupo encargado de las detenciones políticas, en los cuales participaban los anteriormente señalados.

En declaración judicial de fecha 5 de mayo de 2016, a fs. 492 a fs. 493 (Tomo II) Ratifica su declaración prestada ante la PDI, de fecha 9 de abril de 2016. Anexa que en esa época se dedicaba a labores como encargado de armamento y guarda almacén de vestuario, en una oficina que estaba ubicada al costado de la entrada de la comisaría y al lado de la central de compras. Relata que un día, cuando se disponía a salir por la cocina, que tenía vidrios hacia la sala de armas, vio por la ventana que había unos 6 o 7 carabineros entre los que se encontraba el teniente Sanhueza, quienes rodeaban a un detenido que imagina que era Julio San Martín, observó que el teniente Sanhueza le colocaba un cigarrillo encendido en el cuello, por lo que no salió al patio. Fue la única vez que vio a San Martín y por comentarios se enteró que se trataba de él. Esto ocurrió en el patio de la unidad, en una pérgola que había en ese lugar. No recuerda quiénes eran los otros funcionarios que estaban con el teniente Sanhueza, pero presume que eran los que siempre participaban con este en detenciones por motivos políticos. Ante la pregunta del tribunal, contesta que los que siempre estaban en la comisaría eran el marenga, el practicante, el peluquero, el escribiente, radio operador, central de compras, quien declara, entre otros. Sus labores se debían realizar en el recinto de comisaría, por ese motivo siempre estaban ahí. Asevera que casi todos en la unidad sabían que San Martín estaba detenido siendo torturado, que lo quemaban con cigarrillos, lo ingresaban en los libros de libertad por la mañana y en la noche lo ingresaban como detenido nuevamente. Se imagina que la mayoría de los funcionarios oriundos de Curacautín conocían a San Martín. Recuerda que en alguna oportunidad, mientras estaba en su oficina algunos funcionarios iban y le decían "oye chico, fijate que están haciendo esto

(con el detenido) y le llevé comida". No recuerda quiénes eran quiénes se lo comentaron, pero así fue. Era tema lo que pasaba con Julio San Martín. Continúa su declaración afirmando que en la comisaría había un grupo que se dedicaba a practicar detenciones de índole político, la que estaba a cargo del teniente Sanhueza, integrado por funcionarios de confianza, entre ellos Gerardo Toloza, del Valle, Padilla, Salgado, Ortiz y tal vez Roberto Leal, pero no está seguro. Ante la pregunta del tribunal, dice que Domingo Pirce era del almacén de vestuario y estaba encargado de las órdenes judiciales, haciendo también servicios en la población. En cuanto a los funcionarios de apellido Torres, recuerda a Torres Osses, quien era ayudante de él en el almacén, pero él también hacía servicios en la población. Suma que Juan Marileo trabajaba en la oficina de partes, por lo que debería saber que Julio San Martín estuvo detenido y que Pedro Romero era el conductor oficial de la comisaría, por lo que en el evento que el Teniente Sanhueza hubiera salido a hacer alguna detención, debería haber ido con el chofer. El Tribunal le lee la declaración que rola de fojas 345 a fs. 347. El deponente señala: "No me acuerdo que lo haya ido a buscar a su casa el 11 de septiembre. Tal vez sucedió así, porque supe que tuvo un problema antes de esa fecha, pero no recuerdo lo que relata" Luego añade que es efectivo lo que relata Luis Ortiz en el sentido de que junto a Peñailillo y Romero eran los funcionarios autorizados para conducir vehículos. El deponente afirma no haber sido parte del grupo de Sanhueza ni haber participado en detenciones por motivos políticos. No recuerda lo que relata Ortiz, en relación a que le habría comentado fuera de la comisaría que Julio San Martín estaba detenido dentro de la unidad, expresa que a lo mejor se lo dijo y le conversó, porque era tema de todos los funcionarios de la unidad. El encartado realiza un croquis a mano alzada de la Comisaría de Carabineros de Curacautín del año 1973. El Tribunal ordena agregarlo al proceso.

a.21. Gustavo Fernando Zúñiga Duarte: Declaración judicial de 29 de noviembre de 1991, fs. 837 a fs. 838 (Tomo III). Apunta que para 1973, era mayor Comisario de carabineros en Curacautín y después del 11 de septiembre se le asignó el cargo de gobernador, independiente del cargo de Comisario. Cuenta que en ese año se procedía a la detención de personas, por órdenes de superiores. Estas detenciones se efectuaban contra de personas que se consideraban agitadoras, las cuales solo duraban unos días, lapso en que se averiguaban sus antecedentes para luego ser liberadas. Consultado sobre el caso en concreto, señala que Julio San Martín efectivamente estuvo detenido en la Comisaría a su cargo, persona que recuerda por la fotografía que se le exhibe el cual era dirigente comunista. Este estuvo detenido una vez y luego fue liberado, ya que las

detenciones eran de carácter preventivo para evitar la agitación de masas. Con respecto a la desaparición de San Martín, colige que nada le consta ya que su labor era propiamente de gobernador y no participaba ni salía a patrullajes, solo en una oportunidad fue al sector de Manzanar con personal a su cargo porque se había escuchado comentario de la existencia de una escuela de guerrillas. En cuanto a las detenciones, esas se practicaban por el teniente Sanhueza con su personal rotativo. Hace presente que ese Teniente nunca le rindió cuenta sobre las detenciones, es decir, la cuenta se rendía en sí, pero en ella nunca se le informó sobre la detención de Julio San Martín. Por último deja constancia que en esa época iban a Curacautín personal militar y de aviación y procedían a detener a ciudadanos en la vía pública, sin darle cuenta a él de nada

a.22. Santiago Medina Lagos: En declaración policial de fecha 10 de abril de 2018, a fs. 856 a fs. 857 (Tomo III) Expresa que ingresó a carabineros en 1965, siendo destinado a la 5° comisaría de Curacautín. Para 1973 era parte de la unidad en Curacautín, la que se encontraba a cargo del mayor Gustavo Zúñiga, secundado por el teniente Sanhueza, además de los funcionarios Pian, Bascur, Pirce, Torres, Ortiz, Olivos, Saavedra Vergara, entre otros. Consultado acerca de la víctima Julio San Martín, aclara no tener ningún conocimiento respecto a su detención, solo recuerda que por rumores se enteró que su cadáver permanecía tirado a un costado del camino hacia Lautaro, frente al asentamiento Santa Julia, ignorando quién tomo el procedimiento con el cuerpo. Por último, indica que el funcionario a cargo de los detenidos políticos era el teniente Sanhueza, quien mantenía a estos detenidos en el patio y posteriormente eran entregados a los militares.

En declaración judicial de fecha 13 de junio de 2018, a fs. 869 a fs. 871 (Tomo III) ratifica su declaración que rola a fs. 856 a fs. 857. Respecto al rumor acerca de que el cadáver de San Martín se encontraba a un costado del camino hacia Lautaro, fue algo que escuchó en la comisaría de Curacautín, ya que era un comentario generalizado ahí. El deponente indica que lo que debió ocurrir es que se le diera cuenta al juez para que este diera la orden de levantar el cuerpo, para posteriormente haber sido enviado al Servicio Médico Legal. No sabe si las jefaturas de la unidad adoptaron este procedimiento y tampoco tuvo conocimiento que la familia de San Martín haya realizado gestiones en la unidad para levantar su cadáver. Continúa su declaración indicando que quienes estaban a cargo de los detenidos en la unidad eran carabineros pertenecientes al SICAR, liderados por Teniente y el Mayor de la unidad. Recuerda al Sargento Hugo

Riquelme y Luis Celis como parte de este grupo. El tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de Armando Etter, a fs. 492 y sig., a lo cual indica que supo que San Martín estuvo detenido en la Comisaría de Curacautín y cree que fue por su militancia, pero nunca tuvo conocimiento de los apremios sufridos por San Martín como lo relata Etter. Recuerda a Peñailillo y Romero como conductores de la unidad. Dice saber que a los detenidos los mantenían en la unidad y que luego llegaba personal de Ejército o de la aviación y se los llevaban. De las personas mencionadas por Etter en su declaración, solo recuerda que Riquelme participaba en el SICAR. Por otro lado, declara que el personal que detuvo a San Martín fue utilizado por el teniente, seguramente por orden del Mayor. Supo que este personal sacó a Julio del cuartel en la noche y lo condujeron hacia el lugar donde apareció muerto. Quienes participaron de esta ejecución fueron Pirce, Luis Ortiz y Torres Osses. Recuerda que ellos comentaron que se lo llevaron a un puente, y lo lanzaron al río o él se lanzó, y en ese momento le dispararon. De ahí lo habían dado por muerto, pero después apareció en el camino y la gente que viajaba en los buses lo vio. Todo lo relatado anteriormente lo sabe ya que el mismo grupo lo comentó en la unidad y fue de conocimiento de todos. Dice desconocer lo que pasó con el cuerpo posteriormente y no recuerda que Del Valle haya participado en ese hecho, pero insiste en que está seguro que Pirce, Luis Ortiz y Torres Osses fueron quienes participaron de la detención y ejecución de Julio San Martín. Aclara que este fue el único hecho de esta naturaleza del cual se enteró y que todos deberían conocer lo que pasó con Julio San Martín. Finalmente indica que no tendría problemas en ratificar esto frente a los carabineros que mencionó, pero tiene temor de que su familia se vea perjudicada o amenazada.

a.23. Ramón Olivos Bascur: En declaración judicial de fecha 4 de mayo de 2018, de fs. 860 a fs. 861 (Tomo III) atestigua que ingresó a carabineros en 1969, siendo destinado a la 5° comisaría de Curacautín, donde permaneció hasta 1975. Esta comisaría se encontraba a cargo del Mayor Zúñiga, siendo secundado por el Teniente Adrián Sanhueza, además de los funcionarios Saavedra, Ortiz, Sargento Primero Pirce, Carlos Lacoste y otros que no recuerda. Luego del año 1973, su labor principal era la de realizar servicios en la población, guardias y vigilancia a detenidos políticos que se encontraban al interior de la unidad. Respecto a esto último, indica que al interior del cuartel siempre permanecían como 16 detenidos políticos entre los cuales recuerda a una persona de INDAP de apellido Fritz. A estos detenidos los interrogaban Sanhueza y el mayor Zúñiga y participaban los Carabineros que se encontraban en el cuartel además de personal militar que estaba apostado ahí. En cuanto a los

interrogatorios, nunca participó de ellos, ya que su presencia era mal vista en la unidad, ya que en el gobierno de Allende, fue guardaespaldas de Fidel Castro en su visita a Chile lo cual lo dejó marcado. Sobre un presunto grupo especial, aclara que no había tal grupo, solo que los más cercanos a Sanhueza eran Pirce, Torres, hermanos Padilla y Ortiz, los que frecuentemente lo acompañaban en las detenciones. Consultado sobre Julio San Martín, señala que lo conoció y le tenía un gran afecto, ya que él le reparaba el calzado institucional. A este lo vio detenido en la unidad por unos días y se acercó a darle un trozo de pan. En los días posteriores ya no lo volvió a ver y por comentarios en la guardia, escuchó que lo habían fusilado en el puente Cautín, no especificaban quién lo había hecho, pero sí era alguien de la unidad. Posterior a eso, apareció el cadáver de San Martín en el camino frente al asentamiento Santa Julia. De igual forma, por rumores se escuchó que Carabineros se trasladó a ese lugar haciendo desaparecer el cuerpo, quedando como historia que había sido introducido al interior del ojo de un río y tapado con piedras. Sobre quiénes son los responsables de la muerte de San Martín, no tiene certeza pero presume que fue Sanhueza y su personal más cercano.

En declaración de fecha 26 de julio de 2018, a fs. 906 a fs. 910 (Tomo III) ratifica su declaración prestada ante la PDI, que rola a fs. 861 y sig. Señala que fue amenazado de muerte por defender a San Martín, cuando este estuvo detenido. Dice que no había motivos para detener a Julio, ya que era una persona tranquila. Cuenta que a San Martín lo tuvieron detenido en un calabozo junto a otros detenidos. En seguida se refiere a las declaraciones de Armando Etter, que rolan de fs. 492 y sig., indicando que desconoce si a San Martín lo quemaron con cigarrillos, pero sí es cierto que los tenían en los calabozos, sin poder moverse, ni sentarse y tampoco le daban comida. No recuerda que su familia lo haya visitado en la Comisaría, pero recuerda que la víctima comentaba que tenía a su madre enferma ese día. Recuerda que había un subteniente de Ejército de apellido Valenzuela quien le señaló que el teniente Adrián Sanhueza lo quería fusilar, por lo que increpó a este y le preguntó el por qué, a lo cual no supo darle respuesta. El deponente profundiza acerca de la situación de los detenidos en la unidad, detalla que estos eran llevados a las caballerizas y torturados individualmente. Tenían un teléfono con magneto que producía energía y se lo colocaban en el pene, lo cual se lo comentó Roberto Padilla, que era uno de los funcionarios de la unidad. Además, el teniente y el mayor comentaban lo que sucedía y se jactaban de ello. A la pregunta del tribunal, responde que Pirce, Torres, Ortiz, Toloza y el más viejo de los Padilla en edad eran los más cercanos a Sanhueza. Aclara que el Torres a

que se refiere **es Torres Osses**. Luego comenta algunos casos de los que tiene conocimiento. El tribunal le lee, en lo pertinente la declaración de fs. 869 y sig., a lo cual responde que desconoce si los carabineros Riquelme y Celis pertenecían al SICAR. También señala que es efectivo lo que señala Medina en cuanto a Julio San Martín, que funcionarios de la unidad lo habrían llevado a un puente y lo ejecutaron. Dice que fueron funcionarios de Carabineros de Curacautín, no de otra unidad. Dice que esto era un comentario en la unidad, una especie de estrella que se anotaba el Teniente por haber hecho eso. Indica no recordar a quiénes se atribuía lo realizado con Julio San Martín, que no le constan los nombres señalados. Solo sabe que Julio San Martín estuvo detenido en la unidad, un día llegó y este ya no estaba y Roberto Padilla le contó que lo habían matado. Respecto a las torturas que se les aplicaba a los detenidos, informa que el Teniente las realizaba con un grupo de 5 o 6 personas. Menciona a Pirce, el cabo Toloza, Ortiz como los funcionarios de confianza del Teniente y que ellos pudieron haber participado en esas cosas. Hace presente que en esa época había mucho consumo de alcohol en la unidad, Roberto Padilla le contaba que después que los Carabineros tomaban alcohol, iban a hacer sus fechorías. Añade que Fritz le contó que lo llevaron para fusilar y no le apuntaron. Respecto a Ortiz, menciona que siempre se desempeñó en la unidad, activamente, vestido con uniforme. No recuerda que este se haya vestido de civil después del 11 de septiembre de 1973. Menciona a Viñuela, Vidal, COulon como personas de dinero que denunciaban a sus trabajadores y entregaban regalos a Carabineros, así como también lo hacía Rolando Abarzúa, quien era amigo del Teniente Sanhueza. Refiriéndose a los dichos de fs. 53 y sig., de Galvarino Molina, indica que coincide en general con lo que el deponente relató en cuanto que Carabineros de Curacautín ejecutó a San Martín. Sobre los nombres que Molina menciona, esto es, Ortiz y del Valle, dice que ellos eran muy “yuntas”, aunque no le consta al deponente que hayan tenido participación en el hecho, pero Ortiz era muy cercano al teniente Sanhueza, incluso pertenecían a un club de huasos. Cree que el grupo más cercano al Teniente eran quienes podrían saber lo que sucedió con Julio San Martín. Por último hace presente que ese tiempo había dos funcionarios que conducían micros hacia Curacautín - Lautaro. Uno de ellos era Fernández y el otro Pinoleo, quien era rubio y vivía en Temuco. La empresa de buses tiene entendido que era Igi Llaima.

b. DOCUMENTOS (8)

b.1. A Fojas 22 (Tomo I) Oficio del departamento control de fronteras, informando que revisados los archivos del Dpto. de control fronteras dependiente de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, desde el 01 de septiembre de 1973 a la fecha, Julio San Martín San Martín no registra movimientos migratorios.

b.2. A Fojas 25 (Tomo I) Oficio de la Municipalidad de Curacautín, informando que revisados los libros de sepultación desde septiembre de 1973 a la fecha, no se registra la sepultación en el Cementerio Municipal de Julio San Martín San Martín.

b.3 fs. 142 a 143 (Tomo I) Fotocopia simple de la página 384, del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en la que consta la calidad de víctima de violación de los derechos humanos de Julio San Martín San Martín.

b.4 A fs. 144 a 198 (Tomo I) Fotocopia simple del informe individual para resolución del consejo de la víctima Julio San Martín San Martín, elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que en sus conclusiones señala que “de los antecedentes existentes, es razonable concluir que Julio San Martín sufrió graves violaciones a sus Derechos Humanos. Que dicha violación probablemente esté vinculada a su militancia y los cargos directivos que detentó en un partido de izquierda. Que su desaparecimiento se debió a la actuación de agentes del Estado, específicamente miembros de los cuerpos armados. No existiendo un informe oficial, que explique con verosimilitud circunstanciada el paradero, destino y suerte del detenido, y siendo los agentes aprehensores las últimas personas que le vieron con vida, existe convicción moral que esta persona fue víctima de la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas y que los actos en referencia comprometen la responsabilidad del Estado.”

b.5. Escrito de solicitud de nombramiento de curador de ausente, a fs. 171 a fs. 172 (Tomo I). Expone en ese escrito que ella es cónyuge de Julio San Martín. Que para el día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por efectivos de Traiguén, luego de 10 días fue liberado. También señala que el 29 de septiembre de 1973, su cónyuge también fue detenido por carabineros de Lautaro. Al día siguiente de su detención, ella efectúa diversas averiguaciones para obtener resultados acerca del paradero de su cónyuge, sin resultados.

b.6. Escrito de denuncia de presunta desgracia, a fs. 173 a fs. 175 (Tomo I): Expone en ese escrito que ella es cónyuge de Julio San Martín. Que para el día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por efectivos de Traiguén,

luego de 10 días fue liberado. También señala que el 29 de septiembre de 1973, su cónyuge también fue detenido por carabineros de Curacautín. Previo a ese hecho, San Martín estaba en Curacautín con el objetivo de visitar a su madre, la que supuestamente estaba enferma. San Martín se enteró de ello por un telegrama aparentemente falso, por lo que solicitó un salvoconducto, el que fue concedido. Al día siguiente de su detención, ella efectúa diversas averiguaciones para obtener resultados acerca del paradero de su cónyuge, sin resultados.

b.7. A Fojas 718 (Tomo III) Oficio del Dpto. de Derechos Humanos de Carabineros el que remite hojas de vida y fotografías de funcionarios de la Quinta Comisaría de Curacautín (a fs. 721 se ordena formar cuaderno separado) entre las que se encuentran las correspondientes al Sargento Segundo José Tomas Torres Osses.

b.8. A fojas 1370 a 1373 (Tomo IV) Informe pericial psiquiátrico N° 29-2020, elaborado por el departamento de salud mental del Servicio Médico Legal de la Región de la Araucanía, respecto de José Tomas Torres Osses, quien en sus conclusiones señala que se trata de un hombre sin alteración de juicio de realidad; Con un nivel intelectual normal; Con sus funciones corticales superiores conservadas; Niega participación en los hechos por los cuales está siendo Procesado; No presenta alteración mental ni patología que le impida enfrentar un proceso legal.

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes aquilatados y relacionados generales y específicos testigos directos, indirectos, documentos y peritajes antes señalados como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 1.408 a fs. 1.414 (Tomo IV)** de 10 de junio de 2020, es posible ponderar, que efectivamente el acusado **José Tomás Torres Osses**, para el 11 de septiembre del año 1973 pertenencia a la dotación de la 5° Comisaría de Curacautín y junto a otros efectivos de Carabineros procedió a la detención, secuestro y participación también en los apremios ilegítimos de Julio San Martín San Martín, tal como se detalla en las letras **B** a **E** del auto acusatorio antes indicado. Todo lo anterior ha sido acreditado en esta sentencia.

D. EN CUANTO A LA DEFENSA

11°) A fs. 1.891 a 1.907 (Tomo VI), con fecha 22 de noviembre de 2021, el abogado Alexander Schneider Oyanedel, en representación de Jose Tomas Torres Osses en lo principal de su escrito contesta la acusación fiscal y

acusación particular exponiendo los hechos, circunstancias y consideraciones que acreditan la inocencia de su representado solicitando la absolución de su defendido y, en caso de condenar, se proceda a la recalificación de homicidio simple y no calificado. En subsidio de todo lo anterior, solicita se considere la conducta del acusado revestida de tres atenuantes, se le rebaje en definitiva la pena impuesta en hasta 3 grados y se le otorgue la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, o la que en derecho corresponda, por cumplir los requisitos legales. Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

I. Contestación: Expresa que en la ponderación de los medios de prueba realizada en las Acusaciones, se ha producido un yerro en desmedro del procesado, toda vez que no fueron considerados los medios de prueba de manera completa ni correcta, para establecer no sólo lo que perjudica al suscrito, sino también, lo que lo beneficia. De igual manera señala que las infracciones cometidas llevaron a conclusiones erróneas, para presumir hechos inexistentes o diferentes y que sin ellos, debió haberse llegado a una conclusión distinta en el sumario, en cuanto la ocurrencia de los hechos, la gravedad de los mismos, su calificación jurídica, las justificaciones y atenuantes concurrentes y la sanción penal propuesta. A continuación, detalla errores cometidos en la Acusación Fiscal:

1. DUDA RAZONABLE SOBRE LOS DELITOS Y PARTICIPACIÓN CULPABLE.

Asevera que del análisis "objetivo" de las declaraciones de los testigos que obran en esta causa, se plantean válidamente serias dudas respecto de la "presunta" participación del acusado en la ocurrencia de los hechos que fundan la acusación. A continuación la defensa analiza las declaraciones de 23 testigos (Inés Aedo Lara; Enrique Fernández Ibañez; Hernán Cías Cares; Gladys Escalona Leiva; Gladys San Martín San Martín; Gustavo Weisse Abarzúa; Luis Herrera Castillo; Luis Ortiz Novoa; Orlando Salazar Astudillo; Ramón Olivos Bascur; Santiago Medina; Hernán Etter Gonzalez; Galvarino Molina; Gerardo Toloza Ulloa; Enrique Yañez Illanes; Arnulfo Rivas Mena; Benedicto Narvaez Valenzuela; Edgardo Vergudo; Miguel Merino Gajardo; Héctor Mardones Cárcamo; Mercenario Torres Troncoso; Bartolomé Gutiérrez Gutiérrez; Berta del Carmen Contreras) más la declaración del acusado ante el servicio médico legal, señalando, en resumen, que no aportan antecedentes para presumir la existencia del hecho punible y/o la participación culpable de su representado.

2) CONCLUSIÓN SOBRE LOS DELITOS Y PARTICIPACIÓN DEL PROCESADO EN LOS DELITOS ACUSADOS.

Explaya que durante la presente investigación, que se extiende por más de 40 años, han declarado 24 testigos aproximadamente, todos de oídas, realizando los siguientes aportes al esclarecimiento de los hechos:

2.1). ABSOLUCIÓN POR SECUESTRO SIMPLE.

Argumenta que del relato de los integrantes de Carabineros, se puede concluir que en la Comisaría de Carabineros de Curacautín había un grupo cercano y de confianza al teniente Sanhueza, que era el que se dedicaba a practicar detenciones políticas, sin que el acusado formara parte de ella. Agregando que del relato de cada uno de estos testigos se puede descartar absolutamente la participación del acusado, de la misma forma, se puede aproximar cuántos carabineros integraban el grupo y sus identidades. Concluye que de la simple sumatoria de nombres señalados por los testigos, muchos por comentarios, se pueden señalar una lista de nombres o apellidos entregados, y el número de nombramientos de que fueron objeto por los testigos en cada caso, los que detalla. La defensa expresa que analizados todos los nombres de carabineros integrantes del grupo de detenciones políticas a cargo del Teniente Sanhueza, se puede concluir que ninguno de los 24 testigos señaló nunca al acusado José Torres Osses, como integrante del grupo de detenciones políticas. Que del mismo modo, de lo declarado por el testigo carabinero Benedicto Narvaez, se puede concluir que de los 3 carabineros de apellido Torres que laboraban en la 5ta Comisaría de Curacautín, los otros dos fueron nombrados en este grupo de detenciones al menos por éste testigo, pero nunca su defendido José Torres Osses. Con todo, asevera resulta imposible presumir fundadamente que su representado haya formado parte de este grupo de detenciones políticas del Teniente Sanhueza, si durante 40 años y luego de la declaración de al menos 24 testigos, nunca fue mencionado, por lo que resulta de toda lógica concluir entonces que el cabo Torres Osses no formaba parte del grupo de confianza del Teniente Sanhueza, ni hacía detenciones políticas, y, por lo mismo, no debió haber participado en el supuesto secuestro y posterior ejecución del sr. San Martín. Menos por su bajo cargo de Carabinero y su función de ayudante del jefe de almacén.

2.2). ABSOLUCIÓN DE APREMIOS ILEGÍTIMOS.

Indica que durante toda esta investigación sólo existe un testigo presencial de los apremios ilegítimos aplicados al señor San Martín, quién es, Hernán Etter González. Este señor señala que vio por la ventana cuando era quemado con cigarrillos por el teniente Sanhueza, y, que, los carabineros presentes (sin participación activa) eran Toloza, Riquelme y Ortiz. Y, A la pregunta directa sobre la participación de Torres Osses, contesta que la descarta, agregando que él era su ayudante en el almacén y hacía servicios en la población, sin atribuirle participación alguna en estos hechos. Es decir, Etter descarta expresamente la participación de Torres Osses en los apremios imputados. Y, no hay ningún otro relato en autos sobre aquellos. Por esta razón, alega que el acusado también debe ser absuelto de este delito.

2.3). ABSOLUCIÓN DEL HOMICIDIO DE SAN MARTÍN.

Afirma que para determinar los posibles autores del homicidio de San Martín, hay que precisar los siguientes aportes de los 24 testigos de oídas que han declarado en autos:

2.3.1) Posibles autores: De los 24 testigos de oídas entrevistados en estas 4 décadas, sólo 5 señalaron nombres de carabineros que habrían detenido o ejecutado a San Martín. Estos 5 testigos de oídas señalaron que, por diversas razones indirectas, se enteraron de quienes habrían participado en la detención y/o ejecución, otorgando entre todos ellos el nombre de 12 carabineros de la 5ta Comisaría de Curacautín como posibles autores. Detalla la forma en que estos testigos señalaron los nombres de los carabineros, extendiendo su análisis en el testigo Santiago Medina. De su análisis realizado concluye que, en total hay 12 carabineros señalados como autores de la detención y/o ejecución de San Martín. De ellos, los nombres que más se repitieron 4 y 3 veces fueron Ortiz, Toloza, Pirce y Salazar, en ese orden, y luego los otros, 1 sola vez cada uno. Y, que, de los 12 carabineros señalados por los testigos referidos, 7 fueron nombrados 1 sola vez, y, finalmente que, entre ellos se encontraba justamente su defendido José Torres Osses. Se pregunta “¿por qué no fueron procesados ni menos acusados, los funcionarios más señalados como autores de la detención y ejecución de San Martín?” E indica que no resulta lógico presumir la participación culpable de Torres Osses como autor del secuestro y homicidio de San Martín. Mas cuando, el testigo Santiago Medina, sólo declaró en autos el año 2018, 45 años después, y en menos de 2 meses, hace 2 declaraciones diametralmente distintas, aseverando en la primera que no tiene antecedente alguno, y, en la segunda entrega los nombres de

3 autores. Añade que su relato es muy poco consistente, pues no entregó detalle alguno del lugar, la forma y la fecha en que habría escuchado la confesión de los funcionarios, sin dar razón entonces de sus dichos. Agrava lo anterior, cuando asevera en su segunda declaración, que se corrió el rumor, luego se generalizó y fue de conocimiento de todos, y así se enteró él. ya que, si fuera cierto lo aseverado, tendríamos entonces varios testimonios en dicho sentido por parte de todos los funcionarios de la unidad que han declarado en autos. Igualmente, cobra relevancia para dudar de los dichos de Santiago Medina, el hecho de que durante la investigación se acumularon testimonios directos que descartaron 100% toda participación de su representado en los grupos de detenciones políticas.

2.3.2). Testigos que descartan la participación de Torres Osses: Menciona a Inés Aedo Lara (cónyuge de San Martín), Enrique Fernández Ibañez (chofer del bus), Luis Ortiz Novoa (carabinero) y Hernán Etter González (carabinero).

2.3.3) Conclusión sobre la presunta participación culpable del acusado: Asevera que la acusación de José Torres Osses resulta desproporcionada a la luz de todos los antecedentes analizados. Lo anterior, ya que, de un análisis objetivo de los mismos procede descartar razonablemente su participación culpable por no formar parte del grupo que hacía las detenciones políticas. Y, toda vez que de los 24 testigos de oídas que señalaron a 12 carabineros como posibles autores, sólo uno de ellos lo menciona directamente en una segunda declaración, diametralmente diferente de la primera prestada 2 meses antes, y sólo en virtud de un rumor generalizado dentro de la Comisaría, que además no es corroborado por ningún otro funcionario policial de la unidad de Curacautin. Todo lo anteriores, más cuando, la participación de Torres Osses es descartada expresamente por otros funcionarios policiales. Finalmente, añade que si en la acusación se hubieran considerado de manera completa los medios de prueba señalados por esta defensa, no sólo en lo que perjudicaba sino también en lo que beneficiaba al acusado, se habría descartado su participación culpable.

3) AUSENCIA DE HOMICIDIO CALIFICADO.

Sin perjuicio de la absolución solicitada, en subsidio, y sólo para el improbable caso de dictarse condena por el delito de homicidio, solicita que el hecho sea recalificado a homicidio simple y no calificado. Lo anterior, por no concurrir en la especie las calificantes **de alevosía y premeditación** señaladas en la acusación y acusación particular respectivamente. En cuanto a alevosía, cita al

profesor Mario Garrido Montt. En cuanto a **obrar sobreseguro**, indica que esto se refiere a crear o aprovechar condiciones tácticas que permitan al agente evitar todo riesgo de su persona, como en cuanto a la realización **del** acto al momento de la comisión del hecho. Anexa que puede ser que la situación de seguridad sea **indiferente para** el hechor o deberse a mera casualidad, sin que las condiciones en que obre el hechor sean determinantes en la perpetración del homicidio. De modo tal que, si no hubiera concurrido el autor se hubiera abstenido de obrar. En este caso, no procedería estimarla concurrente, toda vez que no hay propuesta fáctica, ni medio de prueba alguno que permita darla por establecida. En cuanto a la **premeditación**, asevera que tampoco concurre en el caso concreto, toda vez que no existe propuesta fáctica ni medio de prueba suficiente para determinar la planificación previa ni el período de reflexión necesario.

4) CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL.

En subsidio, pide que para el improbable caso de dictarse sentencia condenatoria, se rebaje la eventual pena que se aplique, toda vez que al procesado le favorecen varias atenuantes las que señala:

4.1.) Prescripción gradual o "media prescripción": Tomando en consideración la fecha de ocurrencia de los hechos investigados (1973), y habiendo transcurrido más de 40 años a la fecha del auto de procesamiento (2019), afirma que concurre "objetivamente" a favor del inculpado la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, que constituye una aminorante calificada de responsabilidad criminal, cuyos efectos inciden en la determinación del quantum de la sanción corporal, independiente de la prescripción, con fundamentos y consecuencias diferentes. Cita jurisprudencia al respecto. Del mismo modo, indica que procede se considere la concurrencia de dos atenuantes muy calificadas en favor del acusado, y que, en virtud de lo señalado en las normas sobre determinación de pena del artículo 67 y 68 del Código Penal, se rebaje la pena en el máximo de los hasta 3 grados posibles, tomando en especial consideración que son "muy calificadas", lo que transforma una norma facultativa en imperativa, por dicha circunstancia.

4.2.) Irreprochable conducta anterior: Favorece al encausado la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, por tener irreprochable conducta anterior acreditada en autos, que dice relación con que durante toda la vida del inculpado (más de 70 años) ha mantenido una conducta "absolutamente intachable". Así quedó demostrado en autos, mediante la incorporación del extracto de filiación del

procesado sin condenas de ninguna especie, y mediante documentos acompañados en escrito de 7 de agosto de 2019:

4.3.) Rebaja de grados en la pena eventual: Aquilata que favoreciendo al acusado 3 circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, de las cuales dos de ellas son "muy calificadas", se rebaje la pena en el máximo de los hasta 3 grados posibles, tomando en especial consideración que son "muy calificadas", lo que transforma la norma facultativa en imperativa, por dicha circunstancia.

5) BENEFICIO ALTERNATIVO DE LA LEY 18.216.

Considerando que la pena legal para el hecho atribuido debe ser rebajada en hasta 3 grados, la sanción legal probable para el caso concreto de autos podría ser incluso de presidio menor en su grado máximo, resultando factible que al acusado se le otorgue la libertad vigilada como beneficio alternativo a la pena corporal.

E. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS

12°) Que previo al análisis de las defensas específicas es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

Previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallaran:

A. Obligación de Investigar:

Cabe hacer presente que para la ponderación y alquilación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

1) Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial **una nueva regla que inspire la solución de un caso** que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa

alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, esta debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

2) Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

3) Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.)

La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

4) Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

5) Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

6) Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...) el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un

resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137

(...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233** (...) Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299** (...) Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afinca que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117** (...) Además, es

preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129** (...) una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130** (...) Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente

cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114 (...)** Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo **387.** (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155 (...)** La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156 (...)** el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para

visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo **131** manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con

debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo **77** acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos

logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo **283** añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el

derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Lus Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los

posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

7) Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en

Eduardo Ferrer Mac-Gregor- (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

- i. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida
- ii. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.
- iii. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.
- iv. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.
- v. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

- vi. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.
- vii. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.
- viii. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.
- ix. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.
- x. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.
- xi. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y

elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

- xii.** En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.
- xiii.** La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.
- xiv.** La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

Como puede apreciarse, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al

momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba, ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado que es lo que se ha realizado en esta sentencia y que la defensa nada aporta. Los argumentos de la defensa es como si se tratara de la investigación de un delito ordinario o delincuencia común y sucede que **las defensas tienen que situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los derechos humanos y el delito de lesa humanidad.**

B. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.

1) Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) y **Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

2) Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos,

a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El Tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas.**

Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

3) Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el Tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que,

en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

4) Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”

5) Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias.

Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

6) El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la

complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

7) Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

8) Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del

contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

9) Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado -mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había

prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

10) Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

11) Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

12) Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relacionada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella

deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

13) Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

14) Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho**. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

15) Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

- i. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile **no había Estado de Derecho**. Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.
- ii. Es decir **se retrocedió de inmediato 200 años**, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, **volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias**. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.
- iii. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), **no hubo separación de poderes** (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.
- iv. En este caso entonces **las personas detenidas y llevadas a centro o lugares de detención estaban en una alta indefensión**, como

puede observarse en el patrón de conducta y las causas investigadas por este Ministro.

- v. En este caso, la detención desde el inicio (como indica el mérito del proceso) irregular, ilícita y el posterior secuestro y homicidio calificado, **fue al margen de todo derecho**. Ahora bien, el acusado desde el principio del quiebre constitucional **colaboró con el Régimen Militar** y como han declarado los diferentes testigos y por la estructura jerarquizada de la institución de Carabineros, **tuvo pleno conocimiento de las actuaciones que se realizaban**. Luego, se dan todos los elementos del derecho internacional de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad para que el **acusado tenga el grado de participación de autor**.

C. Estado de Derecho:

1) **Estado Autoritario:** Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (**Oscar Vilhena Vieira** (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (**Dante Jaime Haro Reyes**: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir**

el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (**Pablo Marshall Barberán** (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

2) Origen: El Estado de Derecho nace como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (**Luis Villar Borda** (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (**Haro**, p. 118).

3) Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo:** en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (**Marshall**, pp. 187-188).

4) Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (**Haro**, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están

garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro**, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (**Haro**, p. 126).

5) Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra:** **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

6) Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de

nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la

Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (**Marshall**, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (**Vilhena**, p.30).

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que **las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas**. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. **En este caso entonces las personas detenidas y llevadas a centro o lugares de detención estaban en una alta indefensión**. La detención desde el inicio (como indica el mérito del proceso) irregular, ilícita de Julio San Martín San Martín fue al margen de todo derecho. Nos permite reflexionar que la 5º Comisaría de Curacautín fue un centro ilegal de detención y tortura. En consecuencia, el mando superior y los carabineros respectivos, quienes procedieron a detener a diferentes personas y, en este caso, a Julio San Martín San Martín, efectuando además secuestro y apremios ilegítimos, se encuentran en

condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia.

F. ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS ESPECÍFICAS

13º) Que haciéndose cargo el tribunal de la defensa específica presentada por el abogado Alexander Shneider Oyanedel, a fojas 1891 y siguientes del tomo VI, cabe hacer presente desde ya que, pudiendo haberlo hecho, la defensa en conformidad a la ley no objetó algún testigo o de igual forma no hizo objeciones relevantes a algún documento específico del mérito de la causa.

14º) Que en cuanto al primero punto, titulado “duda razonable sobre los delitos y participación culpable”. Sobre esta materia el tribunal estará al largo análisis de la declaración indagatoria realizada respecto del acusado José Tomas Torres Osses. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal razona en cuanto de la lectura del auto acusatorio de fs. 1.408 y siguientes (Tomo IV) es fácil desprender, como se ha realizado por este tribunal en las 57 sentencias dictadas hasta esta fecha, que por el transcurso de los años y por la cantidad de prueba reunida se realiza un relato histórico y continuado de los hechos que permiten tener un adecuado contexto. Luego de lo anterior el tribunal se sitúa en los hechos precisos indicando la prueba, la foja y el tomo, como se puede observar en las letras A a F del auto acusatorio. En este primer aparte llama la atención que la defensa se dedique a reproducir una serie de declaraciones de diferentes testigos, pero en la prueba específica y más importante en relación a los hechos investigados no realiza el mismo rigor, esto es respecto de los testigos Hernán Cías Cares, Orlando Salazar Astudillo, Armando Etter González, Ramón Olivos Bascur, Santiago Medina Lobos, Galvarino Molina Gatica, entre otros. Por lo que en esta parte el auto acusatorio y el mérito del proceso tiene la consistencia suficiente recordando que con el mismo mérito probatorio la Ilma Corte de Apelaciones confirmó el auto de procesamiento a fs. 1.132 (Tomo IV).

A) Que analizando la declaración judicial de Armando Etter González de fojas 492 (Tomo II) expresa “Un día estando en la cocina me disponía a salir por la puerta de ella - que tenía vidrios- hacia la sala de armas, en ese momento vi por la ventana que había unos 6 o 7 carabineros, entre ellos el Teniente Sanhueza quienes rodeaban a un detenido. Me imagino que era Julio San Martín y pude observar que el Teniente

Sanhuesa le colocó un cigarro encendido en el cuello a esta persona, por lo que no salí al patio. Fue la única vez que vi al detenido y por comentarios yo sabía que era Julio San Martín.” “Casi todos sabían que Julio San Martín estaba detenido en la unidad y lo que le hacían, es decir, que lo torturaban , que lo quemaron con cigarrillos, lo ingresaban en los libros de libertad en la mañana y en la noche lo ingresaban nuevamente como detenidos. Me imagino que la mayoría de los funcionarios oriundos de Curacautín conocían a Julio San Martín, porque esta persona era de ahí.” A diferencia de lo que expone la defensa, no es efectivo que Armando Etter exculpa o excluya al acusado Torres Osses, solo dice que era ayudante en el almacén, además agrega que él también hacía servicio en la población. Por último agrega “Recuerdo a Pedro Pablo Torres Matamala quien era del retén Troyo al parecer. No recuerdo que haya cumplido labores esporádicas en la Comisaría de Curacutín.”

- B)** Ramón Olivos Bascur en declaración judicial de fojas 906 (Tomo III) atestigua “El torres que me refiero en mi declaración es Torres Osses y tengo entendido que aún vive en Curacautín” “Es efectivo lo que señala Medina Lobos en cuanto a que a Julio San Martin lo ejecutaron funcionarios de la unidad, que lo llevaron a un puente y allí lo hicieron. Fueron funcionarios de Carabineros de Curacautín quienes lo realizaron, no de otra unidad. Era un comentario en la unidad, era una especie de estrella que se anotaba el teniente por haber hecho eso”
- C)** Santiago Medina Lobos en declaración judicial de fojas 869 (Tomo III) indica “Quiero agregar que el personal que detuvo a San Martin, ese personal fue utilizado por el Teniente, seguramente por orden del mayor. Esto lo supe por comentarios en la unidad. Supe que este personal sacó a Julio San Martín del cuartel en la noche, en la tarde y ellos lo condujeron hacia el lugar donde apareció muerto. Quienes participaron de esta ejecución eran Pirce, Luis Ortiz, Torres Osses. Estas mismas personas fueron quienes detuvieron a Julio San Martín. Recuerdo que ellos comentaron que lo llevaron a un puente, y el hombre lo lanzaron al río o él se tiró y en ese momento ellos le dispararon. Lo dieron por muerto, pero resulta que después apareció en el camino y ahí la gente que viajaba en los buses lo vió, el hombre estaba a la vista. Todo lo que

estoy relatando lo supe porque el mismo grupo, luego de haber cometido el hecho, lo comentaron en la comisaría, ahí se corrió el rumor, se generalizó en la unidad y fue conocimiento de todos. Ellos cuando llegaron a la unidad contaron lo que había pasado.” “Insisto, estoy seguro que Pirce, Luis Ortiz y Torres Osses fueron quienes participaron de la detención y ejecución de Julio San Martín, tal como he relatado. Ellos mismos los relataron en la unidad y esto fue un comentario generalizado en ella, así me enteré yo y todo el personal.”

Como se desprende, hay mérito suficiente para mantener la acusación y acreditar la participación en los ilícitos antes reseñados respecto del acusado José Tomás Torres Osses. Frente a esta prueba, entre otra que se ha ponderado ¿Es posible que el tribunal la deseche? Desde un punto argumentativo y lógico no existe ningún elemento que permita u obligue al tribunal a desechar esta prueba. Además y esto es importante, la prueba que incrimina directamente al acusado no proviene de un tercero ajeno a la Comisaría o de otros terceros civiles, proviene de los propios integrantes de la 5° Comisaría de Curacautín. Sobre lo anterior, la defensa no obstante la reproducción de múltiples testigos, no tiene ningún elemento para rebatir dentro de muchos otros esta prueba indicada.

15°) Que en cuanto al punto 2 subtítulo “absolución por secuestro simple”:

A) El tribunal se remite a los argumentos antes razonados puntualizando lo siguiente: Del mérito del proceso y de la ponderación de la prueba está plenamente acreditado que la víctima Julio San Martín fue detenida por Carabineros de Curacautín obligándolo a bajarse de un bus. Asimismo que el detenido fue llevado a la Comisaría de Curacautín, donde estuvo detenido y secuestrado. Además el tribunal se remite a los elementos probatorios indicados al analizar la declaración indagatoria de José Tomás Torres Osses, en el considerando 9, del cual se desprende que obviamente hubo un secuestro simple en la persona de Julio San Martín San Martín.

B) Un punto especial que cabe razonar es lo que expone la defensa en cuanto a por qué no se ha procesado a otras personas. El tribunal le recuerda que en los documentos acompañados al proceso de 1033 a

1077(Tomo III y IV) se puede observar que se encuentran fallecidas 43 personas. Además en esta causa fue sometido a proceso el Sr. Ortiz Novoa, pero sucede que se dictó sobreseimiento, no porque no haya participado en el hecho, sino porque el Informe pericial psiquiátrico elaborado por el departamento de salud mental del Servicio Médico Legal respecto de Luis Segundo Ortíz Novoa, concluye que este presenta un deterioro grave de funciones corticales superiores como memoria, atención y enjuiciamiento crítico y no se encuentra en condiciones de enfrentar, ni comprender un proceso judicial ni sus consecuencias. Cabe hacer presente además que la línea investigativa era respecto de las personas que efectivamente participaron en los hechos y no hay ningún antecedente convincente, por los dichos de Santiago Medina, Ramón Olivos Bascur o Armando Etter, que permita al tribunal indicar que tuvieron participación en los hechos Mercenorio Torres o Pedro Pablo Torres Matamala. El primero, porque estuvo muy poco tiempo en la 5° Comisaría y en cuanto al segundo no hay ningún testimonio que diga relación con que este tuvo participación en los hechos. Además, no hay elementos de que estos dos carabineros se hubieran jactado o comentado de haber cometido los apremios, secuestro y homicidio del Sr. San Martín. En todo caso, ha sido un largo proceso revisado varias veces por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco y en esas revisiones la defensa podría haber solicitado múltiples diligencias o que se sometiera a proceso a otras personas y nada de eso realizó.

16°) En cuanto al homicidio calificado:

A) Que cabe razonar que sobre esta materia este Tribunal ya se ha pronunciado acogiendo la alevosía (causas roles 27.525, caso Cayul Tranamil, rol 27.526, caso Palma Arévalo y Saravia Fritz , rol 45.345, caso Tralcal y rol 114.007 caso Contreras Plotsqui) fallos que se encuentran ejecutoriados. En estos autos sí concurre la del Artículo 391 N° 1 circunstancia primera del Código Penal, esto es, la alevosía. En efecto, según el profesor Mario Garrido Montt (Obra El Delito de Homicidio Página 154 y siguientes) es claro que actuar a traición corresponde a la maquinación tendiente a engañar o aparentar ante la víctima una situación diversa a la verdadera, pues la cautela importa reserva, astucia o maña para engañar. Asimismo, importa aprovecharse de la confianza o lealtad

que la víctima ha depositado en el victimario. Es decir, corresponde a simulación, doblez. Por otro lado, obrar sobreseguro, que es la figura que concurre en esta causa, significa crear o aprovechar condiciones fácticas que permiten al agente evitar todo riesgo de su persona, como en cuanto a la realización del acto al momento de la comisión del hecho. Ahora bien, es preciso indicar que en el actuar sobreseguro, puede ser que la situación de seguridad sea absolutamente indiferente para el hechor o deberse a mera casualidad, sin que las condiciones en que obre el hechor – haya o no sido provocadas por él – sean determinantes de la perpetración del homicidio, de modo que, si no hubieran concurrido, el autor a su vez se hubiera abstenido de obrar. En este caso, obviamente que el acusado propició un actuar sobreseguro, donde la víctima no tenía ninguna posibilidad de actuación para su defensa. En consecuencia, si no se hubieran reunido estas condiciones que es obrar sobre seguro y atendido además el contexto de la época, claramente no se hubiera ejecutado a Julio San Martín. Por último, en relación a la premeditación, este Tribunal concordando con la defensa, considera que la agravante del artículo 391 N° 1 circunstancia quinta del Código Penal, resulta muy difícil en este caso para su aplicación, toda vez que no existe certeza para determinar la planificación previa, el período de reflexión, entre otros elementos. En consecuencia el hecho sólo queda como homicidio calificado de Julio San Martín, según el artículo 391 N° 1, circunstancia primera (alevosía) del Código Penal.

B) Que respecto a la ejecución del homicidio calificado de Julio San Martín y la participación del acusado José Tomas Torres Osses, el tribunal estará a lo ya aquilatado lata y ampliamente en forma precedente, razonamiento de los cuales con los múltiples elementos probatorios ponderados en conformidad al mérito del proceso y a la ley en convicción de este tribunal, queda acreditado la comisión del delito de homicidio calificado antes indicado y la participación del acusado, haciendo presente que en conformidad al numeral 6 de la jurisprudencia alemana citada y por el alto compromiso del acusado en su labor en la 5° Comisaría de Curacautín y por la forma en que se detuvo, se secuestró y se ejecutó a Julio San Martín San Martín, no caben actividades neutrales.

G. AGREGACIÓN DE CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE JOSÉ TOMÁS TORRES OSSES.

17°) Que durante el transcurso de la redacción de esta sentencia se agregó con citación a fojas 2.105 (Tomo VI) certificado de defunción del acusado **José Tomás Torres Osses**, por lo que se hace innecesario pronunciarse sobre la acusación particular formulada por la abogada Carolina Contreras Rivera, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fojas 1.474 a 1.480 (Tomo IV), las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y la determinación de la pena. En todo caso, de acuerdo al razonamiento realizado por el tribunal, sí quedó acreditado que de conformidad al mérito del proceso y las ponderaciones anteriores, Julio San Martín fue detenido, fue llevado por agentes del estado a la comisaría de Carabineros de Curacautín, fue objeto de apremios y de secuestro, no pudiéndose finalmente determinar una pena y establecer la responsabilidad definitiva de determinada persona, por haber sido sobreseído parcial y definitivamente a fs. 1.390 el Sr. Ortiz Novoa y por la muerte de José Tomás Torres Osses, procediendo en esta causa a dictarse con posterioridad el sobreseimiento respectivo.

VIII. EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

18°) Que si bien es cierto, que en la parte de la acción penal, en conformidad al artículo 93 del Código Penal, se ha sobreseído parcial y definitivamente al acusado, ello no es óbice para que el tribunal pueda establecer si concurre la responsabilidad civil. En efecto sobre esta materia hay que estarse a lo que el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, en efecto dicho artículo señala que las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo, sólo producirán cosa juzgada en materia civil cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes y enumera 3 causales. La primera, la no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso y agrega que no se entenderán comprendidos en este número los casos en que la absolución provenga de la existencia de circunstancias que eximan la responsabilidad criminal. Segundo: No existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada. Tercero: No existir en autos indicio alguno en

contra del acusado. Como puede desprenderse desde ya, la causal primera estima que no se consideren para producir cosa juzgada en materia civil, los que están exentos de responsabilidad criminal, cuyo no es el caso de autos. De todas formas analizando las tres causales no es posible que la absolución produzca cosa juzgada en materia civil, toda vez que, como se dijo en la parte penal del fallo, está acreditada la existencia del delito, existe relación precisa entre el hecho que se persigue y la persona acusada y hay prueba suficiente en contra del acusado por los hechos cometidos e investigados en esta causa. Por todas estas razones de hecho y de derecho es que este tribunal puede determinar la responsabilidad civil, si esta concurriere, alegada por la parte demandante.

19°) Que a fs. 1455 a 1462 (Tomo IV), en lo Principal de su presentación, el abogado Héctor Méndez Molina, en representación de María Glady San Martín, deduce demanda de indemnizaciones de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, este a su vez representado por Alvaro Saez Willer, solicitando en definitiva condenar al Fisco de Chile a al pago de \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) para María Glady San Martín, por concepto de daño moral; o la suma que el Tribunal determine en justicia, más reajustes de acuerdo al IPC e intereses desde la fecha de notificación de la demanda y las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. EN CUANTO A LOS HECHOS:

Reproduce los mismos hechos ya referidos en el auto acusatorio de fs. 1.408 a 1.414 (Tomo IV) de 10 de junio de 2020, agrega que su representada durante todos estos años ha colaborado de forma constante con la investigación, sin descansar en búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con Julio San Martín San Martín, siendo objeto de burlas y amenazas cada vez que iba a la comisaría del pueblo en busca de alguna información, así como también la estigmatización de tener a su hermano perdido, la pena y sufrimiento que esto conlleva.

B. EN CUANTO AL DERECHO:

1. Derecho a la reparación Integral de las Víctimas: Señala que el derecho de las víctimas y sus familiares sean indemnizados encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su consagración normativa la encontramos en los Tratados

Internacionales ratificados por Chile, obligación que debe cumplir en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política. Menciona que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema rol: 29.167-2019 de 02 de Marzo de 2020 y rol 34.111-2019 de 16 de junio de 2020 respecto del derecho de las víctimas a una reparación íntegra y la responsabilidad de los estados respecto a la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Por último señala a La Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre en su resolución número 60/147, sobre la proporcionalidad entre la reparación y el daño sufrido.

2. Responsabilidad del estado por los hechos descritos: En lo referente a la responsabilidad que tiene el estado en esta materia menciona el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República, señalando que el citado artículo determina que la demanda que se está presentando es más procedente y debería ser acogida, condenando al estado por la responsabilidad que le compete en los hechos descritos. Señala que el funcionario carabinero citado en el auto acusatorio, está ligado al Estado por un vínculo de Derecho Público y que por tanto le es aplicable los artículos 38 de la Constitución (ya citado) y el artículo 4° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

3. La imprescriptibilidad de la acción civil interpuesta: Como ha venido fallando sostenidamente nuestra Corte Suprema tratándose de delitos de lesa humanidad, las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna no son aplicables, fundamenta en base al tratado la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente Fallos de la Corte Interamericana que ha declarado que el artículo 63.1 de la Convención no se remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado y su deber de reparar (Corte I. D. H., caso La Cantuta vs Perú. Sentencia de 29 de Noviembre 2006), fundamentos que han sido sustentados recientemente por la Excelentísima Corte Suprema en sentencias de fecha 04 de septiembre de 2013 causa Rol 3841-12 (considerandos Quinto a Duodécimo); sentencia de reemplazo de fecha 01 de abril de 2014 causa rol 1424-

13 (considerandos 11º y 12º); y sentencia de reemplazo, de 22 de enero de 2020, en causa rol 23.094-2019 (considerando 8º). Termina citando doctrina al efecto.

4. Compatibilidad de la indemnización reclamada con otros beneficios otorgados: Indica que la indemnización de perjuicios pretendida en autos no es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado de Chile, compatibilidad que ya ha sido declarada por la Excelentísima Corte Suprema en sentencias recientes de fecha 04 de septiembre de 2013 Causa Rol N° 3841-12 (considerando Tercero y Décimo Cuarto) y sentencia de reemplazo de fecha 01 de Abril de 2014 Rol N°:1424-13 (considerando 13º) Asimismo, cita sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "García Lucero y otras Vs. Chile", de 28 de agosto de 2013. párrafos. 190 y 192 y la Corte IDH en sentencia caso "Órdenes Guerra y otros versus Chile", de 29 de noviembre de 2018, al excepcionare nuevamente en este caso el Estado de Chile en los cuales señala que se deja en evidencia que los programas administrativos de reparación u otras medidas o acciones normativas o de otro carácter que coexistan con los mismos, no pueden generar una obstrucción a la posibilidad de que las víctimas de realizar acciones en busca de reparación.

5. En cuanto a la procedencia del daño moral demandado: Expresa que la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre en su resolución número 60/147 ha entendido a quienes podemos considerar como víctimas y los alcances que podrían tener en estos términos las personas que busquen algún tipo de indemnización por los daños producidos por agentes del estado. También según legislación Chilena, Las reglas establecidas en los artículos 2314 y 2329 ambas del Código Civil, nos establece que será reparado todo daño en especial en este caso el daño moral es cual es demandado por esta parte. Añade que a partir de los hechos consignados, y que constituyen el fundamento del padecimiento de su representada, es posible concluir que la naturaleza de estos se inserta dentro de los crímenes denominados de lesa humanidad por el contexto en el que ha tenido lugar. Asimismo el Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a la demandante hasta el día hoy, la dolorosa situación a la que se ha visto enfrentada su representada configura claramente un daño moral que según la abundante Jurisprudencia es un daño indemnizable. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, citando para ello a la Corte Suprema, Casación Rol

2.097-2004. Por todo lo anterior, demanda al Fisco de Chile al pago de **\$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos)**, por concepto de reparación íntegra y daño moral, para doña MARIA GLADY SAN MARTIN, hermana de la víctima don Julio San Martín, con reajustes e intereses desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o lo que US. determine, con reajustes e intereses y las costas del juicio.

20°) Que de fs. 1.809 a 1.822 (Tomo V), contesta la demanda civil el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Saez Willer, respecto demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Héctor Méndez Molina (en representación de Maria Gladys San Martín Hermana de la víctima) de fs. 1.455 a 1.469 (Tomo X) en la cual se solicita condena al fisco por indemnización de perjuicios por la suma total de \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), con reajustes de acuerdo al IPC, desde la fecha de notificación de la demanda, más intereses legales y costas del juicio. Esta parte solicita que la mencionada demanda sea íntegramente rechazada, por los siguientes fundamentos:

A. EXCEPCION DE IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACION DINERARIA DEMANDADA, POR PRETERICION LEGAL DE LA ACTORA, Y POR HABER SIDO YA REPARADA:

La indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los derechos humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Acota que la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero. En términos de costos generales para el Estado, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400. Como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto para las arcas fiscales, para que ello fuera viable se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano: esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactorias a éstos últimos. En suma, la pretensión económica demandada es improcedente, porque en la especie existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de causantes víctimas de violación a los derechos humanos, como

beneficiarios de las leyes de reparación. Sin perjuicio de lo anterior, la actora ha obtenido reparación satisfactoria: El hecho de que la demandante no haya tenido derecho a un pago en dinero por la preterición legal no significa que no ha obtenido reparación por el daño sufrido.

Precisamente, en el caso de una persona como la de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica. Además, la actora de autos es titular por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). En suma, y como conclusión, el cúmulo de reparaciones indicadas sean simbólicas o sean a través de programas de reparación, han producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue en el presente juicio. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

B. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

a. Normas de prescripción aplicables: Oponen la excepción de **prescripción extintiva** de las acciones de indemnización de perjuicios deducidas por los mencionados actores con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que por encontrarse ellas prescritas, se rechace la demanda de autos en todas sus partes. Según lo expuesto en la mencionada demanda, el secuestro y desaparición de Julio San Martín se produjo en septiembre de 1973. Es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15 de marzo de 2021, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se

habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

b. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando jurisprudencia nacional al efecto. Advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Adopta que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. La prescripción es una institución de aplicación general en todo ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º del Código Civil). Adopta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción: La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Por ello es posible, sin duda, que la prescripción se produzca son que el acreedor hay recibido lo que le corresponda y sin que hay tenido con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprochar

una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones. En la práctica, lo pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones- que al igual que en la usurpación cumple una función de adquisición y otro de prueba del derecho- es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más su extinción. De esta manera, los planteamientos doctrinarios anteriores nos permite concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas. Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es – en si misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad, ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción. Plantea que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría, si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contracción normativa. En la especie, el ejercicio de las acciones civiles ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia:

- i. Cita la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013. Reflexionando en los diferentes considerando citados 1). Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, 2). Los Tratados Internacionales

invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. 3). Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. 4). Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. 5) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la persona desaparecida.

- ii. Adiciona que, además existen numerosos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en los cuales se ha reconocido expresamente el carácter prescriptible de las acciones indemnizatorias por hechos análogos a los de autos.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se

persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial. En efecto basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos e disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tacita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional: en relación con las alegaciones expuestas por la actora en cuanto a que la acción patrimonial que persíguela reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos no aparecen citados en las demandas de autos, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. En consecuencia, se refiere a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución N°60/147 de 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la Ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se deberán rechazar las demandas de autos, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

C. EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACION RECLAMADA.

En primer lugar, se alega acá que la actora demanda indemnización por el daño moral que, por-repercusión, le habría causado la muerte de don Julio San Martín San Martín, invocando para ello una pretendida calidad de hermana, sin embargo, no existe antecedente alguno que acredite legalmente tener tal calidad, en los términos de los artículos 305 y siguientes del Código Civil. El que la demandante no demuestre la calidad que ha invocado para impetrar indemnización por daño moral, conduce a que, a todo evento, no ostente la calidad de víctima por repercusión y que, por ende, carezca de legitimación activa en la acción resarcitoria que ha ejercitado, por lo que la demanda de autos por ella deducida debe ser íntegramente rechazada.

a. Fijación de la indemnización por daño moral.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. La indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

b. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Esta parte alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos V.S. debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por la actora o sus familiares de parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123 y 19.980) y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

c. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

Alega la defensa que los reajustes e intereses sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Por lo anterior, su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse o a la que deba aplicarse intereses. Añade que el reajuste es un mecanismo económico financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta absurdo pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada. Cita jurisprudencia y finalmente concluye que en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

d. Respecto de las costas de la causa.

Atendido el compromiso del Estado democrático con los DD.HH., incluso yendo más allá de lo que en Derecho le era exigible, asumiendo los costos no solo de la reparación de las víctimas, sino que también de la promoción y conmemoración de los DD.HH. como un eje estructurante de nuestra vida en sociedad, resulta improcedente que se le condene en costas, siendo, además, evidente que, a todo evento, tiene motivo plausible para litigar.

21°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A.** Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de la actora, y por haber sido ya reparada.
- B.** Excepción de prescripción extintiva.
- C.** En cuanto al daño e indemnización reclamadas.

A. Excepción improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de la actora y por haber sido ya reparada:

Se estará a lo ya razonado en las siguientes causas: **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014; **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014; **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015; **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016; **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016; **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016, **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumercindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015; **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016; **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016; **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016; **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016; **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016; **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017; **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017; **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017; **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016; **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017; **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017, **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018; **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020; **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020; **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018; **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018; **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018; y **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. Todos los anteriores

fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

Sobre lo anterior, **estas excepciones deben ser rechazadas.** En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excm. Corte Suprema**, en especial: El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de replazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, *la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile*. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado por el Instituto de Previsión Social: Acompañado de fs. 1.841 a fs. 1.842 (Tomo VI), ORD. N°4792-1357 de 30 de abril de 2021, emitido por el Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa el detalle de pensión de reparación Ley 19.123, en este caso recibido por la señora Inés Aedo Lara,

cónyuge de la víctima, agregando que doña María Glady San Martín, no ha recibido beneficios de reparación en ese Instituto.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También **será rechazada**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol **1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete

grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnización reclamadas:

1. Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma, lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I, artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados,

en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la República Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo**. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de las indemnizaciones reclamadas.

2. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls. Una Teoría de la Justicia**. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

3. Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

4. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año

1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena”* (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio

jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni el Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

5. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia **procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile**.

6. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

- i. **Causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros**, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

- ii. **El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021**, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...*“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “falta de servicio”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”*. En este sentido, en su parte resolutive *“se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”*. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre las indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema

fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia aparece justo y razonable que se otorgue un monto de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a doña María Glady San Martín, y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

E. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

22°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por la demandante civil, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia de los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado en la persona de Julio San Martín, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Testimonios sin tachas y legalmente examinados de **Gustavo Andres Montes Wise de fs. 1.967 a 1.968 (Tomo VI), Paola Andrea González Cárdenas de fs. 1.969 a 1.970 (Tomo VI) y Carlos Fernando Verdugo San Martín de fs. 1.971 a 1.972 (Tomo VI)**, quienes, en síntesis, declaran conocer desde hace años a la demandante civil, en el caso del primero por haber sido su vecino, la segunda por ser nieta de Inés Aedo (esposa de la víctima) y el tercero por ser su hijo. Declaran que conocen y les consta lo vivido por María Glady San Martín y siempre la han visto triste, angustiada y buscando respuesta de lo sucedido con su hermano. Agregan que esta pena y daño psicológico ha estado presente ya 45 años y sigue permaneciendo pues ni siquiera ha podido encontrar el cuerpo de su hermano para darle sepultura.

B. Informe de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) **de fojas 1518 a 1526 (Tomo V)** que contiene documentación sobre los efectos físicos y psíquicos en los familiares de víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Éste informe a modo de conclusión manifiesta que “no obstante las manifestaciones y consecuencias psicopatológicas descritas, no se trata únicamente de cuadros o síndromes psicopatológicos, sino al mismo tiempo de expresiones concretas del conflicto social y político desarrollado en una sociedad determinada, que se manifiesta tanto en el psiquismo individual, como en la subjetividad social. Se

puede apreciar que frente a diversas situaciones traumáticas, la sintomatología y la desestructuración que se observan pueden manifestarse de manera similar. Es preciso enfatizar, que la especificidad radicada en la situación traumática, que en Chile se definió a través de la represión política. Esta transforma el contexto social haciendo amenazador y traumatizante y con un gran potencial destructivo. Incidiendo en las condiciones materiales de la vida concreta, en la sobrevivencia psíquica, y en los significados y valores que constituyen el sentido de la vida de los sujetos”.

C. Informe de la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, **de fojas 1554 a 1707 (Tomo V)** en virtud del cual se adjunta fotocopia los siguientes documentos de trabajo internos elaborados por la Vicaría de la Solidaridad: **a)** Pre Informe Trabajo Diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, de Salud Mental, febrero 1978, 12 p. (Documento de trabajo interno); **b)** Informe Trabajo Diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Programa de Salud Mental, junio 1978, 10 p. (Documento de trabajo interno); **c)** Salud mental: Síntesis del trabajo con niños familiares de detenidos desaparecidos. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Programa de Salud Mental, noviembre 1978, 3 p. (Documento de trabajo interno); **d)** Algunos factores de daño a la salud mental. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Programa de Salud Mental. s.f., 17 p. (Documento de trabajo interno); **e)** Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Victoria Baeza Fernández y otras. Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Asistentes Sociales Departamento Jurídico, abril 1987, s.p. (Documento de trabajo interno); **f)** Algunos Problemas de Salud Mental detectados por Equipo Psicológico Psiquiátrico. Julio 1978, 5.p.+ anexo. (Documento de trabajo interno); **g)** Daño psicológico prolongado de los familiares de detenidos desaparecidos. Situación Emocional de menores, hijos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. (Capítulo IV, Documento sin título, Santiago de Chile, junio 1980); **h)** "Salud Mental y Violaciones a los derechos Humanos". Equipo de Salud de la Vicaría de la Solidaridad, integrado por DR. Andrés Donoso; Dr. Guillermo Hernández; Ps. Sergio Lucero, Autor Responsable: Ps. Sergio Lucero Conus, Junio 1989.

D. ORD.N°91 de fecha 22 de enero de 2021, en virtud del cual el Subsecretario de Derechos Humanos (S) don Luis Catillo Fuenzalida **de fojas 1724 a 1786 (Tomo V)**, adjunta Norma Técnica, para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973-1990

E. Informe del Programa de Reparación y atención integral en salud (PRAIS), **de fojas 1793 a 1795 (Tomo V)** el que remite antecedentes teóricos sobre secuelas en el plano de la salud mental han sufrido los y las familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Chile, cuya génesis está en el régimen militar.

F. Certificado de nacimiento de María Glady San Martín **de fojas 1.465 (Tomo IV)**.

G. Además se encuentra acompañado certificado de nacimiento de la víctima Julio San Martín, **a fojas 20, 29 (Tomo I) y 763 (Tomo III)**, donde consta en conformidad a la ley, la relación de parentesco que tiene con la demandante, pues ambos tienen la misma ascendiente, su madre, Florentina San Martín.

23°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman la actora, provocado por los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín **está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por la actora y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para la actora, por los ilícitos secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado **cometido por los Agentes del Estado, la suma que antes se ha detallado, esto es:**

a) \$150.000.000 (cincuenta millones de pesos), para doña María Glady San Martín.

En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado por el Instituto de Previsión Social: Acompañado de fs. 1.841 a fs. 1.842 (Tomo VI), ORD. N°4792-1357 de 30 de abril de 2021, emitido por el Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa el detalle de pensión

de reparación Ley 19.123, en este caso recibido por la señora Inés Aedo Lara, cónyuge de la víctima, agregando que doña María Glady San Martín, n ha recibido beneficios de reparación en ese Instituto.

24°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

IX. ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N°6 y 9, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 56, 61, 68, 69, 93 N° 1, 141, 150 N°1 y 391 N° 1 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 406 y siguientes, en especial el 408 N° 5, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículo 179 del **Código de Procedimiento Civil**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; Ley 18.575; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I.- Que atendido el certificado de defunción de fojas 2.105 (Tomo VI) del acusado José Tomás Torres Osses, se sobresee parcial y definitivamente esta causa por haberse extinguido la responsabilidad penal en relación a la acusación dictada en esta causa, de fs. 1.408 y siguientes (Tomo IV) respecto de José Tomás Torres Osses.

II.- Que habiéndose extinguido la responsabilidad penal por muerte del acusado, como ya se razonó precedentemente se hace innecesario pronunciarse sobre otras materias atinentes al acusado, como se razonó en el motivo 17.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

III.- Que **NO HA LUGAR** a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en su presentación de fojas 1.809 a 1.822 (Tomo V) esto es:

A. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de la actora y por haber sido ya reparada (*respecto de la demanda civil interpuesta por el abogado Héctor Méndez Molina en representación de María Glady San Martín*).

B. Excepción de Prescripción extintiva, Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

IV.- Que **HA LUGAR** a la Demanda Civil interpuesta por el abogado **Héctor Méndez Molina**, en representación de María Glady San Martín, de fs. 1.455 a fs. 1.464 (Tomo IV), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto de los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado en la persona de **Julio San Martín**, la suma de **\$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos).

V.- La suma anterior deberá ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile, por haber sido totalmente vencido.

Habiendo fallecido el acusado, notifíquese esta sentencia personalmente o por cédula a su abogado Alexander Schneider Oyanedel, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad. Asimismo elévese en **consulta el sobreseimiento** de fs. 1.390 (Tomo IV) de fecha 15 de abril de 2020.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 18.872.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Itma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a veintiocho de julio de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (ccv).